



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXXIV - N° 686

Bogotá, D. C., martes, 13 de mayo de 2025

EDICIÓN DE 35 PÁGINAS

DIRECTORES:

DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO GENERAL DEL SENADO

www.secretariasenado.gov.co

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA

SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA

www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA

PONENCIAS

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN LA COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 291 DE 2023 CÁMARA – 414 DE 2025 SENADO

por la cual se adoptan medidas de protección para personas naturales frente al reporte o denuncia de presuntos actos y/o hechos de corrupción – Ley Jorge Pizano.

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN LA COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL PROYECTO DE LEY NO. 291 DE 2023 CÁMARA – 414 DE 2025 SENADO

“Por la cual se adoptan medidas de protección para personas naturales frente al reporte o denuncia de presuntos actos y/o hechos de corrupción – Ley Jorge Pizano”

Bogotá D.C., mayo de 2025

Honorable Senador
ARIEL FERNANDO ÁVILA MARTÍNEZ
Presidente Comisión Primera Constitucional Permanente
Senado de la República

Asunto. Informe de ponencia para primer debate en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República del **Proyecto de Ley No. 291 de 2023 Cámara – 414 de 2025 Senado**, “*Por la cual se adoptan medidas de protección para personas naturales frente al reporte o denuncia de presuntos actos y/o hechos de corrupción – Ley Jorge Pizano*”.

Honorables Senadores,

En cumplimiento del encargo hecho por la Honorable Mesa Directiva del Senado de la República y de conformidad con lo establecido en el Artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos rendir Informe de Ponencia para Primer Debate en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República del **Proyecto de Ley No. 291 de 2023 Cámara – 414 de 2025 Senado**, “*Por la cual se adoptan medidas de protección para personas naturales frente al reporte o denuncia de presuntos actos y/o hechos de corrupción – Ley Jorge Pizano*”.

Cordialmente,

CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN
Senadora de la República
Coalición Pacto Histórico

I. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

- El Proyecto de Ley No. 291 de 2023 Cámara fue radicado el 08 de noviembre de 2023, siendo sus autores el Ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, y los congresistas: María del Mar Pizarro García, Catherine Juvinao Clavijo, David Ricardo Racero Mayorca, Andrés David Calle Aguas, Armando Antonio Zabarain de Arce y Gloria Inés Flórez Schneider.
- Previo a su radicación, el texto del proyecto tuvo los siguientes conceptos:
 - El 08 de agosto de 2023, el Ministerio del Interior otorgó concepto favorable al texto del anteproyecto, con sugerencias de ajustes.
 - El 28 de septiembre de 2023, el Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal analizó y discutió el texto del anteproyecto, dando concepto favorable con observaciones.
 - El 03 de noviembre de 2023, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorgó concepto fiscal sobre el articulado del anteproyecto.
- El Proyecto de Ley fue publicado en la Gaceta del Congreso 1676 de 2023 y fue posteriormente recibido en la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes.
- El 14 de diciembre de 2023, la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes designó como ponentes del proyecto a los siguientes congresistas: Catherine Juvinao Clavijo (coordinadora), Carlos Felipe Quintero Ovalle (coordinador), Orlando Castillo Advincula, Jorge Eliecer Tamayo Marulanda, Jorge Méndez Hernández, Miguel Abraham Polo Polo, Juan Daniel Peñuela Calvache, David Ricardo Racero Mayorca, Marelén Castillo Torres y Luis Alberto Albán Urbano.
- El 13 de marzo de 2024, se recibió informe de ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, ponencia que fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 241 de 2024.
- El 05 y 11 de junio de 2024, la iniciativa se consideró y aprobó en primer debate en la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, tal como consta en el acta 57 y 58 de 2024, previo anuncio en la sesión del 04 de junio de 2024, según consta en el acta No. 56. En el presente debate, se hicieron las modificaciones pertinentes y se acogieron diferentes proposiciones.
- El día 12 de agosto de 2024, se realizó un foro de discusión para abordar las observaciones de las entidades, expertos y organizaciones de la sociedad civil respecto del Proyecto de Ley 291 de 2023 Cámara.
- El 29 de octubre de 2024, se recibió informe de ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes, ponencia que fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 1845 de 2024.
- El 18 y 24 de febrero de 2025, la iniciativa se consideró y aprobó en segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, tal como consta en el acta 215 y 217 de 2025, previo su anuncio en Sesiones Plenarias Ordinarias de los días 17 y 19 de febrero de 2025, correspondiente a las Actas No. 214 y 216.
- El texto definitivo aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta No. 434 de 2025.

8. El día 01 de abril de 2025, el proyecto fue remitido por la Secretaría General de la Cámara de Representantes a la Secretaría General del Senado de la República. Y, posteriormente el 02 de abril de 2025 el proyecto fue remitido a la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República.

09. El día 11 de abril de 2025, la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República designó como ponente única a la senadora Clara Eugenia López Obregón.

II. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA.

A. INTRODUCCIÓN.

La implementación de políticas públicas para la lucha contra la corrupción requiere un esfuerzo intersectorial y multidisciplinario, siendo frecuente encontrar diversidad de enfoques, puntos de vista, pareceres y, muchas veces, prejuicios que por lo general determinan el comportamiento y la acción de las entidades vinculadas a la lucha contra la corrupción.

La corrupción es un fenómeno de naturaleza multidimensional que con frecuencia es asociada a las actividades de los servidores públicos; no obstante, en el contexto económico actual la discusión sobre el rol del sector privado y su relación con la corrupción ha puesto de relieve la necesidad de abordar nuevos enfoques que aún se encuentran en desarrollo¹.

El Gobierno Nacional, la ciudadanía en sinergia con la sociedad civil, el sector privado, las entidades públicas, las organizaciones no gubernamentales y los organismos multilaterales, considera indispensable para garantizar los fines esenciales del estado promover conjuntamente una estrategia jurídica, real, concreta e integral como complemento a los mecanismos legales y reglamentarios existentes en determinar un marco legal de protección a las personas naturales que denuncien la corrupción. Esto no solo implica cumplir con nuestros deberes por mandato constitucional y participar activamente en la dinámica del Estado, sujetos a las ramas del poder público, sino también asegurar el cumplimiento del interés general hacia un estado garante y transparente, donde las instituciones públicas y privadas funcionen de manera efectiva.

La colaboración ciudadana es un pilar fundamental en el Estado de Derecho y constituye un deber para todo ciudadano al presenciar la comisión de posibles delitos o conductas que puedan ser objeto de reproche disciplinario, fiscal y administrativo. Además, se debe tener en cuenta que las anuencias derivadas de ciertas conductas, que son investigadas por entidades como las superintendencias, deben ser consideradas en casos de conflicto con otros deberes establecidos en el marco legal.

La participación ciudadana en acciones públicas resulta esencial para alcanzar el objetivo de impulsar investigaciones sobre actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, actividades que puedan perjudicar el interés general, derechos fundamentales, el medio ambiente, el presupuesto, la selección objetiva en la contratación pública, así como los derechos humanos, entre otros. Esta participación activa es crucial para prevenir daños antijurídicos. Estos ejemplos tienen una larga tradición en el ordenamiento jurídico colombiano, que se remonta incluso a la constitución de 1886.

¹ Andrés Solimano, Vito Tanzi y Felipe Del Solar (2008). *Las Termitas del Estado, Ensayos sobre corrupción, transparencia y desarrollo*. Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, p. 2

En consonancia con lo anterior, la Constitución Política de Colombia de 1991 en su preámbulo prevé la participación de toda la ciudadanía al indicar que *"El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus Delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA"*; de igual manera, en el artículo 270 ídem faculta a la ciudadanía para que intervenga activamente en el control de la gestión pública al establecer: *"La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados..."*.

En la misma línea y en concordancia con los avances del derecho comparado que respaldan el presente proyecto de ley, es importante destacar que, desde la creación de la Unión Europea, se han promovido esfuerzos colectivos orientados a la lucha contra la corrupción. De hecho, uno de los objetivos del Tratado Constitutivo de la Unión es precisamente combatir este fenómeno. En ese marco, diversas regulaciones sectoriales especialmente en los ámbitos financiero y de defensa de la competencia han incorporado mecanismos específicos que permiten a quienes tienen conocimiento de conductas irregulares o ilícitas proporcionar a los organismos de supervisión información y datos relevantes para su investigación y control.

El continente americano, así como Europa, cuenta con mecanismos de revisión de la implementación de instrumentos internacionales para la lucha contra la corrupción. En el caso de América es el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) auspiciada por la Organización de los Estados Americanos, y en el caso de Europa el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) auspiciado por la Unión Europea que tiene por objeto la revisión de la implementación del Convenio Penal y Convenio Civil contra la Corrupción. A futuro se agregará el Mecanismo de Revisión de la CNUCC.

En el caso del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) se analizaron un conjunto de 27 países encontrándose hallazgos importantes, por ejemplo, que **la mayoría de los países de América Latina no cuentan con sistemas específicos relacionados con la lucha contra la corrupción**, sino sistemas de protección de carácter general para todo tipo de delitos. (negrilla y subraya fuera de texto).

Por su parte, dentro del ordenamiento jurídico interno la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, contempla la creación y mantenimiento de sistemas de información, a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad de derecho privado, en el seno de la misma o en la actuación de terceros que contratase con ella la comisión de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable, incluso anónimamente.

Son muchos los ejemplos de actuaciones de génesis de la participación ciudadana que alertan de la existencia de prácticas irregulares y de corrupción que han permitido impulsar investigaciones que, previa la tramitación del procedimiento tanto administrativo como judicial legalmente establecido, han concluido con la imposición de la correspondiente condena penal por tales comportamientos.

No obstante, también se advierte que, en ocasiones, estos comportamientos cívicos han causado situaciones complicadas para las personas que toman la iniciativa de poner en conocimiento los presuntos hechos de corrupción o que han comunicado tales prácticas corruptas e infracciones, como las presiones de los denunciados, por lo que es indispensable que el ordenamiento jurídico proteja a la ciudadanía cuando muestra una conducta valiente de clara utilidad pública. Además, resulta importante asentar en la sociedad la conciencia de que debe perseguirse a quienes quebrantan la ley y que no deben consentirse ni silenciar los incumplimientos.

Es por esto, que se justifica para el país la adopción de una legislación de medidas de protección para personas naturales que pongan en conocimiento de las autoridades competentes tanto actos y/o hechos de corrupción de los cuales tenga conocimiento independiente de su rol en la sociedad civil.

Resulta importante establecer en la sociedad la conciencia de que debe perseguirse a quienes quebrantan el ordenamiento jurídico y que no es conveniente ni acertado consentirse ni silenciarse ante la presencia de actos y/o hechos que puedan generar corrupción. Esta es una de las principales finalidades del presente proyecto de Ley, proteger integralmente a los ciudadanos que informan o reportan sobre vulneraciones del ordenamiento jurídico, especialmente que se deriven por presuntos hechos y/o actos de corrupción en el marco de una relación laboral, profesional o de cualquier otra índole y que puedan ser víctimas de retaliación por haber expuesto estas particularidades dando a conocer la información de relevancia para una investigación por las autoridades competentes en sus diferentes jurisdicciones.

De la misma manera es preciso recordar que, en línea con la corriente existente en el derecho del *commonlaw* (anglosajón), que regula desde hace años la protección de los denominados *«whistleblowers»* –quien usa el silbato para dar alerta–, y hace referencia a la persona que informa sobre una irregularidad en su ámbito laboral, el objetivo es comunicar lo antes posible los comportamientos no éticos y sacar a la luz todo aquello que pueda dañar la reputación de una organización.

A título de ejemplo y sin perjuicio de las autoridades creadas por algunas entidades locales, cabe recordar que, para el caso de España, las comunidades autónomas han abordado la cuestión de la protección especial de los denunciantes, aunque la regulación ha sido parcial y centrada fundamentalmente en la creación de oficinas o agencias con la específica función de prevenir e investigar, pero sí es importante destacar que el 16 de febrero de 2023, el Congreso español aprueba la Ley de Protección de Informantes, por la que se transpone la Directiva Whistleblowing². Es así como el 13 de marzo marca la entrada en vigor de la normativa que requiere que las empresas con más de 250 empleados implementen un canal de denuncias. Se establece un plazo de 3 meses para llevar a cabo esta implementación. Por otro lado, para las empresas con más de 50 empleados, la fecha límite para implementar dicho canal es el 1º de diciembre de 2023.

Es palpable que el principio de buena fe está presente en el ordenamiento jurídico mundial y Colombia no es una excepción al invocarlo en su derecho interno, a través de su Carta Magna en el artículo 83 el cual establece que las actuaciones tanto de las autoridades públicas como de los particulares deben estar ceñidos a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones. Reconociendo que una conciencia honesta sobre hechos graves perjudiciales, presentes o potenciales, es un requisito indispensable para proteger al denunciante. La buena fe refleja un comportamiento cívico y se opone a otras acciones que

² <https://www.integrityline.com/es/experiencia/white-paper/directiva-europa-de-proteccion-de-los-denunciantes/>

deben ser excluidas de protección, como la transmisión de información falsa o tergiversada, así como el uso de información obtenida de manera ilícita.

En la Ley Modelo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos se adopta otro enfoque respecto del elemento de buena fe. En la ley se incorpora una presunción de buena fe hasta en tanto no se demuestre lo contrario³.

Junto a la descripción del ámbito objetivo de aplicación, precisa la ley el ámbito subjetivo y subjetivo, esto es, las personas que están protegidas frente a posibles represalias por poner en conocimiento determinados hechos que pueden constituirse en presuntos actos de corrupción y que requieren una investigación y un acompañamiento del Estado a estos sujetos activos cualificados dentro del marco del presente proyecto de Ley. Así, se extiende la protección a todas aquellas personas que tienen vínculos profesionales o laborales con entidades tanto del sector público como del sector privado, aquellas que ya han finalizado su relación profesional, contractual, voluntarios, trabajadores en prácticas o en período de formación, personas que participan en procesos de selección. También se extiende el amparo de la ley a las personas que prestan asistencia a los informantes, a las personas de su entorno que puedan sufrir represalias, así como a las personas jurídicas propiedad del informante, entre otras.

De acuerdo a los estándares internacionales que definen un Sistema de Protección al Denunciante como completo y eficaz, es esencial considerar no solamente a los empleados del ámbito público o a aquellos en el sector privado con contratos indefinidos. Es bien conocido que también los contratistas, voluntarios, aprendices, e incluso personas sin vínculos laborales o contractuales, se encuentran expuestos a posibles represalias cuando deciden informar sobre actos de corrupción de los cuales han tenido conocimiento durante el desarrollo de sus actividades diarias. Esto se debe a que la corrupción no está limitada al sector público; es un mal que afecta a diversas esferas, teniendo un impacto considerable en la garantía de los derechos humanos y el desarrollo sostenible en distintas regiones. Por lo tanto, la comunidad internacional lo ha reconocido como una prioridad en su agenda política global.

En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha elaborado un informe temático exhaustivo sobre la corrupción, delineando de manera precisa cómo este fenómeno mina los cimientos de la democracia, debilita las instituciones estatales y perjudica el pleno disfrute de los derechos humanos en América.

Este documento toma como punto de partida la Resolución 1/18 emitida por la CIDH, en la que se conceptualiza la corrupción como el abuso o desvío del poder, tanto en el ámbito público como en el privado, en beneficio de intereses personales o de terceros, en detrimento del bien público. Además, esta corrupción socava la estructura democrática y el Estado de Derecho, afectando negativamente la plena realización de los derechos humanos.

Entre los impactos más notables de la corrupción en la región, la CIDH presta una atención especial a las consecuencias en la institucionalidad estatal, particularmente en la administración de justicia y en los procesos electorales, lo que a su vez tiene implicaciones para el ejercicio de los derechos políticos. En este sentido, se destacan problemáticas como la acumulación de poder, la arbitrariedad en la toma de decisiones, la falta de supervisión en la gestión pública y la impunidad, así como elementos culturales que toleran la corrupción. La corrupción se manifiesta tanto en acciones cotidianas como en estructuras sistémicas, alcanzando en algunos casos niveles de captura estatal, cooptación de instituciones y

³ Organización de los Estados Americanos (OEA) (2013). *Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos*, artículo 2.1.

desviación de objetivos institucionales hacia actividades ilícitas (CIDH, "Corrupción y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos").

Esta comprensión más amplia del papel del denunciante, diseñada para fomentar la denuncia, está en línea con una política transversal anticorrupción. Esto implica implementar medidas preventivas en todos los sectores, especialmente en la ciudadanía, en lugar de depender únicamente del Estado. Aunque el Estado fortalezca sus instituciones y herramientas, no es suficiente para estar presente de manera constante en todos los ámbitos de la sociedad.

Dado que las consecuencias pueden afectar no solo al denunciante sino también a sus seres queridos, el proyecto contempla la extensión de medidas de protección a terceros relacionados, como cónyuges, compañeros permanentes y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil del denunciante.

Una lucha eficaz contra la corrupción exige, por consiguiente, un compromiso de la sociedad en su conjunto. A propósito, el 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y con un gran número de ratificaciones es el único instrumento universal jurídicamente vinculante que proporciona un marco integral para prevenir y combatir la corrupción⁴, en la cual Colombia aprobó su completa adhesión a la Convención a través de la Ley 970 de 2005.

La Convención obliga a los Estados a penalizar la conducta corrupta y fortalecer la investigación y el enjuiciamiento de estos delitos. También reconoce que para luchar contra la corrupción se necesita un enfoque amplio. La protección de los denunciantes guarda relación con las tres finalidades de la Convención, que son: a) *promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción*; b) *promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos*; y c) *promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos*. Es cada vez más frecuente que los gobiernos hagan hincapié en que la protección de los denunciantes no solo mejora la detección de la corrupción, sino que también es útil como elemento disuasivo al reducir la capacidad de los infractores de confiar en el silencio de las personas a su alrededor. La Convención subraya este aspecto preventivo al alentar a los Estados a fomentar la participación de las personas —cerciórando de que puedan establecer un contacto seguro con las autoridades gubernamentales, en particular— y del público en general en la denuncia y la prevención de la corrupción.

En este aspecto, una opción político-legislativa, fruto de los modelos comparados a nivel internacional, ha sido, al igual que en la normativa de protección de datos personales, el estatuto penal, el código único disciplinario, las normas que regulan el control fiscal y las relacionadas al marco normativo anticorrupción que en todas sus categorías regulan en cierta forma las informaciones anónimas y protección a la persona que las comunica.

En relación con las medidas de protección, hacen referencia al conjunto de garantías, a las que los denunciantes pueden invocar, a fin de garantizar la protección de sus derechos frente a cualquier acto de represalia real o posible; dada su naturaleza tuitiva comprende acciones orientadas a proteger el ejercicio de los derechos de los denunciantes, ya sean en el ámbito laboral como la prohibición de despido, sanciones a quienes cometen represalias, entre otros; así como en su integridad personal ya sea prestando protección personal, reserva de su identidad, traslado a otro lugar de residencia, cambio de identidad⁵.

⁴ https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/16-02538_S_ebook.pdf
⁵ Chevarría Franz y Silvestre Martha. Sistemas de denuncias y de protección de denunciantes de corrupción en América Latina. Documento de Trabajo No. 2. Eurosocial. Madrid, noviembre de 2012. Pág. 18

Así mismo, el texto de la Convención contra la Corrupción distingue entre las medidas destinadas a proteger, por un lado, a los testigos, los peritos, las víctimas y los delincuentes que cooperen en tanto que testigos en un procedimiento penal (artículos 32 y 37) y, por el otro, las medidas de protección de los denunciantes en un sentido más general (artículo 33):

<p style="text-align: center;">Artículo 32</p> <p>Adoptar medidas apropiadas para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos, peritos y víctimas siempre que sean testigos que presten testimonio sobre delitos de corrupción, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas.</p>	<p style="text-align: center;">Artículo 33</p> <p>Considerar la posibilidad de adoptar medidas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos de corrupción.</p>
<p style="text-align: center;">Artículo 37, párr. 4</p> <p>Prever el otorgamiento de protección a los delincuentes que cooperen, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32.</p>	

Fuente: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO Viena Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de los denunciantes. Nueva York, 2016

Un hito esencial en la admisión de la denuncia anónima lo constituye la Convención en comento, que establece en su artículo 13.2: *Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la corrupción mencionados en la presente Convención y facilitará el acceso a dichos órganos, cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.*

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción reconoce plenamente esta diversidad. En varias de sus disposiciones se recomienda a los Estados que establezcan medidas y sistemas para facilitar las denuncias y, con ese fin, proporcionen acceso a los órganos de lucha contra la corrupción:

<p style="text-align: center;">Artículo 8, párr. 4: Sector público</p> <p>Considerar, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones.</p>	<p style="text-align: center;">Artículo 13, párr. 2: Sociedad civil</p> <p>Facilitar el acceso a los órganos de lucha contra la corrupción para que el público denuncie, incluso de manera anónima, incidentes de corrupción.</p>	<p style="text-align: center;">Artículo 38: Cooperación entre organismos nacionales</p> <p>Alentar la cooperación entre los organismos públicos y los organismos encargados de investigar y enjuiciar los delitos.</p>	<p style="text-align: center;">Artículo 37: Cooperación de los delincuentes</p> <p>Alentar a las personas que participen o hayan participado en actos de corrupción a que proporcionen información (con fines de mitigación de la pena o concesión de inmunidad judicial).</p>
<p style="text-align: center;">Artículo 39: Sector privado</p> <p>Alentar la cooperación entre las entidades del sector privado (los nacionales/residentes y los organismos encargados de investigar y enjuiciar los delitos)</p>			

Fuente: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO Viena Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de los denunciantes. Nueva York, 2016

Además de la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, existen varios instrumentos internacionales en que son parte muchos Estados y en los que también se les alienta a que proporcionen mayor protección a los denunciantes o se les impone la obligación de hacerlo, tales como:

- Convención Civil sobre la Corrupción (1999) y Convenio Penal sobre la Corrupción (1999) del Consejo de Europa y su Recomendación para la protección de los denunciantes (2014).
- Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada en 1996 y en vigor desde 1997 de la Organización de Estados Americanos OEA
- Convención Anticohecho de la Organización y Desarrollo Económicos (OCDE); Recomendación del Consejo de la OCDE para fortalecer la lucha contra el cohecho de los servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de 2009.
- La Convención de Derecho Civil sobre la Corrupción del Consejo de Europa contiene distintas disposiciones orientadas a mejorar los sistemas administrativos que prevengan, investiguen y sancionen a la corrupción entre ellas la protección de denunciantes.
- Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la Corrupción (2003)⁶; y Protocolo de la Comunidad de África Meridional para el desarrollo contra la Corrupción (2001)⁷.

⁶ Ratificada por 31 Estados de África, esta Convención dispone que los Estados parte adoptarán medidas para garantizar que los ciudadanos denuncien hechos de corrupción sin temor a ser objeto de represalias como consecuencia de ello. Se puede consultar en <http://www.au.int/en/content/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption>.
⁷ Con arreglo a este Protocolo, 13 países de África han asumido el compromiso de proteger a las personas que denuncian actos de corrupción. Se puede consultar en <http://www.sadc.int/documents-publications/show/>.

Incorporando a lo precedente, existen otras herramientas como por ejemplo para la región americana la ley modelo de la OEA sobre la libertad de expresión contra la corrupción y sobre la facilitación de la denuncia y la protección de los denunciantes y testigos (2004 y 2013)⁸; el Memorando Explicativo adjunto a la Recomendación del Consejo de Europa; y el Estudio de la OCDE sobre los marcos de protección de los denunciantes, Compendio de mejores prácticas y principios rectores para legisladores (2011)⁹.

De aquí al discurrir las citas normativas de carácter internacional y nacional encontramos que las medidas de protección no se dirigen sólo a favor de los informantes sino también aquellas personas a las que se refieren los hechos relatados en la comunicación han de contar con una singular protección ante el riesgo de que la información, aun con aparentes visos de veracidad, haya sido manipulada, sea falsa o responda a motivaciones que el Derecho no puede amparar.

Estas personas mantienen todos sus derechos de tutela judicial y defensa, de acceso al expediente, de confidencialidad y reserva de identidad y la presunción de inocencia; en fin, de los mismos derechos que goza el informante.

Las ventajas y eficacia de los programas de clemencia en ciertos ámbitos sectoriales han llevado a incluir una regulación que precisa las condiciones para su correcta aplicación.

Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha destacado la relevancia de una protección adecuada para los trabajadores denunciantes, ya que constituye un aspecto crucial en la lucha contra la corrupción. Esta protección no solo favorecería un entorno propicio para el trabajo decente, sino también para un crecimiento sostenible.

En suma, en concordancia con los estándares internacionales, grosso modo los **Elementos Esenciales para un Sistema Integral y Eficaz de Protección a Denunciante**, debe contener:

1. Definición amplia del denunciante
2. Regulación de la información reservada y confidencial. Opción de presentar denuncias anónimas.
3. Denunciante de buena fe (castigando las de mala fe)
4. Medidas de protección laboral (ampliada a contratistas y a quienes tengan otro tipo de vinculación) y prevención de represalias
5. Indemnidad
6. Carga de la prueba.

Elementos que conforman de forma integral el presente proyecto de ley y que se desarrollarán con integridad en los siguientes acápite del presente documento.

Asimismo, es aconsejable que los sistemas de protección a denunciantes no impongan condicionantes estrictos que limiten o afecten la realización o viabilidad de posibles denuncias. De igual forma, es importante incluir un listado de definiciones en los que se concrete el alcance y ámbito de aplicación de la ley y determinar que hechos son significativos, en aras que para el denunciante sea más fácil identificar el supuesto de hecho que se corresponde con la información que pretende comunicar. Finalmente, es necesario a su vez desarrollar criterios claros de admisibilidad de denuncias.

⁸ Organización de los Estados Americanos (2013). Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos. OEA, Washington DC.
⁹ OCDE, Study on Whistleblower Protection Frameworks, *Compendium of Best Practices and Guiding Principles for Legislation*. Se puede consultar en <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/48972967.pdf>.

Es crucial la lucha directa contra la corrupción en la medida que no son solo principios éticos los comprometidos, estas conductas alteran también y de forma sistemática el funcionamiento del mercado, por lo que distorsiona la competencia, siendo en Colombia una violación al artículo 333 constitucional (Sanclemente, 2020)

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Las denuncias son un aspecto de suma importancia en la lucha contra la corrupción porque es el acto que permite poner en evidencia los hechos o sospechas de corrupción a fin de que puedan ser investigados y, de ser el caso, sancionados¹⁰.

El proyecto de Ley tiene por objeto establecer normas, procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar la denuncia por presuntos actos y/o hechos de corrupción y proteger a los reportantes y denunciantes frente a posibles retaliaciones que puedan poner en peligro la seguridad física, estabilidad profesional o laboral, económica o psicosocial, tanto del reportante/denunciante como la de su núcleo familiar, principalmente donde los derechos a la vida, integridad personal, libre desarrollo de la personalidad y dignidad personal puedan verse amenazados; en suma, la presente iniciativa se constituye como la principal herramienta contra el miedo a denunciar hechos corruptos en Colombia.

De igual forma, busca que el Estado intervenga de forma integral para proteger a los ciudadanos que cumplen con su deber cívico, consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, y en prevalencia de los principios del derecho como la prevalencia del interés general, la protección de patrimonio público y la protección de bienes jurídicos tutelados de acuerdo a la Ley Penal vigente, y que estos se sientan respaldados y seguros a la hora de reportar, denunciar o delatar actos de corrupción.

Las leyes que otorgan protección a las personas que denuncian actos de corrupción, las que garantizan acceso a información que está en poder del Gobierno y las que imponen a los funcionarios públicos de alta jerarquía la obligación de declarar determinados activos e ingresos se basan en los conceptos de responsabilidad democrática y Estado de Derecho. Esta responsabilidad es un disuasivo a la conducta ilícita de las autoridades y refuerza las medidas de prevención de la corrupción.

Como la responsabilidad política y jurídica se basa en el derecho a la libre expresión del pensamiento y el derecho a la libertad de asociación, estos tres tipos de leyes pueden considerarse también como importantes mecanismos de protección de esos derechos humanos.

La protección de los Reportantes/Denunciantes de actos de corrupción es un complemento fundamental para el acceso ciudadano a la información en manos del Estado. Tan relevante como la disponibilidad misma de la información es el momento en que se revela. La protección de los Reportantes/Denunciantes de corrupción aumenta la prontitud y accesibilidad de la información. Estos individuos pueden asegurar el acceso a información mucho antes de que los procedimientos formales de acceso ciudadano puedan llevarse a cabo.

De hecho, los datos proporcionados por personas que denuncian actos de corrupción pueden indicar la necesidad de utilizar los procedimientos de acceso público a documentos y registros

¹⁰ Chevarria Franz y Silvestre Martha. Sistemas de denuncias y de protección de denunciantes de corrupción en América Latina. Documento de Trabajo No. 2. Eurosocial. Madrid, noviembre de 2012

gubernamentales para llevar adelante la investigación de la supuesta conducta ilícita que revela esa información.

El acceso público a documentos y registros gubernamentales garantiza el conocimiento de las normas aplicadas por las autoridades. Sin el conocimiento de estas normas y los criterios para su aplicación, es difícil limitar significativamente el poder de las autoridades. Las denuncias de actos de corrupción proporcionadas por ciudadanos pueden sacar a la luz información oculta y desmantelar estrategias para encubrir conductas ilícitas.

Además, para hacer que las autoridades rindan cuentas a través de los tribunales, es fundamental disponer de información sobre políticas gubernamentales y las prácticas de los funcionarios públicos. Por otro lado, la divulgación pública de los activos e ingresos de funcionarios de alto rango garantiza que sus decisiones se basen en la aplicación del derecho y la política pública, y no en el afán de lucro personal.

En definitiva, la política de Estado Abierto, la protección de los empleados que denuncian conductas ilícitas y la revelación pública de activos financieros aumentan la probabilidad de castigo de actos de conducta ilícita muy graves y recuerdan a los funcionarios públicos que están sujetos a responsabilidad política y jurídica. Esta legislación refuerza poderosamente la responsabilidad de los funcionarios públicos ante la ley y ante la población a la que deben servir¹¹.

Un sujeto de protección especial que consagra el presente proyecto debido a la relevancia de su labor de denuncia son los periodistas de investigación que revelan prácticas corruptas. Aunque, en principio, ellos no son los denunciantes directos, su participación es fundamental en el último estadio del procedimiento de denuncia: la comunicación al público. La adecuada cobertura mediática puede convertirse en una protección crucial para los denunciantes. Así, Wahl- Jorgensen y Hunt (2012, p. 399) han observado que la narrativa periodística influye en la percepción de los denunciantes como individuos heroicos y desinteresados otorgándole legitimidad a sus reclamos. Sin embargo, la relación entre las fuentes y los periodistas ha venido cambiando, muestra de ello es el rol prioritario de los periodistas en escándalos como los Panamá Papers, en el que ellos mismos han asumido la iniciativa de la denuncia (Foegle, 2017). Entre denunciantes y periodistas hay una relación estrecha que impone extender a los segundos algunas garantías de protección de las que gozan los primeros.

Por ello, en el caso colombiano, la OCDE (2019, p. 57) expresó su preocupación sobre las circunstancias que enfrentan los denunciantes y los periodistas que informan sobre corrupción en Colombia, y recomendó al país que adopte, como cuestión prioritaria, protecciones apropiadas para aquellos que denuncian presuntos actos de soborno. La delicada relación entre periodistas y denunciantes se manifiesta además en otros dos aspectos: la protección de la libertad de expresión y el respeto del secreto de los negocios. Al primer aspecto nos referiremos en el acápite siguiente. En cuanto a la oportunidad del secreto, el asunto ha sido debatido a profundidad en Francia (Bourdon 2016, p. 85) ya que las empresas acusan a sus empleados de revelar información sujeta a reserva. No obstante, el artículo 7 de la Ley Sapin 2 excluye de responsabilidad penal a las personas que divulgan secretos protegidos por la ley, siempre que la divulgación se realice en los términos que esa norma establece y su conocimiento sea de interés público¹².

¹¹ http://www.oas.org/juridico/spanish/lev_modelo_protect_denun.htm
¹² <https://revistas.unillbre.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/6260/7102>

C. ELEMENTOS DEL PROYECTO DE LEY

El presente proyecto de ley tiene en cuenta una pluralidad de fuentes de información como índices estadísticos y guías para la protección de Reportantes/Denunciantes, para llevar a cabo una intervención integral en la regulación de la corrupción en Colombia, con enfoque preventivo.

De acuerdo con los estándares internacionales los elementos esenciales para un Sistema de Protección de Denunciante eficiente y eficaz son los siguientes:

- Manejo de Información que garantice la confidencialidad y la reserva. Inclusive que contemple la opción de denuncias anónimas, a través de canales seguros.
- Protección al reportante/denunciante de buena fe, y con sanciones claras para el reportante/denunciante de mala fe.
- Medidas de protección y prevención de represalias.
- Indemnización por daños y perjuicios cuando se acredite el daño por ocasión de la denuncia.

En consecuencia, es fundamental que los sistemas de protección de Reportantes/Denunciantes no impongan condicionantes estrictos que limiten o afecten la realización o viabilidad de posibles denuncias (Amoedo, Revista Internacional de Transparencia e integridad, 2017).

Adicionalmente, determinar de forma clara y precisa los criterios de admisibilidad o inadmisibilidad de las denuncias presentadas, es clave para garantizar los derechos de los Reportantes/Denunciantes y el funcionamiento efectivo del Sistema implementado.

Tal como se hizo referencia previamente, se optó por enunciar los delitos asociados a la corrupción, ya que de esta manera se facilitaría al reportante/denunciante la identificación del supuesto de hecho que se corresponde con la información que pretende comunicar y se limitaría a su vez la realización de denuncias espurias o intrascendentes.

Entre las recomendaciones, se propone una *unificación terminológica y normativa, siendo la terminológica en cuanto a la nomenclatura utilizada y la normativa en relación a las medidas incluidas en las diversas leyes. Ello facilitará la aplicación y conocimiento de las mismas y ofrecerá al denunciante una protección sólida sin importar la administración o región a la que pertenezca* (Amoedo, Revista Internacional de Transparencia e integridad, 2017).

¿A quién se protege?

A cualquier persona que haya revelado información que ponga en evidencia presuntos actos o hechos de corrupción de acuerdo con el Ordenamiento Jurídico Colombiano. Por tanto, se considera reportante/denunciante toda persona que, de buena fe, denuncia a las autoridades competentes sobre hechos relacionados con corrupción. Esta puede provenir de una persona sin que medie relación laboral entre el o la denunciante y el o la denunciado (denuncia ciudadana) o puede darse el marco de una relación laboral.

Una de las falencias que se generan en la efectiva protección del reportante/denunciante, es la ausencia de una definición ampliada de este, que cubra no solo a empleados públicos, sino a los del sector privado, o cualquier otro trabajador que esté por fuera de la relación habitual empleado- empleador, ya que los hechos de corrupción no son exclusivos del sector público. Es por esto que en el artículo 2º del proyecto de ley se refiere específicamente al alcance de los presupuestos contemplados en la norma, en aras de tener un foco de acción más amplio

que coadyuve a la política anticorrupción en Colombia y destacar el nivel de importancia del reportante/denunciante en la sociedad y en la cultura de la integridad. Por tanto, se pretende normalizar la acción denuncia e incentivar a otros a hacerlo (Amoedo, Revista Internacional de Transparencia e integridad, 2017)

Es importante tener en cuenta la cualidad de la persona que presenta el reporte o la denuncia. En ese sentido, puede ser una persona con un vínculo contractual diferente a un derecho laboral o un contrato laboral. En consecuencia, el proyecto de ley también engloba a los **CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS** en atención a los derechos de los derechos constitucionales al trabajo, económicos, dignidad humana y Libre Desarrollo de la personalidad.

Por tanto, de forma análoga, se propone desarrollar la figura establecida por la Corte Constitucional para las mujeres en estado de embarazo que sean contratistas, en el que de acuerdo con la jurisprudencia opera cuando se constate que: i) persiste la necesidad institucional de contar con esos servicios y ii) que la contratista gestante ha cumplido cabalmente sus obligaciones.

Con respecto a eso el Ministerio del Trabajo ha manifestado la imposibilidad de que el empleador o contratante desvincule unilateralmente ninguna trabajadora o contratista que se encuentre en estado de embarazo o periodo de lactancia, ni siquiera bajo el supuesto de una justa causa de terminación o argumentado el vencimiento del término pactado, sin previa autorización por parte del Inspector del Trabajo para tal fin, pues como lo dijo la Corte, la protección a la mujer en estado de embarazo protege su gestación y su periodo de lactancia sin importar la relación laboral que se tenga o la modalidad del contrato que se suscriba.

En ese sentido, la figura o fuero especial reforzado para contratistas que hayan denunciado un presunto hecho o acto de corrupción y que por motivo de este se presenten retaliaciones afectando directamente la ejecución de su contrato, podría disponer la obligación de una autorización previa del Ministerio del Trabajo para la terminación anticipada del contrato. Es claro que no es viable jurídicamente mantener una obligación de renovar el contrato dada la naturaleza o definición legal del mismo.

Lo anterior, en aras de proteger los bienes jurídicos tutelados de los derechos al trabajo, que en términos de la Corte Constitucional se predica: *"El trabajo como derecho, implica una regulación fundada en la libertad para seleccionarlo, por lo que, salvo las restricciones legales, consiste en la realización de una actividad libremente escogida por la persona dedicando a ella su esfuerzo intelectual o material, sin que puedan impedírsele los particulares ni el Estado a quien, por el contrario, le compete adoptar las políticas y medidas tendientes a su protección y garantía."*; desarrollo de profesión u oficio y derechos económicos del contratista que se encuentra en una situación de especial indefensión o vulnerabilidad en los supuestos descritos.

Asimismo, también se estaría actuando conforme al artículo 53 de la Constitución Política, el cual reza: *"Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad."*

<p>Lo anterior, iría también en concordancia con el Objetivo Desarrollo Sostenible número 8 <i>"Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos"</i></p> <p>Sin embargo, es importante dejar claro que este procedimiento para evaluar las medidas de protección al contratista no debe significar per se el reconocimiento de derechos laborales, ya que el reconocimiento de un contrato realidad bajo condiciones laborales solo lo puede hacer un Juez de la República al encontrarse probada la subordinación, entre otros aspectos. Es una acción garantista y protectora concentrada en las personas que por la naturaleza de su contrato y en la ejecución de este tengan acceso a información privilegiada que permita evidenciar posibles conductas de corrupción e incentivar su denuncia para hacerle frente a la impunidad y a la cultura de aceptación generalizada de este tipo de delitos.</p> <p>De acuerdo con lo esbozado por la Unión Europea en el marco regulatorio de protección de denunciantes de presuntos actos de corrupción, la razón subyacente para prestarles protección es su vulnerabilidad económica frente al contratante. Cuando no existe tal desequilibrio de poder relacionado con el trabajo, por ejemplo, en el caso de demandantes ordinarios o testigos, no es necesaria la protección frente a represalias.</p> <p><i>"Por lo tanto, la protección debe concederse también a los trabajadores que se encuentran en relaciones laborales atípicas, incluidos los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores con contratos de duración determinada, así como a las personas con un contrato de trabajo o una relación laboral con una empresa de trabajo temporal, relaciones laborales precarias en las que las formas habituales de protección frente a un trato injusto resultan a menudo difíciles de aplicar. El concepto de «trabajador» también incluye a los funcionarios, a los empleados del servicio público, así como a cualquier otra persona que trabaje en el sector público. Dichas categorías de personas, que incluyen a los trabajadores que prestan servicios por cuenta propia, los profesionales autónomos, los contratistas, subcontratistas y proveedores, suelen ser objeto de represalias, que pueden adoptar la forma, por ejemplo, de finalización anticipada o anulación de un contrato de servicios, una licencia o un permiso, de pérdidas de negocios o de ingresos, coacciones, intimidaciones o acoso, inclusión en listas negras o boicot a empresas o daño a su reputación."</i></p> <p>Por agregación, el proyecto de ley también hace una mención expresa a los PERIODISTAS y demás personas que con ocasión de su oficio o profesión obtenga información privilegiada relacionada con un presunto hecho o acto de corrupción y que pueden ser también víctimas de represalias, por lo que también será sujeto de la protección del sistema.</p> <p>Lo anterior, de conformidad con las sugerencias y preocupación manifestada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE (2019, p. 57), en el que se instó a Colombia que regulara, como un asunto prioritario, las protecciones idóneas para los denunciantes por acto de soborno.</p> <p>¿De quién se protege?</p> <p>De cualquier tipo de actor, sea interno o externo a la organización y/o institución, que de forma culposa o dolosa pueda afectar la estabilidad laboral, así como la integridad física y emocional.</p> <p>¿De qué se protege?</p>	<p>De cualquier tipo de actuación culposa o dolosa que pueda atentar contra la estabilidad laboral, así como la integridad física y emocional.</p> <p>En este punto, es pertinente resaltar que la situación de riesgo debe ser entendida como un PELIGRO GRAVE E INMINENTE O EN PRESENCIA DE UN RIESGO DE DAÑO IRREVERSIBLE (AMENAZA, EVITAR PERJUICIO IRREMEDIABLE), a propósito, la jurisprudencia ha planteado: <i>"Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (periculum in mora)"</i>¹³</p> <p>Conforme a estos criterios, la Corte ha conceptualizado el perjuicio irremediable, así: <i>"(...) De acuerdo con la doctrina constitucional pertinente, un perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen. Sobre las características jurídicas del perjuicio irremediable la Corte dice en su jurisprudencia lo siguiente:</i></p> <p><i>En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable</i></p> <p>La jurisprudencia ha destacado que cuando se trata de esta hipótesis (situación de riesgo), el accionante deberá acreditar: <i>(i) una afectación inminente del derecho -elemento temporal respecto al daño-; (ii) la urgencia de las medidas para remediar o prevenir la afectación; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el carácter impostergable de las medidas para la efectiva protección de los derechos en riesgo".</i></p> <p>Acceso a la denuncia</p> <p>De acuerdo con la línea seguida por la Unión Europea, las autoridades competentes deben prestar a los Reportantes/Denunciantes el apoyo necesario para que puedan disponer de protección efectiva. En particular, deben facilitarles las pruebas o documentación de otro tipo que sean necesarias para confirmar ante otras autoridades u órganos jurisdiccionales que se ha producido una denuncia externa. En determinados contextos nacionales y en ciertos casos, los Reportantes/Denunciantes pueden gozar de formas de certificación que acrediten que cumplen las condiciones de las normas aplicables. No obstante, tales posibilidades, deben tener acceso efectivo a control judicial, de tal forma que sean los órganos jurisdiccionales los que decidan, sobre la base de todas las circunstancias particulares del asunto, si cumplen las condiciones de las normas aplicables.</p> <p>En esa misma línea, afirma que es importante imponer una obligación clara a las autoridades competentes para que realicen el seguimiento efectivo de las denuncias recibidas, ya que es</p> <p>¹³ Corte Constitucional Auto 259 de 2021 Referencia: Expediente T-8.012.707.44 Magistrada sustanciadora: DIANA FAJARDO RIVERA</p>
<p>crucial para generar confianza en la eficacia del sistema de protección de los Reportantes/Denunciantes y reducir la probabilidad de que se produzcan nuevas denuncias por los mismos hechos o revelaciones públicas innecesarias (Nash, Contreras y Bascur, Universidad de Chile, 2013)</p> <p>Es igualmente fundamental facilitar el acceso público a la información pertinente y de fácil comprensión. Muchos potenciales Reportantes/Denunciantes no presentan formalmente una denuncia o no utilizan los canales adecuados, lo cual puede generar retrocesos, debido a la falta de conocimiento e información sobre el sistema de denuncia y las posibles medidas de protección disponibles. Por lo tanto, en el proyecto se incluye la obligación para las entidades públicas de implementar una política pedagógica relevante dirigida a toda la población.</p> <p>Represalias:</p> <p>Los Reportantes/Denunciantes de todo tipo pueden verse en situaciones de gran riesgo personal y profesional cuando denuncian actos de corrupción o cooperan con las autoridades con el fin de enfrentar cualquier forma de práctica ilícita. Sin embargo, las investigaciones realizadas al respecto muestran asimismo que las personas están dispuestas a correr riesgos si creen que su acción tendrá trascendencia, porque este es el factor crucial a la hora de decidir si colaborarán o no con el sistema.¹⁴</p> <p>Con el fin de orientar nuevas reformas y el proceso de adopción de decisiones, sería interesante y muy valioso proseguir las investigaciones en esta esfera, incluida la percepción que el público tiene de los Reportantes/Denunciantes, el efecto de los cambios en las políticas y la legislación y el análisis de ejemplos de casos. A continuación, se presenta una lista no exhaustiva a manera de ejemplo de las posibles formas de trato injusto o actos de represalia¹⁵:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coerción, intimidación o acoso del reportante/denunciante o de sus familiares 2. Discriminación, trato desfavorable o injusto 3. Lesiones corporales u otro delito capital 4. Daño a los bienes 5. Amenazas de sufrir represalias 6. Suspensión, despido o destitución 7. Descenso de categoría o pérdida de oportunidades de ascenso 8. Transferencia de responsabilidades, cambio de lugar de trabajo, reducción de salario o cambio de horario de trabajo 9. Imposición o ejecución de sanciones disciplinarias, amonestación o penas de otra índole (incluidas de carácter financiero) 10. Inclusión en listas negras (un acuerdo, oficial u oficioso, a nivel sectorial o industrial, que impide a una persona encontrar otro empleo) 11. Enjuiciamiento civil o penal por haber transgredido leyes que protegen el secreto, o leyes que penan las injurias y la difamación <p>De acuerdo con lo establecido por la Unión Europea, el recurso adecuado puede tomar la forma de acciones de reintegración, por ejemplo, en caso de despido, traslado o degradación, o de congelación de formaciones o ascensos, o de restauración de un permiso, licencia o</p>	<p>contrato anulados, indemnización por pérdidas económicas presentes y futuras, por ejemplo, por pérdida de salarios debidos, pero también por futuras pérdidas de ingresos, gastos relacionados con un cambio de trabajo, e indemnización por otros perjuicios económicos, como gastos jurídicos y costes de tratamiento médico, y por daños morales, como por ejemplo, el dolor y el sufrimiento (Nash, Contreras y Bascur, Universidad de Chile, 2013).</p> <p>Es probable que las represalias se presenten como justificadas por razones distintas de la denuncia y puede resultar muy difícil para los Reportantes/Denunciantes probar el vínculo entre ambas, mientras que los autores de las represalias pueden tener más poder y recursos para documentar las medidas adoptadas y motivarlas.</p> <p>Indemnidad</p> <p>Como otra herramienta de protección, el proyecto prevé la figura de la INDEMNIDAD, esto es que con independencia a la forma como el reportante/denunciante obtuvo la información o los documentos que revelan los actos o hechos denunciados, deberá mantenerse indemne de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena, perjuicio o cualquier reclamación judicial o extracontractual con indemnización de perjuicios. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal, pero se hace una precisión importante dentro del articulado del Proyecto de Ley, en su artículo 9° el cual determina que la INDEMNIDAD no aplicará a los sujetos activos de la comisión de un hecho punible y que este en investigación dentro de un proceso penal.</p> <p>Ejemplos de ello serían casos en que el reportante/denunciante hubiera obtenido la información accediendo a mensajes de correo electrónico de un compañero o consultando documentos que no utiliza habitualmente en el marco de su trabajo, o fotografiando los locales de la organización, o entrando en lugares a los que no suele tener acceso y/o transgrediendo un acuerdo de confidencialidad.</p> <p>Es fundamental resaltar que el enfoque de la indemnidad se centra en la responsabilidad que podría surgir como resultado de la infracción o el incumplimiento de cláusulas contractuales de confidencialidad. Estas cláusulas, en ciertas circunstancias, podrían disuadir al informante de divulgar datos o información relacionada con actos de corrupción, debido a la posibilidad de enfrentar sanciones financieras significativas por parte de la entidad o la organización correspondiente. No obstante, es importante tener en cuenta que, si la persona comete un delito penal al acceder a dicha información, estará sujeta a enjuiciamiento según lo establecido por la ley. En tal caso, se procederá a una acción legal con pleno respeto al debido proceso antes de cualquier determinación de responsabilidad.</p> <p>¿Por qué proteger a los Reportantes/Denunciantes de corrupción?</p> <p>En primer lugar, porque la información que revelan tiene un significativo valor y utilidad para la vida pública. En ese sentido, promueve la rendición de cuentas y refuerza la transparencia en la gestión interna de las organizaciones. Quienes denuncian actos de corrupción activan alertas para adoptar medidas y subsanar posibles irregularidades o abusos. Y segundo, porque los denunciantes, sus colaboradores y sus familias suelen enfrentar diversas formas de represalias por atreverse a entregar esta información. Estas represalias van desde el aislamiento o reproche social, las amenazas u hostigamientos dentro o fuera del lugar de trabajo, desmejora de las condiciones laborales, traslados injustificados, despido, marginación de un campo de trabajo, persecución o silenciamiento mediante investigaciones y sanciones administrativas, acciones civiles o penales, perjuicios a sus bienes, e incluso ataques a la integridad y a la vida. Estas situaciones ponen en peligro o vulneran los derechos de los denunciantes y sus familias, a la vez que dañan los intereses de la comunidad.</p>

¹⁴ Por ejemplo, la conclusión reiterada de las encuestas de empleados federales en los Estados Unidos, realizadas en el decenio de 1980, fue que ese temor a la represalia ocupaba solo el segundo lugar entre las razones por las que alrededor de 500.000 empleados optaron por no denunciar irregularidades. La razón primordial era que no pensaban que se fuera a hacer algo para corregir la actividad. Véase T. Devine (2004), "Whistleblowing in the United States: The gap between vision and lessons learned", en Whistleblowing Around the World, Dehn, G. y R. Calland (editores), Londres, Consejo Británico, Pág. 81.

¹⁵ OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO Viena Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de los denunciantes. Nueva York, 2016. Pág. 60

Por tanto, es deber del Estado Social de Derecho adoptar las medidas necesarias para prevenir efectivamente la violación de los derechos fundamentales de quienes otorgan información importante que permita investigar y sancionar actos o hechos de corrupción y de esta forma evitar la concreción de un daño antijurídico de acuerdo con el artículo 90 Constitucional y que de esta forma no se constituya una culpa, falta o falla en el servicio que deba ser indemnizado o reparado de acuerdo a la Responsabilidad Contractual y/o Extracontractual del Estado.

Proceso de Protección:

Para que el sistema de protección funcione y se fortalezca, debe ser institucionalizado, debe convertirse en parte estructural de la entidad, independientemente de quienes la conformen en el tiempo. Esto se da a través de políticas, normas y procedimientos.

De acuerdo con las recomendaciones del CDIH, *el solo hecho de la denuncia debe dar lugar a la inmediata concesión de, al menos, ciertas medidas básicas de protección (para la o el denunciante y en ciertos casos para su familia y/o representantes), tales como asesoría legal y confidencialidad, e incluso la intangibilidad del cargo o puesto de trabajo. Sin perjuicio de las medidas adicionales de protección que correspondan de acuerdo al caso, como por ejemplo, resguardo policial, cambio de residencia, asistencia médica o psicológica, traslado laboral, licencia con goce de sueldo, entre otras.*

Es por ello, que en el proyecto de Ley se incluyó el **Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción – SUPRAC**, que será presidido por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con vigilancia permanente de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, como una herramienta encargada de coordinar y orientar las actividades relacionadas con la implementación y seguimiento del mecanismo de protección de Reportantes/Denunciantes de presuntos actos de corrupción.

Para el cabal objetivo del proyecto de ley y en cumplimiento de su finalidad, el **Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción – SUPRAC**, como dependencia adscrita a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, contará con un talento humano que respaldará esta importante labor.

Las denuncias bajo unos criterios objetivos y subjetivos, que permitan identificar la gravedad y el nivel de riesgo del reportante/denunciante y de esa forma, no solo hacer un seguimiento activo de la denuncia con la correspondiente labor de retroalimentación al reportante/denunciante, sino que se brinden medidas de protección provisionales cuando la amenaza por los derechos fundamentales así lo amerite y el hecho de esperar el trámite de las medidas ordinarias pueda significar la potencial configuración de un perjuicio irremediable.

En ese sentido, es importante que los Reportantes/Denunciantes tengan la oportunidad de intervenir y aportar en los procedimientos de investigación que han activado. Tienen derecho a ser informados del resultado de estos procedimientos, así como a revisarlo o pronunciarse sobre el mismo. (Nash, Contreras y Bascur, Universidad de Chile, 2013)

Del mismo modo, la Guía Técnica de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, dispuso la conveniencia de que los Estados parte tengan presente que en el artículo 36 se hace hincapié en la especialización del personal y los órganos encargados de hacer cumplir la ley: *“Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o más órganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas personas gozarán de la independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado parte, para que puedan*

desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a esas personas o al personal de ese órgano u órganos formación adecuada y recursos suficientes para el desempeño de sus funciones.

Los Estados parte pueden tener en cuenta que, de acuerdo con la experiencia internacional, una de las mayores motivaciones para crear unidades anticorrupción independientes han sido la percepción que se tiene de la independencia de los actuales órganos encargados de hacer cumplir las leyes o los problemas que ello conlleva, y la preocupación pública en relación con su labor. Además, el establecimiento de unidades anticorrupción autónomas puede representar un “nuevo comienzo” en la lucha contra la corrupción o servir de puente hasta el momento en que el público haya recuperado la confianza en las instituciones encargadas habitualmente de hacer cumplir la ley. Por último, la creación de unidades anticorrupción independientes puede ser garantía de una mayor claridad en la evaluación de los avances y la valoración de los éxitos y los fracasos.”

Lo anterior se considera teniendo en cuenta lo expuesto en este documento acerca de la limitada capacidad técnica, administrativa y financiera de los entes de control e instituciones de investigación en temas de corrupción, debido al elevado volumen de denuncias y procesos asignados. Esta situación dificulta brindar un verdadero acompañamiento y protección efectiva para aquellos reportantes o denunciantes de hechos o actos de corrupción que no tienen la calidad de testigos.

D. FORO REALIZADO EL 12 DE AGOSTO DE 2024.

El día 12 de agosto de 2024, se realizó un foro de discusión previo al segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes. Los resultados del presente foro se relacionan a continuación:

TEMAS TRATADOS
CATHERINE JUVINAO CLAVIJO – REPRESENTANTE A LA CÁMARA
Aspectos Positivos
Resalta la importancia de esta iniciativa legislativa, teniendo en cuenta el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de contar con una normatividad especializada en la materia. Destaca que en varias ocasiones se han intentado promulgar una ley en la materia, lo cual no se ha logrado hasta la fecha. Sin embargo, considera que es un momento propicio para dar el trámite en el Congreso de la República de este proyecto que es de iniciativa del Gobierno Nacional – Ministerio de Justicia y del Congreso, además con el apoyo decidido de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. En este proyecto se crean nuevas instancias y medidas para proteger a los denunciantes y estos no paguen con su vida.
Aspectos por mejorar
N/A
ANGELA MARÍA BUITRAGO - MINISTRA DE JUSTICIA
Aspectos Positivos
El proyecto de Ley responde a la necesidad de proteger a los denunciantes de corrupción. En Colombia la corrupción es un destructor del núcleo social y no se cuenta con mecanismos aptos para proteger a quienes denuncia. Destaca la creación del SUPRAC es un mecanismo muy valioso. Igualmente destaca que se contemplan Medidas Provisionales de emergencia para los denunciantes. Resalta que se contemplan como sujetos de especial protección los líderes y defensores de derechos humanos, que son quienes conocen los temas de corrupción en el territorio, así como la protección ampliada a los periodistas que denuncian son quienes conocen los entramados de corrupción. Señala que se basa en la necesidad de proteger de manera previa y con alertas tempranas. Indica que si en Colombia se recuperara el dinero que se ha perdido en corrupción, se tendría más del PIB que hoy se tiene.
Aspectos por mejorar
ANDRÉS IDARRAGA - SECRETARIO DE TRANSPARENCIA
Aspectos Positivos
Las organizaciones de la sociedad civil han participado. Su esencia está en clave de proteger los derechos humanos, la vida e integridad física de quienes realizan denuncias, para que pueda denunciar sin temer por su vida. Se da relevancia a la prensa, que ha jugado un papel fundamental en la denuncia de hechos de corrupción, sobre todo en las regiones, ya que muchos periodistas han perdido la vida por denunciar hechos de corrupción como evidencian las cifras de la FLIP. Es un llamado al propio gobierno, porque los mecanismos de protección no son expeditos, por eso se prevén mecanismos transitorios de protección, para poder atender la situación a través de un mecanismo transitorio sin tener que esperar a que se determine si existe un peligro ordinario o extraordinario. Este modelo ya se probó mediante la ruta protección creada en la Alcaldía de Bogotá en la administración de Gustavo Petro. Esta herramienta debe ser el principal mecanismo para luchas contra el miedo. La experiencia internacional indica que éste es el mecanismo indicado para luchar contra la corrupción.
Aspectos por mejorar
El proyecto fue objeto de debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y que aún puede tener aspectos por mejorar de forma y de fondo y esto se realizará en el Congreso de la República. La reglamentación del proyecto de ley debe permitir reglamentar los controles para que las medidas de protección no se conviertan en una “bolsa sin fondo” y se desincentive la falsa denuncia. Se debe reforzar el mecanismo para evitar las denuncias de mala fe por motivos políticos o personales. Hay poblaciones que requieren un marco de protección especial, como LGTBI, mujeres diversas, estos grupos

deben incluirse, esto se debe reforzar en el proyecto. La preocupación inicial no era hacer un “check list” de los estándares internacionales. El Fondo de reparación de víctimas de corrupción creado por la Ley 2195 se debe reglamentar a través de este proyecto para que existan mecanismos financieros que permitan cumplir con la finalidad de este.

CAMILO EDUARDO UMANA HERNÁNDEZ – VICEMINISTRO DE JUSTICIA
Aspectos Positivos
En Colombia hay 102.000 privados de la libertad de las cuales sólo 730 lo están por actos de corrupción, lo cual es una cifra porcentualmente muy baja. El sistema de política criminal es insuficiente, no hay cómo abarcar redes criminales de corrupción. La corrupción de las más altas esferas que genera mayor impacto utiliza herramientas para el ocultamiento de capitales a través de diferentes mecanismos que dificultan el seguimiento de los activos. Este Proyecto de Ley da un viraje en la dificultad del país en regular esta materia; se ha intentado, pero en la mayoría de los casos se ha generado un estímulo a la denuncia, pero en nuestros sistemas no resulta sostenible. En la mayoría de los proyectos de ley que se presentaron anteriormente, se centraron en los estímulos de la denuncia, lo cual no es viable en el Estado Colombiano. En el caso de este proyecto la protección se centra en los temas de vida, adicionalmente se protege además el trabajo, el vínculo laboral, para que las condiciones laborales no se vean afectada o desmejorada como consecuencia de la denuncia. Otro aspecto que se destaca la confidencialidad: Permite la denuncia bajo la figura del anonimato, lo que supone que una denuncia debe permitir que la persona pueda reservarse contenido de su identidad y ser protegida. La protección de la denuncia no implica per se una ampliación de las formas que visibilización de la corrupción, por eso se prevé lo relacionado con las denuncias de mala fe.
Aspectos por mejorar
Lo relativo a la estabilidad laboral reforzada debe ser objeto de debate en el Congreso y de reglamentación posterior. Se debe establecer cómo se va a armonizar con otros mecanismos de protección existentes en el orden nacional, debe existir comunicación con programas como la Unidad Nacional de Protección el Programa de Protección de la Fiscalía General de la Nación, se debe armonizar y saber el ámbito de actuación de cada uno. Estos programas se encuentran desbordados, se debe llevar a impulsar más denuncias, pero también a impulsar más responsabilidad y más recuperación de los bienes.
JUAN NICOLAS ESCANDÓN – MINISTRO DEL TRABAJO
Aspectos Positivos
La protección a sujetos en condiciones especiales, como lo son los defensores de derechos humanos y sindicalistas.
El reto es la protección a quienes denuncian dentro de su ámbito laboral en el ámbito público y privado. La protección de los denunciantes de corrupción se relaciona de manera directa con la protección del patrimonio público y la posibilidad de cerrar la brecha de la desigualdad. El proyecto permite cumplir con los compromisos adquiridos ante la OCDE.
Aspectos por mejorar
Alerta frente a las competencias que surgirán de esta ley, las acciones de protección y prevención se deben trasladar a quien resulte competente, se debe establecer con claridad hasta dónde va el Ministerio (que actualmente se centra en el ámbito laboral privado) y hasta dónde va la Procuraduría. Las medidas de protección requieren una articulación interinstitucional. No se deben replicar mecanismos ya existentes, sino fortalecer los ya existentes. Se debe fortalecer la inspección, vigilancia y control. Señalan que los requisitos mínimos para la protección laboral que establece el proyecto no son suficientes, para quienes están vinculados fuera de la formalidad, es decir los contratistas tanto en lo público como en lo privado. Se debe evaluar si el Ministerio debe estar dentro del SUPRAC o debe ser un vaso comunicante para documentar los mecanismos de protección para los denunciantes, de acuerdo con las competencias de la entidad, para no afectar las competencias de otras instancias. Frente a la conciliación: Existe una barrera de orden reparador, la previsión de la conciliación supera las competencias del Ministerio de Trabajo, por esta vía no se pueden otorgar derechos, únicamente se gestionan conflictos laborales.
MARÍA DEL MAR PIZARRO GARCÍA – REPRESENTANTE A LA CÁMARA
Aspectos Positivos

<p>Señala que tan solo el 0.2% de los casos de corrupción contra la administración pública, terminan en condena en Colombia, y se han perdido 13 billones de pesos, razón por la cual se deben considerar que estrategias se utilizan en el mundo para combatir este fenómeno. Por eso es necesario implementar estrategias que han sido eficientes en otras latitudes para luchar contra la corrupción; uno de ellos es un sistema de protección de denunciantes robusto, como ocurre en el caso de Japón. Indica que este proyecto de ley es un paso necesario antes de avanzar en la reglamentación sobre beneficiarios finales. Señala que las personas no denuncian debido al miedo por su seguridad, por perder su trabajo y por último exponer su buen nombre, según un estudio de Transparencia por Colombia.</p> <p>La FGN y la UNP únicamente puede brindar protección a víctimas o testigos, por lo cual no cubre a denunciantes.</p> <p style="text-align: center;">Aspectos por mejorar</p> <p>No aplica.</p> <p style="text-align: center;">TC JORGÉ MORA CORTÉS - POLICÍA NACIONAL</p> <p style="text-align: center;">Aspectos Positivos</p> <p>Señala que el delito más complejo que hay por investigar, son los delitos relacionados con la corrupción, especialmente por las redes contractuales, advierte que estos delitos ya no es un fenómeno aislado, sino que es generalizado, además con redes internacionales. Por eso es importante la protección al denunciante y particularmente la protección a la información que tiene el denunciante, lo que permite la judicialización del delito, la corrupción hoy está compuesta de estructuras delictivas que se apropian de los recursos del estado. El estado debe perseguir los hechos de corrupción y proteger a quienes son víctimas de este fenómeno, sobre todo en territorios alejados. La policía lanzará la línea 157, dedicada a hechos de corrupción, articulada con la FGN, lo cual puede dar resultados extraordinarios.</p> <p style="text-align: center;">Aspectos por mejorar</p> <p>Se debe buscar la manera de replicar buenas prácticas internacionales, frente a lo cual señala los ejemplos de los casos de EEUU y el Reino Unido en materia de protección al denunciante en el proceso penal.</p> <p style="text-align: center;">CARLOS EDUARDO PIMENTA TATIS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO</p> <p style="text-align: center;">Aspectos Positivos</p> <p style="text-align: center;">Aspectos por mejorar</p> <p>La defensoría no tiene como tomar medidas de protección sobre denunciantes, tal como se señala en el artículo 4 del proyecto de ley, por lo que solicita que se revise la intervención de esta entidad y de las entidades de control en el proyecto de ley. Cuando se habla del SUPRAC, cuando se habla de adoptar medidas de protección la defensoría no está en esta capacidad, y no lo puede hacer por su competencia y por el lineamiento técnico que tienen otras entidades para determinar la procedencia de las medidas de protección. En el artículo 7 se mencionan los organismos de control, frente a lo cual se señala que se debe acotar el ámbito de competencias de cada organismo, para evitar inconvenientes en la revisión de constitucionalidad de la norma.</p> <p>Por otro lado, se le dan facultades al Ministerio del Trabajo para adoptar medidas de protección de carácter laboral, y la defensoría tampoco tiene como intervenir en ese asunto. Igualmente señala que, en los contratos de prestación de servicios, y la terminación de los contratos, puede generar un choque entre las legislaciones. Lo cual puede dificultar la aplicación y funcionamiento de la ley de protección a denunciantes</p> <p style="text-align: center;">JHONNY MARLON GÁRDENAS AREVALO - AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA</p> <p style="text-align: center;">Aspectos Positivos</p> <p>Destaca la importancia del proyecto toda vez que las iniciativas de lucha contra la corrupción son bienvenidas.</p> <p style="text-align: center;">Aspectos por mejorar</p> <p>Resalta que no se ha tenido en cuenta el acto corrupto respecto con la afectación de los derechos, toda vez que denuncia el incremento de las penas o populismo punitivo, lo que si funciona es la certeza que va a ser sancionado, que va a ir a la cárcel o que sus bienes van a ser incautados, por lo cual este esfuerzo tiene que estar acompañado de la administración de justicia para garantizar que se superen los problemas de impunidad.</p> <p>Por otro lado, advierte en relación con las comisiones o instancias creadas por las leyes se conviertan en otros espacios de burocracia como el SUPRAC, lo que termina en generación de problemáticas, cuando actualmente existen las instancias necesarias para combatir la corrupción, pero se necesita coordinación interinstitucional, lo cual debería estar en cabeza de la Secretaría de Transparencia que debe tener a su cargo la articulación interinstitucional e interagencial.</p> <p>Destaca que la centralización de la información sobre denunciantes de corrupción es delicado, debido a la posibilidad de la filtración de esta información, se deben establecer protocolos de ciberseguridad para garantizar que se proteja la información.</p> <p>Debe existir la publicidad de los resultados de las denuncias para generar confianza al denunciante. Se debería incluir un mecanismo de seguimiento de las denuncias para analizar la información y así caracterizar donde están estas brechas que facilitan el fenómeno y hacer los ajustes a las instituciones que la sancionan.</p> <p>Llama la atención sobre el hecho que el fondo para protección de denunciantes dependa de las multas y que estas no sean suficientes, lo cual podría generar un desincentivo para denunciar.</p> <p>Así mismo resulta importante que también se incluya medidas de protección especial a aquellos ciudadanos que han venido denunciando permanentemente actos de corrupción como los veedores ciudadanos, así mismo deben protegerse los organismos que han denunciado y trabajado en contra de la corrupción, sin embargo, existe una zona gris con organizaciones internacionales y se han desviado a contribuir a la falta de transparencia en la contratación pública.</p> <p>Propone que la consolidación de la información sobre las denuncias para caracterizar las prácticas corruptas y las fallas en la arquitectura institucional que los permitan.</p> <p style="text-align: center;">MAURICIO ORTIZ CORONADO - UNODC</p> <p style="text-align: center;">Aspectos Positivos</p> <p>Agradece los esfuerzos que se han hecho en materia de lucha contra la corrupción debido a que este proyecto de ley hace parte de una legislación necesaria y que es una deuda histórica pendiente de cumplir por parte del Estado colombiano. El barómetro global de la corrupción en el 2019, realizado por Transparencia por Colombia señaló que el 78% de los encuestados consideraron que las denuncias hacen la diferencia en la lucha contra la corrupción pero creen que las personas que van a denunciar están sometidas o sujetas a sufrir represalias, que es precisamente a lo que se enfoca este proyecto, toda vez que no existen medidas concretas y sólidas para proteger a los ciudadanos a los periodistas y a los líderes sociales que ponen en conocimiento de las autoridades hechos de corrupción. Este problema esto nos lleva a la necesidad de unificar y de clarificar el marco jurídico por medio de una normativa que proteja a todas las personas que reporten de buena fe y con motivos razonables los hechos de corrupción de los cuales tengan conocimiento, estableciendo canales seguros de denuncia y garantizando no solamente la denuncia anónima, sino que una vez está sea presentada también se guarde la reserva de la identidad del denunciante durante el curso del proceso.</p> <p style="text-align: center;">Aspectos por mejorar</p> <p>En relación con los compromisos que ha adquirido Colombia se tiene una deuda histórica en el desarrollo de este instrumento internacional sin dar respuesta a la fecha, por lo cual para el instrumento más reciente de buenas prácticas es la Resolución de la Conferencia de Estados Parte, de diciembre de 2023 en Allianta – EEUU que ya están incluidas en este proyecto, sin embargo vale la pena fortalecer el proyecto que no se condicione la protección a los denunciantes estableciendo como un requisito previo que exista un peligro inminente o grave el riesgo de un daño irreversible para el denunciante, que no se tengan en cuenta factores subjetivos como qué tan vulnerable es el denunciante o que tan idóneo es el reporte, establecer el derecho de los denunciantes a continuar participando y aportando en el proceso que tenga lugar con posterioridad a este.</p> <p style="text-align: center;">CLAIRE LAUNAY GAMA – TRANSPARENCIA POR COLOMBIA</p> <p style="text-align: center;">Aspectos Positivos</p>
--

<p>participación ciudadana, por lo cual solicitan fortalecer el control social (veeduría ciudadana), lo cual resulta en que el proyecto no contempla una protección colectiva que proteja los derechos de la comunidad. Señala que en el proyecto no se observa el fortalecimiento de la participación ciudadana y el control social desde lo colectivo. A manera de ejemplo señala que</p> <p>la AGG tiene una herramienta que se denomina "Mi compromiso mi territorio" – Herramienta de la AGR, que comparte con la ciudadanía para ejercer control social para que tenga contacto con los órganos de control y ejecutores de los proyectos. Esto permite que los organismos de control trabajen de la mano con la ciudadanía. La norma requiere un elemento pragmático que la haga operable. El comité rector debe planear estratégicamente la aplicación de la norma para que logre el resultado que se propone. Al respecto, pone como ejemplo los dispositivos interinstitucionales que se crearon mediante el Estatuto Anticorrupción como la Comisión Nacional de Moralización y las Comisiones Regionales de Moralización, que se crearon mediante esta norma pero que no han operado adecuadamente en la práctica.</p> <p style="text-align: center;">CARLOS FELIPE QUINTERO OVALLE – REPRESENTANTE A LA CÁMARA</p> <p style="text-align: center;">Aspectos Positivos</p> <p>Asegura que es de gran importancia los escenarios en donde se escuche a la ciudadanía, organizaciones internacionales y expertos en la materia para fortalecer el proyecto de ley. Menciona que el proyecto se presenta debido a que la legislación colombiana hoy no protege a los denunciantes por corrupción y hay un vacío del Estado en la protección a estos. Colombia está en los rankings de los países más corruptos del hemisferio sur y del mundo, por lo cual se debe continuar con la lucha constante contra la corrupción, la ciudadanía juega un papel fundamental, asegura que de 2145 denuncia en el 2022 el 51% fueron de la ciudadanía, por lo que son las veedurías y los líderes sociales lo que se han puesto en la tarea a denunciar hechos de corrupción de renombre en el país. Llama la atención de la necesidad de que se proteja a quienes presentan denuncias de corrupción ya que hay casos reconocidos en los que han sido lamentablemente asesinados. Igualmente llama la atención sobre la necesidad de que se brinde la protección a quien realmente la requiere.</p> <p style="text-align: center;">Aspectos por mejorar</p> <p style="text-align: center;">JUAN CARLOS DELGADO – AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO</p> <p style="text-align: center;">Aspectos Positivos</p> <p>Llama la atención la voluntad del Congreso para promover estas iniciativas y la necesidad de definir ¿Qué es corrupción? Lo cual es de vital importancia para la lucha contra este fenómeno. Resalta la necesidad de revisar el tema de la veracidad que se solicita al denunciante.</p> <p style="text-align: center;">Aspectos por mejorar</p> <p>Resalta la necesidad de revisar relacionado con la veracidad de la información que se solicita al denunciante, ya que hay una exigencia muy alta al denunciante lo que puede generar un desincentivo a la denuncia. Por otro lado, advierte que se trata de manera igual al denunciante y al reportante, y para la agencia tiene una connotación diferente. Lo cual debe diferenciarse, señala igualmente que dentro del proyecto de ley no se aborda la "queja", la cual también puede dar información sobre actos de corrupción e iniciar investigaciones. Igualmente debe revisarse la intervención de la Agencia, toda vez que su misionalidad se centra en la defensa del Estado con futuras acciones contenciosas puede generar conflicto de interés, por lo cual en principio no se considera que deba hacer parte.</p> <p style="text-align: center;">CARLOS AUGUSTO CHACÓN - DIRECTOR INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA</p> <p style="text-align: center;">Aspectos Positivos</p> <p>Resalta la pertinencia del proyecto desde un análisis de derecho comparado, a través de la adopción de medidas estándar que se evidencian en legislaciones de otros países y las directivas de la Unión Europea en la materia.</p> <p>Establece que proteger el denunciante está muy bien, está de acuerdo con la centralización de la información de denunciantes, fomenta la denuncia, pero debe existir protocolos de protección de los datos de los denunciantes, con herramientas robustas de ciberseguridad, por lo cual deben existir los recursos y los mecanismos para proteger esta información. Resalta el compromiso de lucha contra la corrupción del Congreso y solicita ser más activos en esta lucha.</p> <p style="text-align: center;">Aspectos por mejorar</p>
--

<p>Advierte que el proyecto resulta de importancia, sin embargo, señala que la denuncia resulta ineficaz si no existe la sanción efectiva de las represalias, es decir la impunidad o la falta de efectividad del sistema judicial, como tampoco funciona el incremento de las penas o populismo punitivo, lo que si funciona es la certeza que va a ser sancionado, que va a ir a la cárcel o que sus bienes van a ser incautados, por lo cual este esfuerzo tiene que estar acompañado de la administración de justicia para garantizar que se superen los problemas de impunidad.</p> <p>Por otro lado, advierte en relación con las comisiones o instancias creadas por las leyes se conviertan en otros espacios de burocracia como el SUPRAC, lo que termina en generación de problemáticas, cuando actualmente existen las instancias necesarias para combatir la corrupción, pero se necesita coordinación interinstitucional, lo cual debería estar en cabeza de la Secretaría de Transparencia que debe tener a su cargo la articulación interinstitucional e interagencial.</p> <p>Destaca que la centralización de la información sobre denunciantes de corrupción es delicado, debido a la posibilidad de la filtración de esta información, se deben establecer protocolos de ciberseguridad para garantizar que se proteja la información.</p> <p>Debe existir la publicidad de los resultados de las denuncias para generar confianza al denunciante. Se debería incluir un mecanismo de seguimiento de las denuncias para analizar la información y así caracterizar donde están estas brechas que facilitan el fenómeno y hacer los ajustes a las instituciones que la sancionan.</p> <p>Llama la atención sobre el hecho que el fondo para protección de denunciantes dependa de las multas y que estas no sean suficientes, lo cual podría generar un desincentivo para denunciar.</p> <p>Así mismo resulta importante que también se incluya medidas de protección especial a aquellos ciudadanos que han venido denunciando permanentemente actos de corrupción como los veedores ciudadanos, así mismo deben protegerse los organismos que han denunciado y trabajado en contra de la corrupción, sin embargo, existe una zona gris con organizaciones internacionales y se han desviado a contribuir a la falta de transparencia en la contratación pública.</p> <p>Propone que la consolidación de la información sobre las denuncias para caracterizar las prácticas corruptas y las fallas en la arquitectura institucional que los permitan.</p> <p style="text-align: center;">MAURICIO ORTIZ CORONADO - UNODC</p> <p style="text-align: center;">Aspectos Positivos</p> <p>Agradece los esfuerzos que se han hecho en materia de lucha contra la corrupción debido a que este proyecto de ley hace parte de una legislación necesaria y que es una deuda histórica pendiente de cumplir por parte del Estado colombiano. El barómetro global de la corrupción en el 2019, realizado por Transparencia por Colombia señaló que el 78% de los encuestados consideraron que las denuncias hacen la diferencia en la lucha contra la corrupción pero creen que las personas que van a denunciar están sometidas o sujetas a sufrir represalias, que es precisamente a lo que se enfoca este proyecto, toda vez que no existen medidas concretas y sólidas para proteger a los ciudadanos a los periodistas y a los líderes sociales que ponen en conocimiento de las autoridades hechos de corrupción. Este problema esto nos lleva a la necesidad de unificar y de clarificar el marco jurídico por medio de una normativa que proteja a todas las personas que reporten de buena fe y con motivos razonables los hechos de corrupción de los cuales tengan conocimiento, estableciendo canales seguros de denuncia y garantizando no solamente la denuncia anónima, sino que una vez está sea presentada también se guarde la reserva de la identidad del denunciante durante el curso del proceso.</p> <p style="text-align: center;">Aspectos por mejorar</p> <p>En relación con los compromisos que ha adquirido Colombia se tiene una deuda histórica en el desarrollo de este instrumento internacional sin dar respuesta a la fecha, por lo cual para el instrumento más reciente de buenas prácticas es la Resolución de la Conferencia de Estados Parte, de diciembre de 2023 en Allianta – EEUU que ya están incluidas en este proyecto, sin embargo vale la pena fortalecer el proyecto que no se condicione la protección a los denunciantes estableciendo como un requisito previo que exista un peligro inminente o grave el riesgo de un daño irreversible para el denunciante, que no se tengan en cuenta factores subjetivos como qué tan vulnerable es el denunciante o que tan idóneo es el reporte, establecer el derecho de los denunciantes a continuar participando y aportando en el proceso que tenga lugar con posterioridad a este.</p> <p style="text-align: center;">CLAIRE LAUNAY GAMA – TRANSPARENCIA POR COLOMBIA</p> <p style="text-align: center;">Aspectos Positivos</p>
--

<p>Resalta la importancia del proyecto debido al vacío normativo que había, resalta que amplía el concepto de denunciante por lo cual contempla su diversidad y contempla medidas integrales para la protección al denunciante. Para lo cual solicita se dé prioridad a la iniciativa para que se dé una discusión amplia y suficiente.</p> <p style="text-align: center;">Aspectos por mejorar</p> <p>El proyecto de ley busca establecer medidas integrales de protección, incluyendo las medidas de protección laboral, sin embargo, se tiene una restricción para las medidas de traslado de dependencia o del lugar de trabajo debido a que fueron suprimidas en el trámite por lo cual se insiste en su inclusión. Se recomienda igualmente que se aumenten las sanciones a los empleadores por retaliaciones en el marco de la relación laboral, incluidas sanciones económicas cuyos recursos pueden ser utilizados para financiar las medidas de protección, para lo cual se cita como ejemplo un proyecto de ley de Costa Rica en la materia. Se mantiene el principio de buena fe, y se sanciona la mala fe lo que implica que el denunciante tiene la carga de la prueba pues en el texto se le solicita aportar acervo probatorio. Sin embargo en el artículo de definiciones se eliminó el principio de buena fe del denunciante, lo cual pondría la carga de la prueba en el denunciante y podría desincentivar la denuncia.</p> <p style="text-align: center;">MARLON PABÓN CASTRO - MOE</p> <p style="text-align: center;">Aspectos Positivos</p> <p>Resalta la importancia del proyecto debido al vacío normativo es esta materia, resalta que amplía el concepto de denunciante.</p> <p style="text-align: center;">Aspectos por mejorar</p> <p>El proyecto debe basarse en la confianza y en la legitimidad toda vez que la protección de los datos personales de los denunciantes es un punto de gran importancia para garantizar el éxito en la denuncia de actos de corrupción debido a los datos sensibles compartidos. Por otro lado, no se logra entender ella intervención de entidades como Colombia Compra Eficiente o el ministerio del Interior, teniendo en cuenta su marco de competencias. Igualmente cuestiona la razón de que la Secretaría de Transparencia coordine la implementación del proyecto de ley, teniendo que esta oficina hace parte del ejecutivo, y es esta rama la que recibe más denuncias de corrupción, se estima que el 32 % de las denuncias de actos de corrupción proceden de la rama ejecutiva, y esta entidad como secretaria técnica no brinda la legitimidad ni la confianza de la administración de la información de los denunciantes. La rama ejecutiva concentra la mayor parte de los actos de corrupción en el estado. No puede permitirse que la información de los denunciantes sea utilizada para su persecución. Y se pregunta cuál es el papel de la UNP, si es quien tiene la obligación legal de adoptar medidas de protección.</p> <p style="text-align: center;">JUAN PABLO CONTRERAS – INSTITUTO ANTICORRUPCIÓN</p> <p style="text-align: center;">Aspectos Positivos</p> <p>Apoyan la iniciativa del Congreso y resalta la importancia, resalta la creación del SUPRAC. Resaltan las medidas adoptadas en materia de protección a la estabilidad laboral. Es importante el reporte de estadísticas e informes, pero deben ser en datos abiertos para que sean utilizados por las organizaciones de la sociedad civil.</p> <p style="text-align: center;">Aspectos por mejorar</p> <p>Advierte sobre las falsas expectativas que puede generar el proyecto respecto de las medidas de protección y su cumplimiento, consideran que la Secretaría de Transparencia no debería liderar el SUPRAC, sino una entidad que tenga presencia regional y en zonas de alto riesgo. Solicitan revisar los recursos asignados en el apoyo económico al denunciante debido a que son insuficientes. La protección debe iniciarse a partir del mismo momento de la denuncia. La valoración de la mala fe puede resultar un acceso judicial al denunciante, por lo que debe revisarse la redacción. No está clara la cooperación o cofinanciación internacional y deben analizarse las recompensas económicas al denunciante.</p> <p style="text-align: center;">ALEJANDRA QUINTERO MEDINA - PNUD</p> <p style="text-align: center;">Aspectos Positivos</p> <p>Resalta el beneficio de la estrategia del proyecto y la importancia de la participación de la sociedad civil y el acompañamiento de diferentes organizaciones internacionales. Celebran este espacio para fortalecer el debate.</p> <p style="text-align: center;">Aspectos por mejorar</p> <p style="text-align: center;">CAROLINA BOTERO - FUNDACIÓN KARISMA</p>

Aspectos Positivos
Es importante el proyecto, pero definirse mejor el concepto de corrupción y de corrupción estructural y la protección de datos. Es tan amplio el concepto de corrupción que en algunos países el acoso sexual como una perspectiva de género hace parte de este concepto.
Aspectos por mejorar
La denominación de "Denunciante" implica una gran responsabilidad, en otros países se ha señalado el concepto de "Reportante", para no poner la carga de la prueba de la buena fe de quien tiene la información del acto de corrupción. Se debe abrir más del concepto de corrupción, no solamente en el espectro financiero. Es de vital importancia el anonimato en el reporte de actos de corrupción y fortalecer los mecanismos de ciberseguridad en la protección de los datos, y los mecanismos de financiación de los recursos para adoptar medidas de protección.
MOVIMIENTO CIUDADANO ANTICORRUPCIÓN - JAMES FONSECA - PAULA BARRERA
Aspectos Positivos
Están favor del proyecto, fortaleciendo las capacidades ciudadanas y la perfección de datos. Se deben establecer reglamentaciones claras para la creación del fondo de financiación y su funcionamiento.
Aspectos por mejorar
La carga de la prueba al denunciante desincentiva la misma. Las personas que firman cláusulas de confidencialidad también deben estar protegidas en sus vínculos laborales o contractuales, advierte que la Secretaría de Transparencia no tiene presencia regional y esto se requiere de manera esencial. Las medidas de protección deben garantizar los derechos humanos de los denunciantes acorde con la convención del trabajo.
JUAN FERNANDO VÉLEZ GRANADA - CORPORACIÓN REGIÓN
Aspectos Positivos
La respuesta de las entidades del estado no es contundente, por lo que valoran la iniciativa de este proyecto de ley. Valorar la intervención del Ministerio del Trabajo por la protección laboral y de estabilidad que se da al denunciante.
Aspectos por mejorar
Proponen que se alinee con la estrategia de lucha contra la corrupción, por ejemplo, con los conceptos, que se identifique el rol de las organizaciones de la sociedad civil que conocen la realidad y el contexto del denunciante, se debe fortalecer la Secretaría de Transparencia para que responda a las exigencias de las iniciativas

E. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN.

La corrupción es una problemática profunda y compleja, la cual tiene como consecuencia directa la violación de los derechos políticos y sociales de la ciudadanía. Igualmente, en ella confluyen todo tipo de actores, tanto del sector público como del privado que, en muchas ocasiones, se valen de la violencia y la amenaza para conquistar el silencio de quienes se encuentran en desacuerdo. Por eso es necesario construir un marco normativo integral que proteja a los ciudadanos que denuncien estos hechos y promueva denunciantes.

La protección de Reportantes/Denunciantes de corrupción hace referencia al conjunto de acciones institucionales orientadas a garantizar los derechos de los denunciantes que podrían verse amenazados o disminuidos por represalias causadas a raíz de su revelación.

En la actualidad son numerosos los países y organizaciones internacionales que están desarrollando legislaciones especiales sobre el tema, habiendo generado declaraciones de principios, instrumentos normativos internacionales y leyes modelo, entre otras herramientas de cooperación, bajo el entendido que la protección de denunciantes es una herramienta válida y necesaria para enfrentar a la corrupción.

De hecho, desde sus orígenes las leyes de protección de denunciantes han estado orientadas a evitar fraudes en la Administración y en los servicios públicos, comprendiendo que la

revelación de hechos indebidos podría ayudar a prevenir mayores consecuencias de orden económico o de seguridad¹⁵.

En efecto, una legislación específica se hace necesaria para proteger a los denunciantes por presuntos actos o hechos de corrupción otorga beneficios adicionales, los cuales son pertinente señalar a continuación:

Permite garantizar con mayor eficiencia y eficacia la protección a los denunciantes de hechos o actos de corrupción.

La conveniencia de establecer medidas concretas para salvaguardar la integridad física, la privacidad y los derechos de los denunciantes.

Brindaría un herramienta clara y accesible para el ciudadano común sobre las aristas del proceso al que se enfrenta si decide informar los hechos o actos de corrupción que son de su conocimiento.

Definición de plazos y procedimientos para la evaluación de denuncias y solicitudes de protección, todo ello bajo un mismo sistema de gestión denominado SUPRAC (Sistema Unificado de Protección a Reportantes o Denunciantes de Actos de Corrupción- SUPRAC. El SUPRAC estará adscrito a la Secretaría de Transparencia y tendrá la función de hacer un seguimiento adecuado y proporcionar retroalimentación al denunciante/interesado.

La disuasión de represalias es un objetivo fundamental, ya que la sanción explícita de conductas que constituyen retaliación contra quienes denuncian actos de corrupción actúa como un desalentador para aquellos que podrían intentar llevar a cabo dichas represalias. Además, esta medida proporciona información y seguridad para las posibles víctimas de represalias, creando así un entorno más seguro y protegido.

Una ley específica puede desempeñar un papel crucial en fomentar una cultura de denuncia en la sociedad colombiana. Al establecer un sistema de protección dedicado a los denunciantes de presuntos hechos o actos de corrupción, se envía un mensaje claro de que se valora y protege a aquellos que tienen el coraje de denunciar, lo que a su vez puede generar un incentivo para que otras personas también denuncien.

Cumplimiento de estándares internacionales, lo cual promueve la cooperación en la lucha contra la corrupción.

En adición a lo anterior, es importante clasificar y categorizar qué normas estarán relacionadas con la corrupción. Al respecto, el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, por medio de un ejercicio teórico y normativo, consagró tres parámetros que permiten establecer si la norma vulnerada tiene relación o no con temas de corrupción:

1. Mal uso de poder para obtener provecho personal
2. Detrimiento patrimonial
3. Perjuicio social significativo

Asimismo, según Transparencia Internacional, la **corrupción** consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.

En Colombia, los delitos asociados a la corrupción se encuentran en 3 títulos diferentes del Código Penal, constitutivo de alrededor 32 tipos penales, los cuales en su mayoría son en contra de la administración pública. En el proyecto de ley se optó por nombrar cada uno de

¹⁶ Ibidem pág. 16-17

ellos con el objetivo de hacer un ejercicio didáctico y que sea fácil para el ciudadano identificar cuáles conductas están asociadas específicamente a la corrupción.

F. DIAGNÓSTICO.

El manejo de denuncias sobre presuntos hechos o actos de corrupción representa un desafío complejo en la mayoría de los países. Es bien conocida la limitación de las autoridades para procesar y resolver estas denuncias de manera rápida y efectiva. Las autoridades encargadas de las investigaciones enfrentan un volumen significativo de denuncias, lo que dificulta su pronta gestión.

Gran parte de los esfuerzos contra la corrupción se focalizan en penalizar o sancionar, pero no en establecer mecanismos efectivos para prevención o para los reportes o denunciantes de corrupción. En la mitad de los países existen mecanismos que son insuficientes para proteger a los denunciantes. (Latin-America-Anti-corruption-Assessment-2021-2022), las autoridades anticorrupción no tienen suficientes recursos humanos y financieros, experticia y tecnología para prevenir e investigar actos de corrupción. De igual forma, la coordinación de mecanismos entre las autoridades no existe, no es usado o es insuficiente. (Latin-America-Anti-corruption- Assessment-2021-2022)

Según Newman y Ángel (2017), y partir de una revisión de literatura sobre la corrupción, esta problemática contiene dos elementos esenciales: el abuso o desviación de poder, tanto en ámbitos públicos como privados y el beneficio privado, el cual puede ser a nivel personal o para terceros. Por otra parte, las clasificaciones de corrupción dependen de los criterios que se decidan adoptar, bien sea por su grado de estructuración (esporádica, sistémica o institucionalizada), la escala y los actores involucrados (burocrática o pequeña frente a la política o grande) o según las reglas jurídicas o morales que viole (Newman Pont & Ángel Arango, 2017).

De igual forma, las consecuencias de la corrupción pueden analizarse desde los impactos en el desarrollo y el crecimiento, a partir una óptica económica; la afectación al Estado Social de Derecho, para el derecho; la pérdida de legitimidad y confianza por parte de la ciudadanía consecuencia de los numerosos escándalos de corrupción, en función de la ciencia política; y, finalmente, con una mirada sociológica, los costos morales de los hechos de corrupción (Newman Pont & Ángel Arango, 2017).

Según el Índice de Percepción de la Corrupción del 2022, Colombia obtuvo un puntaje de 39, donde 0 es corrupción elevada y 100 corrupción inexistente, y ocupa el puesto 91 de 180 países y según la fuente, un puntaje mejor a 50 indica niveles de corrupción muy elevados. (Transparencia Internacional, 2022)¹⁷.

A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera a los y las denunciantes hechos o actos de corrupción como defensores/as de los derechos humanos (2019)¹⁸, no existe en Colombia un marco normativo que proteja sus vidas e integridades cuando se realiza la denuncia; situación que explicaría el por qué, según el estudio Barómetro Global de la Corrupción América Latina y el Caribe de 2019, aproximadamente el 78% de los encuestados considera que denunciar actos de corrupción puede traer represalias para quien realiza la denuncia, sus familiares y allegados; sumado a

¹⁷ <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>

¹⁸ <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHES.pdf>

que el 58% cree que es muy poco probable que las denuncias resulten en algún tipo de sanción.

Considerando el índice de percepción de corrupción del año 2021, en el que Colombia se encuentra en el puesto 87 de 180 países evaluados (Transparencia Colombia, 2022), es notable que el país presenta una situación preocupante en materia de corrupción y que es necesario trabajar en un marco normativo que regule la protección a los/las denunciantes y el accionar de las veedurías para garantizar que estas denuncias sean tenidas en cuenta y resulten en sanciones efectivas para disminuir estas cifras. Así mismo, es importante mencionar que en el año 2022 se han recibido 2184 denuncias sobre posibles hechos de corrupción, según registros de la Secretaría de la Transparencia y el Portal Anticorrupción de Colombia, de las cuales el 42,45% han sido realizadas por la ciudadanía (PACO, 2022):



Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, la cantidad de denuncias por corrupción ha aumentado en los últimos años (El tiempo, 2020); sin embargo, esto no ha sido producto de un marco de protección a denunciantes, por el contrario, siguen existiendo casos de amenazas e incluso asesinato a denunciantes, además de un profundo desconocimiento por parte de los ciudadanos para ejercer las denuncias.

A pesar de que en Colombia existen entidades con la facultad de proteger a ciudadanos cuyos derechos se encuentran vulnerados, estas se dividen en dos categorías: las del ministerio público y las defensorías del pueblo, que solo pueden ofrecer asesoría y orientación; y las de la Fiscalía Nacional o la Unidad Nacional de Protección (UNP), facultadas para evaluar el riesgo y adoptar medidas de protección (Transparencia Colombia, 2020). Sin embargo, el acceso a estas medidas de protección está limitado, ya que solo un reducido número de denunciantes puede acceder a ellas, ya que deben cumplir con los requisitos de ser víctimas o testigos."

La ausencia de legislación integral y concreta que regule y garantice la implementación de estas medidas para todas las personas que deciden denunciar actos de corrupción en todas sus modalidades y tipologías en Colombia, tiene como resultado el alto número de víctimas de amenaza y asesinato tras denunciar; tal es el caso del periodista Rafael Emiro Moreno Garavito quien fue asesinado en Montelíbano, Córdoba el pasado 16 de octubre de 2016 tras haber investigado y denunciado múltiples actos de corrupción en el departamento y luego de

haber alertado en varias ocasiones a la Unidad Nacional de Protección sobre amenazas en contra de su vida para que aumentaran su esquema de seguridad, ante lo cual la UNP se negó e incluso dudó de dichas amenazas en contra de su vida (El Espectador, 2022).

En la misma línea de ejemplo, en el año 2020, habían sido asesinadas 4 personas implicadas en la denuncia de actos de corrupción de la alcaldía del municipio de la Candelaria en departamento del Valle del Cauca y otros 3 de los denunciantes no contaban con protección, luego de que la UNP no encontrara méritos para seguir cuidándolos y se determinara retirarles el esquema de seguridad, a pesar de las constantes y directas amenazas de las que estaban siendo víctimas (Semana, 2020).

Finalmente, la representante a la cámara de Risaralda, Carolina Giraldo ha sido amenazada de muerte por una intervención en un debate de control político en el Congreso de la República donde aseguró que parte del dinero destinado a proyectos de paz fue entregado a miembros del Clan del Golfo (Infobae, 2022); aunque en este caso la UNP sí se pronunció anunciando que estarían revisando el esquema de seguridad de la representante.

En adición a lo anterior, es importante también que se ejecuten políticas públicas efectivas en torno a reducir el porcentaje de impunidad por hechos y conductas asociadas a delitos de corrupción. Con respecto a esto, es pertinente traer a colación el Informe sobre la Impunidad en la Investigación de Delitos Relacionados con Corrupción Administrativa¹⁹ en el que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República ha revelado el mapa de la impunidad frente a los delitos de corrupción en Colombia, utilizando datos públicos recopilados entre 2010 y 2023, y a través del cual se identificaron las regiones del país con mayor cantidad de casos sin resolver. El propósito de esta investigación es permitir a las autoridades dar seguimiento a estos hechos y buscar la justicia en relación a estos delitos.

Al respecto, el Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga afirmó: *"Estos datos son irrefutables. Colombia se encuentra sumergida en un mar de impunidad. La aplicación de la justicia en los casos de corrupción apenas alcanza un tímido y cobarde 6%. Como nación, esto nos causa vergüenza"*.

De acuerdo con el informe consolidado sobre denuncias asociadas a la corrupción, se registraron un total de 57.582 casos durante el periodo investigado. Del total, el 93.99% no cuenta con una condena, el 89.7% no ha generado capturas, y el 77.15% se encuentra en etapa de indagación.

Los departamentos con mayor número de denuncias por corrupción sin condena son: San Andrés (99.1%), Guaviare (99%), Bolívar (98.5%), Putumayo (97.6%), La Guajira (97.5%), Casanare (97.5%), Córdoba (97.2%), Vaupés (97.2%), Arauca (97%), y Sucre (96.8%).

En cuanto a los delitos sin capturas, los departamentos con mayor índice son: Vaupés (98.6%), Guaviare (98%), Guainía (96%), Boyacá (95.7%), Cundinamarca (95.4%), Putumayo (95.1%), Caldas (94.5%), Huila (94.4%), Casanare (94.1%), y Santander (94.1%).

Los departamentos con mayor impunidad en delitos asociados a la corrupción, es decir, sin condenas, son: San Andrés (99.1%), Guaviare (99%), Vaupés (98.5%), Arauca (97.6%), Casanare (97.5%), Putumayo (97.5%), La Guajira (97.2%), Córdoba (97.2%), Bolívar (97.2%), y Sucre (97%).

El análisis de los delitos asociados a la corrupción administrativa revela los siguientes datos: peculado por apropiación (26%), contrato sin cumplimiento de requisitos legales (24.6%), concusión (10.1%), cohecho por dar u ofrecer (9.8%), interés indebido en la celebración de

¹⁹ <https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/SECRETARIA-DE-TRANSPARENCIA-REVELO-EL-PRIMER-MAPA-DE-LA-IMPUNIDAD-EN-COLOMBIA-230717.aspx>

avanzó ligeramente en las categorías de sociedad civil y medios de comunicación y de capacidad legal, pero descendió un 6% en la categoría de democracia e instituciones políticas, manteniendo una tendencia a la baja en esa categoría desde 2019 y quedando por detrás de la media regional. Dentro de la categoría de capacidad legal, Colombia tuvo un retroceso del 20% en la variable que evalúa los organismos anticorrupción. Durante el mandato del presidente Iván Duque, la independencia de las oficinas de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía General de la Nación ha sido ampliamente cuestionada. En enero, Duque promulgó un proyecto de ley anticorrupción de amplio alcance que aborda el papel de las empresas privadas en la facilitación y en la lucha contra la corrupción. Las nuevas medidas aumentan la probabilidad de que las empresas sean objeto de investigaciones por corrupción, pero algunos observadores afirman que la ley no aborda adecuadamente la influencia de los intereses especiales que existen en el gobierno ni las deficiencias del sistema judicial. Colombia registró un descenso del 21% en la variable que evalúa la calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas en un año electoral clave."

G. MARCO NORMATIVO:
MARCO NORMATIVO NACIONAL:

La legislación nacional relacionada con la protección a denunciantes de corrupción es en realidad escasa y la órbita legal en la materia específica es dispersa y confusa, considerando que no hay una correspondiente al tema en específico. Por ejemplo, la Ley 1941 de 2018 presenta algunos lineamientos relacionados con la protección de testigos, víctimas y denunciantes, lo cual dio lugar a la creación desde el Ministerio del Interior a un programa de protección a dicha población; no obstante, no acude específicamente a la protección de denunciantes de corrupción, teniendo presente las particularidades de estos casos, tales como la toma de represalias laborales y/o personales y la falta de un acompañamiento integral durante el proceso.

De igual forma, en el artículo 64 del Código de Procedimiento Penal y en el artículo 24 del Código Único Disciplinario se establece como obligatorio para los servidores públicos el denunciar delitos y faltas disciplinarias de los cuales se tenga conocimiento (Transparencia Colombia, p. 11, 2020); sin embargo, teniendo en cuenta el vacío legislativo en términos de la protección a denunciantes, los servidores públicos no cuentan con las garantías necesarias para cumplir con esta obligación en términos de protección, lo que podría traer consigo que muchos se abstengan de denunciar.

A pesar de que en los últimos años se han presentado reiteradas iniciativas al respecto, el panorama nacional es que no existe una legislación integral sobre el tema de la denuncia por corrupción, que contemple este tipo de situaciones tanto en el sector privado como en el sector público, que garantice agilidad y seguimiento en la denuncia y que, a su vez, tenga como pilar la protección del denunciante. (Transparencia Colombia, p. 13, 2020)

Inicialmente es importante mencionar que no existe una plena caracterización del denunciante o *whistleblower*, pues se contempla en la legislación nacional como único denunciante al servidor público; sin embargo, ya que se contempla la corrupción en un aspecto muy amplio, esta tiene cabida tanto en el ámbito público como el privado, por lo tanto, el denunciante pasa a ser un ciudadano común y corriente que no representa una población en riesgo o vulnerabilidad y por lo tanto, carece de protección y atención (Transparencia Colombia, 2020, p.25); adicionalmente en el contexto latinoamericano, el concepto *whistleblower* no cuenta con una traducción exacta, lo que ha dado paso a que se atribuya

contratos (7.4%), cohecho propio (3.7%), peculado por aplicación oficial diferente (3.5%), enriquecimiento ilícito (3.1%), tráfico de influencias de servidor público (2.4%), y peculado por uso (2.1%).

El mapeo realizado es el resultado de una investigación realizada entre los años 2010 y 2023, identificando así cuáles son los departamentos del país con los porcentajes más altos de procesos de delitos asociados a la corrupción.

En consonancia con lo anterior, se reportó un total de 27.582 casos, de los cuales, el 93.99 % no tienen condena; el 87 % son casos sin captura y el 77,15 % están en proceso de indagación. Lo anterior deja en evidencia la falta de capacidad técnica por parte de las instituciones facultadas para ofrecer medidas de protección, para atender eficazmente las denuncias y más que todo para garantizar la protección de los/as denunciantes, esto, en razón a que la falta de legislación en torno a la protección ha generado que el acceso a ésta tenga exigentes requisitos entre los cuales es necesario un proceso penal en curso y un fiscal asignado (Transparencia Colombia, 2020); debido a la complejidad de estos procesos, la legislación deja de lado el momento previo y en curso de la presentación de la denuncia, es decir, aquel en que el denunciante se encuentra en una posición de mayor vulnerabilidad.

En este punto, es de relevancia traer a colación lo afirmado por el Departamento Nacional de Planeación-DNP-, en el documento sobre *"Costos de la corrupción en Colombia"*²⁰, la calidad de la información que producen los organismos de control sobre las investigaciones que versan sobre conductas contra la administración pública no llena los estándares requeridos bajo las directrices de la Política de Gobierno Abierto, como tampoco se vislumbran acciones eficientes y eficaces en la prevención y control de ese fenómeno.

Adicionalmente, sostiene que: *"(...) surge la duda de si en Colombia tanto los medios, como los organismos de control estatal, logran diferenciar claramente los malos manejos administrativos, las fallas en la ejecución de planes y programas en el ámbito de cada una de las instituciones del Estado, de lo que debe entenderse ciertamente por corrupción."*

Asimismo, según **ÍNDICE DE CAPACIDAD PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN-AMERICAS SOCIETY COUNCIL OF THE AMERICAS**²¹, el cual evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que combaten la corrupción, Colombia sigue enfrentando desafíos que afectan su capacidad para combatir la misma. El país ha estado en una trayectoria descendente de varios años en el Índice: su puntuación general cayó un 10% de 2019 a 2021.

El Índice tiene en cuenta Variables por categoría como: Independencia y eficiencia judicial; Independencia y eficacia de los organismos anticorrupción; Acceso a la información pública y transparencia general del gobierno; Independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación Nivel de conocimientos y recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco; Calidad de los instrumentos de delación premiada Nivel de cooperación internacional en materia de orden público; Democracia e Instituciones Políticas; Calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas Procesos legislativos de gobierno; Calidad general de la democracia Sociedad Civil y Medios de Comunicación; Movilización de la sociedad civil contra la corrupción; Mejoras en la educación Calidad de la prensa y del periodismo de investigación Comunicaciones digitales y redes sociales.

Conforme al mencionado índice, Colombia, *"a pesar de haber tenido una pequeña mejora en su puntuación general, Colombia cayó del séptimo al octavo lugar en el Índice. Colombia*

²⁰ <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Economicos/111.pdf>

²¹ <https://www.as-coa.org/>

una connotación peyorativa en la que se entiende al alertador o denunciante como *sapo o soplón* y que se materializa en riesgos a su integridad.

Esta ausencia de caracterización explica la inexistencia de instituciones cuyo propósito sea la elaboración e implementación de proyectos y funciones específicas en relación con la protección de este grupo de personas que no implique su tipificación como víctimas o testigos en los casos de corrupción, ante esto, cifras alarmantes de Transparencia Colombia indican que: Entre 2016 y 2017 sólo una persona vinculada fue incluida al programa de protección víctimas y testigos en casos asociados con corrupción, por lo cual el descenso fue de 24 casos. Entre 2014 y 2015, solamente un caso entre 2016 y 2017, situación que no encuentra ninguna explicación en los informes públicos de la Fiscalía General. (2020, p. 20)

En ese orden de ideas, es necesario estructurar e implementar un marco normativo integral que se responsabilice de la protección de los denunciantes de hechos de corrupción a nivel nacional, que a su vez genere seguridad e incentive a lo/as ciudadanos a presentar las denuncias. Por eso el debate sobre el tema debe reflejarse en su aparición en el legislativo y a nivel institucional, garantizando su aplicación para quienes deseen denunciar sin importar el sector al que pertenezcan, ya que al introducir la protección a informantes al debate público se impulsa la coordinación del tema en las entidades, así como la necesidad de concertar estrategias de articulación en varias instituciones nacionales (Badel, 2016, p. 83). Es decir, la propuesta a nivel legislativo debe ir acompañada de la formalización e institucionalización de los mecanismos de protección al denunciante. Pese a la apertura de más canales de denuncia y la posibilidad de un acceso más simple a las plataformas que lo permiten, la incertidumbre frente al curso de la denuncia y la duración de algunos procesos, desmotivaron a los ciudadanos al pretender presentar una denuncia. Más allá de los posibles impedimentos a nivel financiero o institucional sobre el avance satisfactorio de las denuncias interpuestas, es importante promover la difusión concreta y clara de la información, referentes a las etapas de la denuncia y el progreso de la investigación.

Asimismo, la elaboración de una normativa integral enfocada en la denuncia de hechos de corrupción y la protección del denunciante, debe ir acompañada de una política pública que incluya el aprendizaje colectivo de todos los actores involucrados, ampliando la responsabilidad de denuncia a toda la sociedad civil, no solo a los servidores públicos, como lo estipulan los Códigos mencionados anteriormente. No obstante, es menester que la normativa integre los lineamientos para la protección adecuada de los denunciantes, específicamente de hechos de corrupción, teniendo en cuenta el balance general de las represalias laborales y personales de las cuales son víctimas los/as ciudadanos que se atreven a denunciar.

Con el fin de garantizar una protección adecuada para los denunciantes de hechos de corrupción, es indispensable incluir en la normativa el establecimiento de una protección jurídica específica, dada su condición de vulnerabilidad, al igual que la disposición de defender a los denunciantes de posibles represalias, contemplando a su vez la pertinencia de la aplicación de sanciones a aquellos que les ejecutan las acciones de retaliación y además, la incorporación de un acompañamiento y/o asistencia económica, social y psicológica durante el proceso en caso de que el denunciante lo requiera. (Transparencia Colombia, 2020, p. 35).

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL Y DERECHO COMPARADO:

La construcción de un marco normativo integral es esencial para garantizar la protección de aquellos ciudadanos que decidan denunciar actos de corrupción, con el fin de evitar la toma de represalias personales y/o laborales en su contra, tal como se indica en el art. 33 de la

<p>Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, correspondiente a la protección de los denunciantes, en el que se expresa que cada Estado "considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado" (ONU, 2004) a los denunciantes. Uno de los casos más recientes a nivel internacional es la aprobación de la Directiva Europea 1937/2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, enfocada en los informantes y/o denunciantes de casos de corrupción, en la que además de buscarse el amparo legal para las personas implicadas, se pretendía llegar a una normatividad en común entre los países miembros de la Unión Europea, teniendo en cuenta que "el alcance y la protección del estatuto del informante o <i>whistleblower</i> han sido desiguales en cada ordenamiento jurídico en función de las obligaciones, derechos y garantías previas con que contaban los trabajadores" (De Gómez & Santamaría, 2020, p. 82). Es por ello por lo que, aunque diez miembros de la asociación contaban con garantías para los denunciantes antes de ser admitida la Directiva, en el resto de los países la protección era parcial y dependía del sector laboral.</p> <p>La Directiva garantiza la protección de las personas que informen sobre infracciones relacionadas con la contratación pública, los productos y servicios financieros, la protección al medio ambiente, la salud pública, la protección de datos personales y de los consumidores, entre otros. Impone la implementación de canales de denuncia interna y seguimiento en primera instancia y, de ser necesario, designar autoridades competentes como canales de denuncia externa. Además, dispone de represalias y establece medidas de apoyo y protección frente a ellas, entre las que se encuentran asistencia financiera y apoyo psicológico en un proceso judicial (Dir. 1937/2019, 23 de octubre de 2019). Pese a aprobarse hace dos años, la ley no se ha implementado en más de 20 países miembros de la Unión Europea, que corren riesgo de sancionarse por incumplimiento.</p> <p>Por otro lado, EE. UU. cuenta con uno de los marcos jurídicos más convenientes y antiguos en relación con la protección de los denunciantes de hechos de corrupción, en el que se encuentra <i>The Whistleblower Protection Act of 1989</i>, enmendado en el 2012, con el fin de fortalecer la seguridad de los trabajadores federales que divulguen evidencia(s) de fraude, despilfarro o abuso, así como las recomendaciones para el trato y revelación de la información, con el fin de garantizar su inclusión en los lineamientos de protección del denunciante tras la divulgación de cualquier violación de la ley (<i>Whistleblower Protection Enhancement Act, 2012</i>).</p> <p>De igual forma, se halla la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall-Street y Protección al Consumidor, promulgada en el 2010, enfocada en los denunciantes del sector financiero, en la que se establece la posibilidad de recibir incentivos económicos por transmitir información a la Comisión de Bolsa y Valores, al igual que la revelación directa de los hechos, sin tener que llevar a cabo un proceso interno con anterioridad; a su vez, se determinó la tipificación penal de cualquier tipo de represalia (personal o laboral) al empleado que haya hecho la denuncia por parte su empleador, argumentando que los hechos infringían las leyes federales (Chalouat, Carrión-Crespo & Licata, 2019, p. 43).</p> <p>En ese mismo sentido, la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 complementa la protección de denunciantes en el sector financiero a la vez que endurece el control interno de las empresas. No obstante, es importante señalar que solo aplican para denunciantes las revelaciones hechas ante la Comisión de Bolsa y Valores y, a su vez, considerar algunas dificultades de la legislación ante la implementación de restricciones contractuales en las empresas para evitar que los trabajadores deseen denunciar (ibid.), pese a que la Comisión prohibió estas disposiciones.</p>	<p>En el caso de Canadá, rige <i>The Public Servants Disclosure Protection Act</i> implementado en el 2007, el cual abarca a aproximadamente 400.000 servidores públicos, considerando que algunas entidades estatales cuentan con sus propios mecanismos para lidiar con casos de corrupción (Office of the Public Sector, 2021), la ley les permite a los trabajadores revelar información que, a su criterio, demuestra que hubo, puede llevarse a cabo algún delito o se instó a que ello/as hicieran parte de este y les garantiza protección en contra de represalias que puedan tomarse en su contra tras denunciar.</p> <p>Esta ley también ampara a determinada población que no pertenece propiamente al sector público, como algunos contratistas externos y, aunque en primera instancia los trabajadores deben acudir a los procesos internos de la entidad para hacer el reporte correspondiente, es posible acudir directamente a la Comisión de Integridad del Sector Público. Durante el proceso, se garantiza el anonimato del denunciante y en caso de ser objeto de represalias, es necesario informar en la Comisión de Integridad en un plazo de 60 días, en los que, de ser confirmadas las contramedidas por parte del empleador, se procederá con una compensación al denunciante y/o la sanción disciplinaria correspondiente según la retaliación (Government of Canadá, 2008).</p> <p>Se hace importante resaltar, que Colombia como miembro de la Organización de los Estados Americanos OEA, ha ratificado sus diferentes Convenciones como estado miembro, dentro de estas, encontramos la Convención Interamericana contra la Corrupción, la cual fue aprobada mediante la Ley 970 de 2005 <i>Por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003</i>, el cual ilustra sobre la protección a los funcionarios públicos como también a los particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, siendo su artículo III de las Medidas Preventivas donde los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: numeral 8: "...<i>Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno...</i>".</p> <p>Experiencias en América Latina:</p> <p>Chile: Cuenta con un sistema para la protección de denunciantes en el ámbito penal y otro para el ámbito administrativo. El sistema penal considera un mecanismo de protección de denunciantes de carácter general aplicable para cualquier persona que invoque o que se encuentre inmerso en algún proceso de investigación o juzgamiento de tipo penal por cualquier tipo de delito, y con una legislación especial para la protección de denunciantes de corrupción vinculada principalmente al área administrativa. Este sistema está regulado en diversas normas, la Constitución de la República dispone que corresponde al Ministerio Público la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos, evidentemente en el marco de un proceso penal, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público "corresponderá al Fiscal Nacional dictar las instrucciones generales que estime necesarias para el adecuado cumplimiento de las tareas de protección de las víctimas y testigos".</p> <p>El Ministerio Público chileno ha creado una unidad administrativa especial, la División de Atención a las Víctimas y Testigos en la Fiscalía Nacional y Unidades Regionales de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT), otra norma de suma importancia es el Código Procesal Penal que reitera el deber que asiste al Ministerio Público de proteger a las víctimas en todas las etapas del procedimiento penal, disponiendo además que los Tribunales tienen la obligación de garantizar la vigencia de los derechos de las víctimas durante el procedimiento, dispone</p>
<p>la obligación de los fiscales de adoptar en cualquier etapa de los procedimientos penales medidas de protección para las víctimas de los delitos a fin de facilitar su intervención en los procedimientos.</p> <p>En cuanto a las medidas de protección, las normas chilenas han establecido un amplio abanico de posibilidades que son posibles de ser agrupadas en medidas autónomas que no requieren de autorización judicial y medidas que sí requieren de autorización judicial: • Medidas autónomas de protección: • Medidas de protección policial como la vigilancia, entre otras ad hoc. • Mecanismos o instrumentos de llamados de emergencia implementadas por el Ministerio Público en el domicilio del protegido. • Cambio de domicilio temporal o definitivo. • Cambio de número telefónico. • Aseguramiento y defensas a la estructura del domicilio del sujeto. • Entrega de teléfonos celulares. B) Medidas de protección que requieren autorización judicial: • Medidas cautelares personales como la prisión preventiva del imputado. • Prohibición de frecuentar lugares o personas. • Cambio de identidad. • Diversas medidas de protección en el juicio oral, tales como la reserva de la identidad, impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la sala donde se efectúe la audiencia, privacidad y reserva de la audiencia, entre otros. En el ámbito administrativo el marco normativo chileno ha adoptado una legislación sobre protección de denunciantes de corrupción que está vigente desde el año 2007, la Ley N.º 20.205 aprobada como la "Ley que protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad". Si bien tiene una nomenclatura específica relacionada con los actos de corrupción en realidad es una modificatoria al Estatuto Administrativo (Ley N.º 18.834), al Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales (Ley N.º 18.883) y a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley N.º 18.575) que de forma general señala el deber de los funcionarios públicos de denunciar hechos de corrupción de los que tuvieran conocimiento.</p> <p>Según esta legislación, las conductas susceptibles de denuncia son hechos irregulares y faltas al principio de probidad en general. Este principio consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.</p> <p>A su vez, de acuerdo con la Ley 18.575: "El interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley". Es de advertir que el sistema de protección de denunciantes chileno otorga medidas de protección a los posibles denunciantes de corrupción por el sólo hecho de serlo. Estos derechos son: • No ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión o destitución. • No ser objeto de traslado de localidad o de función. • No ser objeto de calificación por parte del superior jerárquico. Una limitación a considerar es que estos derechos son aplicables a partir del momento de la denuncia y son extensibles hasta 90 días después de realizada la investigación y sanción de la denuncia. Un segundo grupo de medidas de protección están referidas a la provisión de garantías durante el desarrollo del proceso de investigación administrativo en el que es posible solicitar la reserva de la identidad, así como de los documentos e información que el denunciante pudiera prestar. Un aporte importante de la experiencia chilena es la regulación de la denuncia fraudulenta o infundada que está sujeta a sanción y que, de ser el caso, puede llegar a ser la destitución del denunciante con relación a su ámbito de aplicación debe mencionarse que está restringido al sector público. También existen servidores públicos exentos o no regidos por el Estatuto Administrativo, como las empresas estatales, instituciones de Defensa Nacional, Contraloría</p>	<p>General de la República y del Banco Central, personas contratadas bajo régimen de honorarios (contratos civiles), ex funcionarios, empleados de confianza, Carabineros de Chile, entre otros, tampoco están cubiertos bajo la protección de denunciantes de la ley chilena. Esta característica ha sido reiteradamente ratificada por la Contraloría General de la República a través de diversa jurisprudencia administrativa rechazando cualquier posibilidad de que se apliquen las protecciones en el caso de que no concurren servidores del Estado.</p> <p>En relación con resultados concretos, debe mencionarse que, en el ámbito penal durante el primer trimestre del 2013, de acuerdo con la información estadística proporcionada por la Fiscalía de la Nación, han ingresado a su programa de protección de víctimas y testigos un total de 354 personas relacionadas con delitos contra los funcionarios públicos. Finalmente, debe mencionarse que, en el Informe de Chile sobre el examen de la implementación de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, los expertos de El Salvador y de Ucrania participantes han considerado que en el ámbito penal "El marco legal de Chile parece estar conforme con la disposición bajo examen". Asimismo, respecto al ámbito administrativo, se señala que es una limitación el ámbito de aplicación de la norma limitado a los funcionarios públicos. A este respecto: "Se recomienda a Chile considerar la posibilidad de otorgar un sistema de protección similar al establecido por la ley 20.205, respecto a sujetos que no sean funcionarios públicos en la medida que estos denuncien antes las autoridades competentes hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la Convención".</p> <p>México: Es un país que cuenta con un sistema de protección judicial general y uno para la protección de denunciantes de corrupción en el ámbito administrativo. En el ámbito penal el reconocimiento legal se encuentra en el Código Federal de Procedimientos Penales y alcanza a las víctimas del delito, asignando al Ministerio Público la competencia de dictar todas las medidas y providencias necesarias para proporcionarles seguridad y auxilio. A partir del año 2012, México cuenta con una especial que es la Ley Federal para la Protección de Personas que intervienen en el Procedimiento Penal especial que complementa la Ley contra la delincuencia organizada y establece programas de protección para aquellas personas que se puedan encontrar en situaciones de riesgo a causa de su participación en un proceso de naturaleza penal siendo aplicable a víctimas, ofendidos, testigos, colaboradores, peritos, policías, Ministerios públicos, jueces y miembros del Poder Judicial.</p> <p>Entre las medidas de seguridad para los testigos se considera su salvaguarda física, psicológica, patrimonial y familiar, custodia policial, reubicación de domicilio y, previo acuerdo del procurador, se podrá autorizar el cambio de identidad de la persona protegida. En el ámbito administrativo la República de México, en el mes de abril del año 2011, ha adoptado una legislación especial sobre el tema a través de la modificatoria de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En general, esta modificatoria normativa buscaba fortalecer el marco jurídico que regula las responsabilidades de los servidores públicos planteando crear condiciones para incentivar y favorecer las denuncias de los servidores públicos y particulares que conozcan de prácticas ilegales y contravengan los principios que rigen el ejercicio de la función pública. La norma establece disposiciones orientadas a proteger a denunciantes y personas que aporten información sobre el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, disponiéndose que la Secretaría de la Función Pública establezca normas y procedimientos para que las denuncias se atiendan con oportunidad y eficiencia. Para ello establece la obligación de abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona a los posibles quejosos o denunciantes, y a quien pueda informar en los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos otorgada a los contralores internos y titulares de las áreas de auditoría, de quejas y responsabilidades, para requerir cuando lo consideren necesario información o datos relacionados con la información proporcionada por los denunciantes y personas que hayan aportado información relacionada con presuntos actos</p>

de corrupción. También considera como innovaciones la posibilidad de presentar denuncias en forma anónima, siempre y cuando contengan datos o indicios que permitan dilucidar o identificar a posibles infractores o responsables de actos de corrupción en el servicio público. Cabe resaltar que esta norma no establece medidas de protección específicas, sino que establece un conjunto de beneficios y supuestos que incentivan las posibles denuncias de actos de corrupción. No obstante, la Ley Federal de Justicia Administrativa de la Función Pública prevé que se puedan otorgar medidas que garanticen la conservación de las condiciones laborales de los quejosos o denunciantes, como la inamovilidad del puesto, entre otras.

Quienes se acojan a esta modalidad de protección no recibirán prestación o recompensa económica. Hasta mayo de este año eran reservados y una reciente resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información dispuso que la Procuraduría General de la República entregue información sobre los programas de protección de testigos determinándose que, desde 2006 a 2012, se usaron 178.261.493 pesos, para cubrir gastos relacionados con la protección de testigos colaboradores. Asimismo, en el mismo periodo de tiempo hubo un total de 557 testigos colaboradores y/o testigos. Sobre una valoración general del sistema mexicano de protección de denunciantes es importante conocer que en el año 2011, en el marco de las evaluaciones periódicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la implementación de la Convención Anti-Cohecho, Eslovenia y España recomendaron a México establecer un marco normativo específico para la protección de denunciantes de corrupción, cuestionando el marco actual y la posición oficial del país que consideró que el actual sistema era suficiente: "Los examinadores consideramos que México no provee de adecuada protección a los denunciantes (...) recomendamos a México que apruebe una ley para proteger denunciantes en el sector público y el sector privado".

Perú: En el caso peruano hay una legislación general para varios delitos penales y una legislación especial para proteger a denunciantes administrativos. Desde 2010, con la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, rige una nueva normatividad para proteger a denunciantes en el ámbito penal que se complementa con las leyes de colaboración efectiva del país. De acuerdo con estas normas, la responsabilidad de la implementación de las medidas de protección recae en el Ministerio Público a través del "Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos" cuyo propósito es apoyar a la labor fiscal brindando a la víctima y al testigo asistencia legal, psicológica y social, a fin de cautelar su testimonio y participación en el proceso ante posibles riesgos o represalias generados por su participación en un proceso penal. Según el Código Procesal Penal, las medidas de protección se aplican a testigos, peritos, colaboradores y son extensibles a su cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes y hermanos. En cuanto a las medidas de protección, la legislación peruana ha considerado dos grupos distintos. Un primer grupo de medidas generales, como por ejemplo la protección policial, cambio de residencia, ocultación de paradero, reserva de identidad, uso de medios tecnológicos y mecánicos para evitar la identificación del protegido, fijación de sede judicial para notificaciones a la Fiscalía. El segundo grupo se refiere a medidas adicionales, como evitar que se tomen imágenes de los protegidos, traslado en vehículos con custodia, uso de ambientes reservados para sus declaraciones, emisión de nuevos documentos con nueva identidad, apoyo económico en caso de cambio domiciliar o de trabajo, entre otros. En el ámbito administrativo, desde el año 2010 Perú cuenta con una ley especial que regula la protección de denunciantes. La Ley 29542 Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal, actualmente bajo implementación de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. En cuanto a su ámbito de aplicación esta ley puede aplicarse a cualquier entidad pública independientemente del nivel de gobierno o de su naturaleza bastando demostrar que se encuentra regida bajo las normas del Derecho público. En cuanto a los beneficiarios alcanza a funcionarios y servidores públicos sin importar su modalidad o régimen de

contratación, exfuncionarios y exservidores públicos y cualquier ciudadano que hubiera conocido los hechos de corrupción. Como excepciones se encuentran hechos que afecten directamente a la defensa nacional, el orden interno y las actividades de inteligencia con excepción de las denuncias referidas a los procesos de adquisición o mantenimiento de equipos, bienes o servicios, hechos que afecten la política exterior del país, hechos que se hayan conocido o sustentados en violación de derechos humanos como por ejemplo la intimidad o el secreto profesional o personas que ya estén protegidas o beneficiadas con otras leyes especiales. Un aspecto esencial de este sistema es que concentra en la Contraloría General de la República las denuncias, calificación y otorgamiento de medidas de protección. Esto es importante porque esta entidad es autónoma de las entidades ejecutivas, lo que evita posibles conflictos de interés al dar las medidas de protección y da un mayor margen de imparcialidad a las autoridades de control. En cuanto a las medidas de protección, al ser un sistema concentrado administrativo, se refieren principalmente a medidas de protección laboral que buscan proteger a los denunciantes de hostilidades relacionadas con su denuncia. Así, se protegerá a todos los denunciantes para evitar hostilidades en su centro de trabajo, no pudiendo ser cesado, despedido o removido de su cargo por la denuncia calificada y admitida independientemente de su modalidad contractual. En el caso de la modalidad de contratación civil o Contratación Administrativa de Servicios (CAS), el contrato o su renovación, de haberse producido esta, no se suspende por causa de la denuncia realizada. De producirse hostilidades, el denunciante tiene la posibilidad de recurrir a la Contraloría General para que esta solicite al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realizar una inspección laboral correspondiente. Si dicho ministerio constata el acto de hostilización, la conducta del funcionario que lo realizó es considerada una falta grave, siendo esta una causal de despido justificado, conforme a la ley.

Finalmente, si en el transcurso de la investigación se llegase a determinar que existen delitos, la Contraloría General de la República remitirá la denuncia y lo investigado al Ministerio Público para realizar las acciones del caso. Otra norma importante sobre el particular es el Código de Ética de la Función Pública que claramente señala que cada institución debe crear mecanismos internos al interior de cada entidad para proteger a los posibles denunciantes de actos de corrupción. En cuanto a resultados efectivos, en el ámbito penal, sobre el total de usuarios derivados a las Unidades Distritales de Asistencia a Víctimas y Testigos de las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción, ubicados en los distritos judiciales de Lima, Lima Sur, Lima Norte y Callao, en el 2011 se han registrado 6 casos de protección a testigos en el ámbito de los delitos de corrupción. Uno en el ámbito de una investigación por peculado y los otros 5 en el ámbito de investigaciones por corrupción de funcionarios; mientras que en el año 2012 se han registrado 15 casos de protección a testigos, todos relacionados con delitos de corrupción de funcionarios públicos. Con relación a las medidas de protección, sobre el total de usuarios derivados a las Unidades Distritales de Asistencia a Víctimas y Testigos de las Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción, ubicados en los distritos judiciales de Lima, Lima Sur, Lima Norte y Callao, en el 2011 se han otorgado 13 medidas de protección por los fiscales de los que 7 medidas fueron de protección policial, 3 medidas de reserva de identidad, 3 medidas de fijación como domicilio la sede de la Fiscalía competente; mientras que en el año 2012 se han otorgado 24 medidas de protección por casos de corrupción de las que 13 corresponden a protección policial, 3 a reserva de identidad, 6 a reserva del domicilio y 2 a reubicación laboral.

En el ámbito administrativo no se cuenta con información que permita evaluar la utilidad de la protección de denunciantes implementada por la Contraloría General de la República²².

²² Sistema de denuncias y de protección de denunciantes de corrupción en América Latina y Europa, Franz Chevarría Martha Silvestre, Documento de Trabajo N.º 2 Serie: Análisis Área: Institucionalidad Democrática, Madrid, noviembre 2013

A propósito, es pertinente traer a colación el informe de la Organización de Estados Americanos -OEA- sobre buenas prácticas en el que diferentes países de la Región como Paraguay y Bolivia compartieron sus experiencias en la implementación de un sistema específico de seguimiento de denuncias y protección a denunciantes por presuntos actos o hechos de corrupción, así:

Paraguay: Implementó un Portal de Denuncias Anticorrupción y Sistema Informático de Registro y Seguimiento de Causas Penales. Sumarios Administrativos e Investigaciones Preliminares sobre supuestos hechos de corrupción en las Instituciones Públicas (SSPS), con el fin de ofrecer a la ciudadanía una herramienta adecuada para la formulación de denuncias de hechos de corrupción. Adicionalmente, creó el "Portal de Denuncias Anticorrupción", alojado en el sitio web www.denuncias.gov.py, y es gestionada a través del SSPS. El Portal de Denuncias Anticorrupción es una herramienta a través del cual los ciudadanos pueden denunciar, bajo un sistema de protección de datos del denunciante, supuestos hechos de corrupción que afectan a Instituciones Públicas, cometidos por funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo, e instituciones adheridas al portal por convenio con la SENAC. Mientras que el SSPS, es una herramienta de gestión de las denuncias registradas en el Portal de Denuncias Anticorrupción, de único acceso para los funcionarios responsables de tramitar las denuncias y se constituye en un canal fundamental entre estos funcionarios y la SENAC. Es importante destacar que el Portal de Denuncias Anticorrupción le ofrece al ciudadano la posibilidad de realizar un seguimiento a la denuncia efectuada, cumpliendo de esta manera con la transparencia en la gestión por parte de la SENAC y el control ciudadano sobre la misma, es por ello, que el Portal de Denuncias Anticorrupción es considerada una herramienta de buena práctica desarrollada en el Paraguay (OEA MESICIC, 2022).

Bolivia: Este país, en su informe dejó claro que la correcta implementación de los programas de protección a denunciantes de hechos de corrupción, sean servidores públicos o ciudadanos particulares, ha permitido lograr resultados importantes con relación a la política de persecución penal desarrollada por el Ministerio Público, debido a que la forma ordenada y ágil de definición de los procedimientos y la claridad en los roles de los diferentes actores, es determinante para reducir los tiempos de adopción, aspecto que permite en forma casi inmediata iniciar con la recolección de la información del denunciante y paralelamente garantizar su seguridad y de su entorno familiar cercano. Uno de los obstáculos más frecuentes tiene que ver con la cooperación requerida a otras instituciones, las cuales no siempre actúan de forma diligente en el cumplimiento de la medida de protección resuelta por la DPVTMMP, que a su vez constituye un desafío que es importante lograr a efectos de que las medidas de protección sean integralmente adoptadas y efectivas para sus beneficiarios (OEA MESICIC, 2022).

H. CONCLUSIONES:

En recapitulación, es fundamental que Colombia adopte una reglamentación y un Sistema Integral de Protección a Denunciantes/Reportantes por acto o hecho de corrupción, ya que se encuentra en deuda de acuerdo con lo establecido por los tratados y estándares internacionales ratificados. Asimismo, la Política de Lucha contra la Corrupción debe ejecutarse de forma transversal y mancomunada, de cara al compromiso y deber de todos los sectores, en especial del ciudadano común, para participar como garante y veedor del cumplimiento del ordenamiento jurídico. Es sabido que es ineficaz una política que se centra únicamente en sancionar conductas ya consumadas, es primordial hacer un énfasis en la prevención y atacar los actos o hechos de corrupción desde sus inicios, por cuanto usualmente son de carácter sistemático y de tracto sucesivo.

La corrupción es una violación también a los derechos humanos y a los derechos económicos, ya que impide el desarrollo sostenible de las regiones. El proyecto de ley planteado busca de

alguna forma generar un impacto en la ciudadanía transmitiendo un mensaje de que es importante denunciar y se crean unos incentivos, no económicos, sino de carácter institucional que garantizan la seguridad física e integridad personal, así como los derechos laborales, al trabajo, libre desarrollo de la personalidad, entre otros, en caso de que existan represalias.

En el ejercicio de reconstruir una cultura de la integridad en una sociedad que hoy por hoy se encuentra resignada ante los recalcitrantes casos de corrupción que salen a la luz, pero de las investigaciones no se están dando los resultados esperados para evitar la impunidad, el Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción-SUPRAC, tiene el objetivo de generar un respaldo para que la ciudadanía se anime a denunciar y sienta que el Estado brinda un acompañamiento y retroalimentación celeré y efectiva del proceso, actividad que muchas veces no puede llevarse a cabo de forma idónea por las autoridades competentes tradicionales, tal como demuestran las cifras, debido al alto índice de trabajo, y la escases de los recursos financieros, humanos, entre otros. Adicionalmente, bajo criterios objetivos y subjetivos se delimitará la procedencia de medidas de protección transitoria, en aras del deber que tiene el Estado Social de Derecho de garantizar el efectivo goce de los derechos fundamentales y de generar acciones necesarias para evitar un perjuicio irremediable ante la inminencia de una situación de riesgo o amenaza.

Implementar las recomendaciones que se desprenden de esos instrumentos implica dejar de lado la actitud fatalista y comprender que el derecho ofrece herramientas útiles para controlar esas expresiones de la criminalidad. Sin embargo, con el fin de tener éxito en ese empeño, el país debe adoptar medidas como la protección de los denunciantes de actos de corrupción. Esa medida es un pilar esencial de las políticas anticorrupción implementadas en países que han logrado reducir ese fenómeno (Saclemente, 2020).

III. IMPACTO FISCAL

La Ley 819 de 2003 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones", establece, en su artículo 7 que "el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo". De conformidad con lo previsto en dicha disposición, en lo que sigue esta sección presentará el posible impacto fiscal y la fuente de financiación de la iniciativa.

Además, es importante tener en cuenta que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha precisado que el impacto fiscal no puede ser, en ningún caso, un obstáculo insuperable para el desarrollo de las iniciativas legislativas. En la sentencia C-490 de 2011, la Corte manifestó que;

"El mandato de adecuación entre la justificación de los proyectos de ley y la planeación de la política económica, empero, no puede comprenderse como un requisito de trámite para la aprobación de las iniciativas legislativas, cuyo cumplimiento recaiga exclusivamente en el Congreso. Ello en tanto (i) el Congreso carece de las instancias de evaluación técnica para determinar el impacto fiscal de cada proyecto, la determinación de las fuentes adicionales de financiación y la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo; y (ii) aceptar una interpretación de esta naturaleza constituiría una carga irrazonable para el Legislador y otorgaría un poder correlativo

de veto al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, respecto de la competencia del Congreso para hacer las leyes. Un poder de este carácter, que involucra una barrera en la función constitucional de producción normativa, se muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos y el principio democrático. La exigencia de la norma orgánica, a su vez, presupone que la previsión en cuestión debe contener un mandato imperativo de gasto público”.

Además, se debe tener en cuenta como sustento, el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la Sentencia C-502 de 2007, en la cual se puntualizó que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en óbice y barrera, para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa:

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo.

Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento.

Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda.”

Con relación a los posibles costos, es preciso mencionar lo siguiente:

MEDIDAS PROVISIONALES DE EMERGENCIA

Con relación a los delitos asociados a corrupción administrativa, de acuerdo con la información consignada en el Sistema Penal Oral Acusatorio -SPOA- de la Fiscalía General de la Nación, entre el año 2010 a 2023, se ha reportado un total de **19.537 víctimas** de las tipologías asociadas a la corrupción administrativa, discriminado de la siguiente manera:

Año	Suma de TOTAL VICTIMAS
2010	417
2011	778
2012	783
2013	1188
2014	1001
2015	1092
2016	1298
2017	1439
2018	1517
2019	1325
2020	1861
2021	2064
2022	3184
2023	1590
Total general	19537

Por su parte, entre los 2008 y 2013 el 2.5% de las solicitudes de protección por hechos de corrupción fueron otorgadas²³.

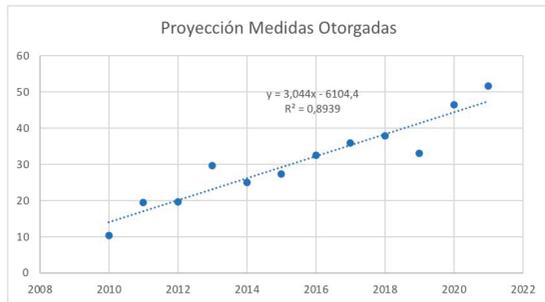
Por lo anterior y en aras de generar una estimación del costo potencial de las medidas

Provisionales de Emergencia consagradas en el artículo nueve (9) del presente proyecto de ley, se ha calculado el número probable de las medidas provisionales de emergencia a otorgar anualmente, teniendo como variables:

- El número de víctimas relacionadas a delitos de corrupción administrativa proyectadas para el año 2023 (1590 víctimas)
- El porcentaje de medidas de protección efectivamente otorgadas (2.5%)

Año	Suma de TOTAL VICTIMAS	PROYECCION VICTIMAS 2.5%
2010	417	10
2011	778	19
2012	783	20
2013	1188	30
2014	1001	25
2015	1092	27
2016	1298	32
2017	1439	36
2018	1517	38
2019	1325	33
2020	1861	47
2021	2064	52
2022	3184	80
2023	1590	53
Total general	19537	488

²³ Transparencia por Colombia. La Denuncia de la corrupción y la protección al denunciante en Colombia.



Fuente: Secretaría de Transparencia

El cruce de la mencionada información permitió estimar en 53 el número máximo probable de medidas de protección que se otorgarían en el año 2023, lo cual permite proyectar el posible impacto fiscal de las medidas de protección de carácter provisional de emergencia consagradas en el artículo 9 del Proyecto de Ley de Protección a denunciantes por actos o hechos de corrupción, de la siguiente manera:

Medidas de protección provisionales de emergencia por un valor de 1 SMLMV	Medidas de protección provisionales de emergencia por un valor de 3 SMLMV
\$68.932.118	\$206.796.354

Lo anterior, representa dos bandas del presupuesto estimado, para el primer caso de un salario mínimo legal mensual vigente y para el segundo de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

IMPACTO FISCAL DE GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUPRAC.

Las necesidades derivadas de la creación de la Secretaría Técnica del SUPRAC, serán atendidas por cinco (5) profesionales, los cuales serán vinculados bien sea por una modificación de la estructura de la planta de la Secretaría de Transparencia – Un (1) Profesional Especializado Grado 12 y Cuatro (4) Profesionales Grado 1; o por otro lado, a través de las modalidades y tipologías de las normas que rigen la contratación pública en Colombia, dependiendo de las necesidades establecidas. Es fundamental señalar que, la incorporación del artículo 10 implica un reajuste institucional en el DAPRE que no afecta la previsión de gastos adicionales que supondría el nuevo personal de la Secretaría de Transparencia, sino de la organización de dependencias y cargos al interior de esta unidad.

Debido a lo anterior, generará un impacto fiscal mínimo clasificable en un costo marginal cuya proyección presupuestal ascienden a la suma aproximada \$357.400.696, discriminados de la siguiente manera:

CARGO	NUMERO	COSTO PROFESIONAL MENSUAL
Profesional Especializado Grado 12	1	\$ 6.046.910
Profesional Grado 1	4	\$ 13.528.148
Total anual*		\$ 234.900.696

* Sin carga prestacional
Fuente: Escala salarial DAPRE

Los costos de planta se estiman de conformidad con lo señalado en el Decreto 904 de 2023, en el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. A continuación, se presentan los costos relacionados por cada funcionario.

De la misma manera, se desagregan para una mejor comprensión los costos de gastos generales proporcionales para la puesta en marcha de estos 5 profesionales que corresponderían a \$122.500.000, así:

Total gastos generales	
Adquisición de bienes y servicios-computadores y puestos de trabajo	\$ 75.000.000
Adquisición bienes y servicios- otros	\$ 47.500.000
TOTAL	\$ 122.500.000

Fuente: DGPNN – MHCP

Adicionalmente, independiente de las necesidades que surjan en el desarrollo de la implementación del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción – SUPRAC, la entidad determinará la viabilidad de recurrir a las modalidades de selección y las tipologías contractuales establecidas en el Estatuto General de la Contratación Pública, para la satisfacción de estas necesidades, lo que previamente justificará de acuerdo con el ordenamiento jurídico y en miras a la satisfacción del servicio público y el interés general.

Mediante este se tiene la intención de que, a través de un equipo especializado y exclusivo para el desarrollo de sus funciones, previo al traslado a la autoridad competente, estudien y analicen.

IV. CONFLICTO DE INTERESES

El artículo 286 de la Ley 5 de 1992 define el conflicto de interés como una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley, acto legislativo o artículo, pueda resultar en un

beneficio particular, actual y directo a favor del congresista. En tal sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que tal conflicto de interés se configura cuando se observa: "a) la existencia de un interés particular —de cualquier orden, incluso moral— del congresista en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo del Congreso; b) que efectivamente participe en la deliberación o decisión de ese tema en específico; c) que ese interés sea directo, no eventual o hipotético; d) que además el interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino particular"²⁴.

En línea con lo anterior, el literal c) del artículo 1º de la Ley 2003 de 2019 establece que no hay conflicto de interés: "Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente".

Asimismo, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, para que exista un conflicto de interés debe existir un beneficio particular, actual y directo del congresista, por lo que, para que el beneficio genere un conflicto de interés debe este ser individual y concreto, ya que, si se acepta que también incluya las iniciativas de alcance general, los congresistas deberían declararse impedidos en todo momento²⁵.

De esta manera, si se analiza esta situación a la luz de este Proyecto de Ley, esta iniciativa no generaría ningún tipo de conflicto de interés, toda vez que no se presentaría un beneficio particular respecto a su trámite, en tanto la finalidad de este proyecto de ley es generar medidas para la protección de los denunciantes anticorrupción. Estas medidas, si bien pueden generar beneficios particulares para las personas que denuncien actos de corrupción en el futuro, es importante aclarar que esta es una de las causales que la ley 2003 de 2019 contempla y excluye de un conflicto de interés, de la siguiente forma: "Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores".

Lo anterior, sin perjuicio del deber de los congresistas de examinar, en cada caso en concreto, la existencia de posibles hechos generadores de conflictos de interés, en cuyo evento deberán declararlos de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 286 ibidem: "Todos los congresistas deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones".

²⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de diciembre de 2021, CP, Roberto Augusto Serrato Valdés. Exp. 73001-23-33-000-2021-00220-01(P1).

²⁵ Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 8 de septiembre de 2021, C.P. Guillermo Sánchez Luque. Exp. 11001-03-15-000-2020-04535-00(P1).

V. PLIEGO DE MODIFICACIONES.

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
TÍTULO: "Por la cual se adoptan medidas de protección para personas naturales frente al reporte o denuncia de presuntos actos y/o hechos de corrupción - Ley Jorge Pizano"	Sin modificaciones.	
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES	Sin modificaciones.	
ARTÍCULO 1º. Objeto. Establecer normas, procedimientos y mecanismos para garantizar la protección de los derechos fundamentales a la vida, integridad, seguridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, derechos a la protección de datos personales e intimidad, así como los derechos de los reportantes/denunciantes de hechos o actos que presuntamente constituyan o puedan constituir corrupción. Además, se crea el Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC), se fortalece la institucionalidad relacionada y se adoptan medidas para promover la denuncia de presuntos hechos o actos de corrupción.	ARTÍCULO 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer normas, procedimientos y mecanismos para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales a la vida, integridad, seguridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, derechos a la protección de datos personales e intimidad, así como los derechos de los reportantes/denunciantes de hechos o actos que presuntamente constituyan o puedan constituir corrupción. Además, se crea el Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC), se fortalece la institucionalidad relacionada y se adoptan medidas para promover la denuncia de presuntos hechos o actos de corrupción.	Se hace un ajuste para simplificar el artículo y mejorar su redacción. Se suprime la palabra "relacionada" pues es redundante e innecesaria.
ARTÍCULO 2º. Ámbito de Aplicación. Los mecanismos de protección establecidos en la presente ley, estarán dirigidos a las personas naturales, que comprende los particulares y servidores públicos, en situación de riesgo por haber presentado denuncia o reporte, dado información, o haber reportado por cualquier medio presuntos hechos y/o actos de corrupción.	ARTÍCULO 2º. Ámbito de Aplicación. Los mecanismos de protección establecidos contemplados en la presente ley, estarán dirigidos a personas naturales, que comprende los tanto particulares como servidores públicos, que se encuentran en situación de riesgo por haber presentado denuncia o reporte, dado información, o haber revelado repertado por cualquier medio presuntos hechos y/o actos de corrupción.	Se modifica la redacción del artículo para mejorar su claridad y precisión, sin alterar su contenido sustancial. Asimismo, se reemplaza la expresión "reportado" por "revelado" con el propósito de mantener coherencia terminológica y evitar posibles ambigüedades en la interpretación de los distintos supuestos
Parágrafo 1º. Las medidas de protección del reportante/denunciante también se aplicarán, en su caso, a terceros que estén relacionados con el denunciante y	Parágrafo 1º. Las medidas de protección del reportante/denunciante también se aplicarán, en su caso, a terceros que estén relacionados con el denunciante y	

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
que puedan sufrir represalias como su cónyuge, compañero o compañera permanente o hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil; así como la persona natural que funja como facilitador.	se aplicarán, en su caso, a terceros que estén relacionados con el reportante/denunciante y que puedan sufrir represalias, tales como su cónyuge, compañero o compañera permanente, o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primer civil, así como a la persona natural que actúe como facilitador.	de comunicación de hechos de corrupción. Parágrafo 1 y 2: Se adecuó la redacción para garantizar mayor claridad y precisión jurídica. Asimismo, se corrigieron los conectores en la enumeración para asegurar coherencia en el listado. Se suprime el parágrafo 2, puesto que ya ha sido desarrollado con mayor especificidad en los artículos correspondientes. Finalmente, se actualizó el lenguaje sustituyendo "funja" por "actúe", con el fin de lograr una expresión más clara.
Parágrafo 2º. Para la aplicación de medidas de protección para los reportantes/denunciantes de hechos y/o actos de corrupción, la autoridad encargada tendrá en consideración los criterios de priorización en la asignación de medidas contempladas en la presente ley.	Parágrafo 2º. Para la aplicación de medidas de protección para los reportantes/denunciantes de hechos y/o actos de corrupción, la autoridad encargada tendrá en consideración los criterios de priorización en la asignación de medidas contempladas en la presente ley.	
ARTÍCULO 3º. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se entiende por: a. Actos o hechos de corrupción: Es el comportamiento consistente en la desviación de la gestión de lo público y de lo privado, con el propósito de obtener ventajas o beneficios para sí o para un tercero. Se considera un hecho o acto de corrupción las siguientes conductas punibles descritas en la Ley 599 de 2000 o cualquiera que la modifique, sustituya o adicione, entre los que se encuentran, pero no se limitan a: contrabando; fraude aduanero; favorecimiento por servidor público; favorecimiento por servidor público de contrabando de hidrocarburos o sus derivados; lavado de activos; testaferrato; enriquecimiento ilícito de	ARTÍCULO 3º. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se entiende por: a. Actos o hechos de corrupción: Es el comportamiento consistente en <u>son las conductas que implican</u> la desviación de la gestión de lo público y de lo privado, con el propósito de obtener ventajas o beneficios para sí o para un tercero. Se considera un hecho o acto de corrupción las siguientes conductas punibles descritas en la Ley 599 de 2000 o cualquiera que la modifique, sustituya o adicione, entre los que se encuentran, pero no se limitan a: contrabando; fraude aduanero; favorecimiento por servidor público; favorecimiento por servidor público de contrabando de hidrocarburos o sus derivados; lavado de activos; testaferrato; enriquecimiento ilícito de	Se ajusta la redacción para unificar las expresiones a lo largo del texto. Se modifica la redacción de la definición de actos o hechos de corrupción con el propósito de mejorar su coherencia interna, sustituyendo el verbo "consistente" por "implicar", a fin de lograr una expresión más precisa y adecuada al contexto jurídico. Se modifica la redacción del numeral o tercero del literal a) con

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
particulares; constreñimiento al sufragante; fraude en inscripción de cédulas; corrupción de sufragante; voto fraudulento; favorecimiento de voto fraudulento; alteración de resultados electorales; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula; peculado por uso; peculado por aplicación oficial diferente; fraude de subvenciones; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; tráfico de influencias de particular; enriquecimiento ilícito; enriquecimiento ilícito de servidor público; prevaricato por acción; prevaricato por omisión; soborno transnacional; corrupción privada; y, administración desleal.	particulares; financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas; violación de los topos o límites de gastos en las campañas electorales; constreñimiento al sufragante; fraude al sufragante; fraude en inscripción de cédulas; corrupción de sufragante; voto fraudulento; favorecimiento de voto fraudulento; alteración de resultados electorales; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula; peculado por apropiación; peculado por uso; peculado por aplicación oficial diferente; fraude de subvenciones; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; tráfico de influencias de particular; enriquecimiento ilícito; enriquecimiento ilícito de servidor público; prevaricato por acción; prevaricato por omisión; soborno transnacional; corrupción privada; y, administración desleal.	el fin de mejorar su claridad y coherencia. Se ajusta la redacción de reportante/denunciante con el fin de mejorar su precisión conceptual. Adicionalmente, se incorpora un numeral independiente para diferenciar de manera clara y sistemática las definiciones de reporte y denuncia. Así mismo, se adecúa el contenido del numeral C, relativo a la caracterización de estos mecanismos, la situación de riesgo, la solicitud de medidas de protección por parte de quienes informan presuntos actos de corrupción, y el apartado sobre personas protegidas. Estos ajustes buscan fortalecer la coherencia interna del texto, facilitar su interpretación normativa y garantizar una mejor comprensión de las obligaciones institucionales en materia de protección.
Así como lo previsto en la Ley 1474 de 2011, las conductas que den lugar a las faltas disciplinarias y decisiones de responsabilidad fiscal y abusos de poder vinculadas a actos y/o hechos de corrupción, además de las normas modificatorias o de cualquiera de las conductas contempladas por las convenciones o tratados sobre la lucha contra la corrupción, suscritos y ratificados por Colombia, asociadas a lo siguiente: (i) mal uso de poder para obtener provecho personal; (ii) perjuicio patrimonial; (iii) perjuicio social significativo, siendo aquellos que afectan el interés público o interés general; y (iv) corrupción electoral.	Así como lo previsto en la Ley 1474 de 2011, las conductas que den lugar a las faltas disciplinarias y decisiones de responsabilidad fiscal y abusos de poder vinculadas a actos y/o hechos de corrupción, además de las normas modificatorias o de cualquiera de las conductas contempladas por las convenciones o tratados sobre la lucha contra la corrupción, suscritos y ratificados por Colombia, asociadas a lo siguiente De conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y las normas que la modifican, así como en las convenciones y tratados internacionales contra la corrupción ratificados por Colombia, también se consideran actos y/o hechos de corrupción aquellas conductas que den lugar a faltas disciplinarias, decisiones de responsabilidad fiscal o	

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES	TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>b. Reportante/Denunciante: quien, mediante las formalidades legales dispuestas para tal fin, ponga en conocimiento de la autoridad receptora, utilice mecanismos internos o realice divulgación pública de hechos que se constituyan como presunta corrupción y quien o quienes suministren evidencia o datos concretos que permitan encauzar una investigación.</p> <p>c. Denuncia y reporte: la denuncia es una manifestación de noción mediante la cual una persona, ofendida o no con la infracción, pone en consideración del órgano de investigación un hecho presuntamente delictivo, con expresión detallada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que le consten, a la vez que representa la activación de un medio para acceder a la administración de justicia.</p> <p>El reporte es un mecanismo por el cual se alerta de un presunto caso de corrupción, sin requerirse el empleo de los canales formales de una denuncia ni con la intención directa e inicial de acceder a la administración de justicia.</p> <p>La información producto de las denuncia o reporte será confidencial. La autoridad receptora deberá mantener la</p>	<p>abusos de poder, asociadas a: (i) <u>el uso indebido de poder para obtener beneficios personales</u> provecho personal; (ii) <u>el detrimento del patrimonio público</u> patrimonial; (iii) <u>un perjuicio social significativo, siendo aquellos que afectan el interés público que afecta el interés general;</u> y (iv) <u>la corrupción electoral.</u></p> <p>b. Reportante/Denunciante: <u>Quien, mediante las formalidades legales dispuestas para tal fin, ponga en conocimiento de ya sea ante la autoridad receptora, utilice mediante mecanismos internos o realice a través de divulgación pública, informe sobre hechos que se constituyan como presunta corrupción puedan constituir presuntos actos de corrupción,</u> y quien o quienes suministren evidencia o datos concretos que permitan encauzar una investigación.</p> <p>c. Denuncia y reporte: <u>La denuncia es consiste en una manifestación, de noción mediante la cual una persona, ofendida o no con la infracción, mediante la cual se pone en consideración del órgano de investigación la autoridad receptora un hecho presuntamente delictivo, con expresión incluyendo una descripción detallada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que le consten, a la vez que representa la activación de un medio mecanismo para el acceder acceso a la administración de justicia.</u></p> <p>d. Reporte: <u>El reporte es un mecanismo por el cual se alerta de un presunto caso de corrupción, sin requerirse el empleo de los canales formales de una denuncia, ni en que exista, de manera directa e inicial, la intención directa e inicial de acceder a la administración de justicia.</u></p> <p>La información <u>derivada de una producto de las denuncia o reporte tendrá carácter</u> será confidencial y <u>La</u></p>		<p>información recibida con carácter de reserva hasta que se entregada a la autoridad competente.</p> <p>d. Autoridad receptora: se entenderá como autoridad receptora, la designada para recibir y gestionar las denuncias, solicitudes, reportes u otros tipos de comunicaciones formales dentro de un marco legal o administrativo específico de la presente ley, como lo serán: La Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Fiscalía General de la Nación y cualquier entidad con funciones de vigilancia, control y disciplinarias.</p> <p>Así mismo, se tendrán como entidades receptoras a las entidades públicas y privadas que reciben denuncias o reportes por medio de sus canales internos.</p> <p>e. Facilitador: persona natural que brinda apoyo y/o asistencia a reportantes/denunciantes de actos y/o hechos de corrupción. Lo anterior, incluye a los informantes.</p> <p>f. Reportante/denunciante anónimo: quien presente la denuncia reservándose su identidad. El reportante/denunciante anónimo debe suministrar evidencia o datos concretos que permitan encauzar una investigación.</p> <p>g. Denuncia con reserva de identidad o confidencialidad: acción mediante la cual el reportante/denunciante solicita mantener en absoluta reserva su identidad.</p> <p>h. Situación de Riesgo: Es el estado de amenaza, que conlleva la existencia de señales o manifestaciones que hagan vislumbrar la situación de riesgo de los derechos del reportante/denunciante.</p>	<p><u>autoridad receptora deberá mantenerse en reserva por la autoridad receptora hasta su entrega mantener la información recibida con carácter de reserva hasta que se entregada a la autoridad competente.</u></p> <p>d.e. Autoridad receptora: <u>Se entenderá como autoridad receptora, la designada para recibir y gestionar las denuncias, solicitudes, reportes u otros tipos de comunicaciones formales dentro de un marco legal o administrativo específico de la presente ley, como lo serán: La Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y cualquier entidad con funciones de disciplinarias, de vigilancia y control.</u></p> <p>Así mismo, se tendrán como <u>entidades receptoras a las entidades públicas y privadas que reciben denuncias o reportes por medio de sus canales internos.</u></p> <p>e.f. Facilitador: persona natural que brinda apoyo y/o asistencia a reportantes/denunciantes de actos y/o hechos de corrupción. Lo anterior, incluye a los informantes.</p> <p>f.g. Reportante/denunciante anónimo: <u>Quien presente la denuncia o reporte reservándose su identidad. El reportante/denunciante anónimo debe suministrar evidencia o datos concretos que permitan encauzar una investigación.</u></p> <p>g.h. Denuncia con reserva de identidad o confidencialidad: <u>Acción mediante la cual el reportante/denunciante solicita mantener en absoluta reserva su identidad.</u></p> <p>h.i. Situación de Riesgo: Es el estado de amenaza, que conlleva la existencia de señales o manifestaciones que hagan vislumbrar la situación de riesgo de los derechos del reportante/denunciante.</p>	
<p>Esta supone la existencia de signos objetivos que reflejan la inminencia de la puesta en peligro o la ocurrencia del daño.</p> <p>i. Medidas de Protección: conjunto de acciones dispuestas por las autoridades competentes orientadas a proteger el ejercicio de los derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad personal, así como el derecho al trabajo, y los mecanismos de protección laboral, económicos y libre desarrollo de la personalidad de los denunciados. Su aplicación dependerá de los criterios de priorización contemplados en la ley.</p> <p>Las Medidas de Protección deberán ser viables y proporcionales a los siguientes criterios: (i) la vulnerabilidad del denunciante sujeto a las medidas de protección; (ii) la situación de riesgo; (iii) la relevancia del caso; (iv) la trascendencia e idoneidad de la denuncia o testimonio; (v) la capacidad de la persona para adaptarse a las condiciones del Programa; y (vi) otras circunstancias que justifiquen la medida.</p> <p>j. Solicitud de Medidas de Protección por parte de los reportantes/denunciantes de presuntos actos de corrupción: Es aquella acción por la cual un reportante/denunciante recurre a la autoridad competente por cualquier medio y requiere el otorgamiento de Medidas de Protección por considerar en riesgo de vulneración su integridad física, vida o la de su núcleo familiar y Libre Desarrollo de la Personalidad, entre otros riesgos de vulneración.</p>	<p>Esta supone la existencia de signos objetivos que reflejan la inminencia de la puesta en peligro o la ocurrencia del daño. <u>Este estado implica la presencia de signos objetivos que evidencian la inminencia del peligro o la probabilidad de que se materialice un daño.</u></p> <p>ii. Medidas de Protección: <u>Conjunto de acciones dispuestas por las autoridades competentes orientadas a proteger el ejercicio de los derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad personal, así como el derecho al trabajo, y los mecanismos de protección laboral, económicos y libre desarrollo de la personalidad de los denunciados. Su aplicación dependerá de los criterios de priorización contemplados a partir de la presente en la ley.</u></p> <p>Las Medidas de Protección deberán ser viables y proporcionales a los siguientes criterios: (i) la vulnerabilidad del denunciante sujeto a las medidas de protección; (ii) la situación de riesgo; (iii) la relevancia del caso; (iv) la trascendencia e idoneidad de la denuncia o testimonio; (v) la capacidad de la persona para adaptarse a las condiciones del Programa; y (vi) otras circunstancias que justifiquen la medida.</p> <p>ii. Solicitud de Medidas de Protección por parte de los reportantes/denunciantes de presuntos actos de corrupción: <u>Es aquella acción por la cual un reportante/denunciante recurre a la autoridad competente por cualquier medio, y requiere el otorgamiento de Medidas de Protección, por considerar en riesgo de vulneración su integridad física, vida o la de su núcleo familiar y Libre Desarrollo de la Personalidad, entre otros riesgos de vulneración al considerar que su vida,</u></p>		<p>k. Conductas de retaliación: Toda conducta realizada por una persona natural o jurídica en contra de un reportante/denunciante de actos y/o hechos de corrupción que se derive del reporte, denuncia o delación presentada que derive en amenazas, situaciones de riesgo o daño al denunciante. La acción retaliatoria puede consistir en la imposición de cambios significativos de los deberes, responsabilidades o condiciones laborales; amenazas a su vida, integridad y/o seguridad personal o la de su familia; o en la ejecución de acciones que atenten contra el buen nombre y la honra del reportante/denunciante o que afecten sus derechos laborales, derecho al trabajo, económicos o libre desarrollo de la personalidad, tales como: (i) retraso o fraccionamiento del pago de honorarios; (ii) imposibilidad de ejecución contractual por causas imputables al contratante o sujeciones, auditorías e inspecciones injustas, así como su divulgación; (iii) terminación unilateral del contrato laboral; o terminación, modificación o interpretación unilaterales del contrato de prestación de servicio; (iv) degradación o disminución de categoría profesional o de cargo; (v) traslado a otra dependencia en contra de su voluntad; (vi) terminación del vínculo; (vii) disminución del salario, honorarios o pagos; (viii) retiro de beneficios, retiro de permisos o cancelación de oportunidades de autodesarrollo; (ix) acoso laboral; (x) extorsión; (xi) constringimiento ilegal; (xii) estigmatización; (xiii) descalificación; (xiv) injuria y calumnia; (xv) suspensión o asignación de funciones sin justificación; (xvi) discriminación en las evaluaciones de rendimiento; (xvii) inclusión en buró</p>	<p><u>integridad física, la de su núcleo familiar o su derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, se encuentran en riesgo de vulneración.</u></p> <p>ii. Conductas de retaliación: <u>Toda conducta realizada por una persona natural o jurídica en contra de un reportante/denunciante de actos y/o hechos de corrupción que se derive del reporte, denuncia o delación presentada que derive en amenazas, situaciones de riesgo o daño al reportante/denunciante. La acción retaliatoria puede consistir en la imposición de cambios significativos de los deberes, responsabilidades o condiciones laborales; amenazas a su vida, integridad y/o seguridad personal o la de su familia; o en la ejecución de acciones que atenten contra el buen nombre y la honra del reportante/denunciante o que afecten sus derechos laborales, derecho al trabajo, económicos o libre desarrollo de la personalidad, tales como: (i) retraso o fraccionamiento del pago de honorarios; (ii) imposibilidad de ejecución contractual por causas imputables al contratante o sujeciones, auditorías e inspecciones injustas, así como su divulgación; (iii) terminación unilateral del contrato laboral; o terminación, modificación o interpretación unilaterales del contrato de prestación de servicio; (iv) degradación o disminución de categoría profesional o de cargo; (v) traslado a otra dependencia en contra de su voluntad; (vi) terminación del vínculo; (vii) disminución del salario, honorarios o pagos; (viii) retiro de beneficios, retiro de permisos o cancelación de oportunidades de autodesarrollo; (ix) acoso laboral; (x) extorsión; (xi) constringimiento ilegal; (xii) estigmatización; (xiii) descalificación; (xiv) injuria y calumnia; (xv) suspensión o asignación de funciones sin justificación; (xvi) discriminación en las evaluaciones de rendimiento; (xvii) inclusión en buró</u></p>	

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>laboral o listas negras de trabajadores; y (xviii) cualquier trato injusto o injustificado.</p> <p>I. Persona protegida: es la cualidad del reportante/denunciante de un acto o hecho de corrupción que se le ha concedido medidas de protección, con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus Derechos Personales, y Libre Desarrollo de la Personalidad. En caso necesario, la persona protegida también será el tercero relacionado con el reportante/denunciante como cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil.</p>	<p>laboral o listas negras de trabajadores; y (xviii) cualquier trato injusto o injustificado.</p> <p>II. Persona protegida: es la cualidad del reportante/denunciante de un acto o hecho de corrupción que se le ha concedido medidas de protección, con la finalidad de garantizar <u>sus derechos fundamentales</u> el ejercicio de sus <u>Derechos Personales</u>, y Libre Desarrollo de la Personalidad. En caso necesario, la persona protegida también será el tercero relacionado con el reportante/denunciante como cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil.</p>	<p>Se ajusta la numeración referida.</p> <p>Se ajustó la estructura del párrafo del artículo para mejorar la fluidez del texto, agrupando las ideas según el sujeto, sin alterar el contenido esencial. Además, se redujo la extensión del párrafo para hacerlo más directo y de fácil comprensión.</p>
<p>ARTÍCULO 4°. Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciante de Actos de Corrupción (SUPRAC). Créase el Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciante de Actos de Corrupción (SUPRAC), como una instancia interinstitucional de carácter independiente, encargada de coordinar, adoptar decisiones y orientar las actividades relacionadas con la implementación y el seguimiento de las medidas de protección de reportantes/denunciante de presuntos actos de corrupción, y realizar recomendaciones para el fortalecimiento de los sistemas y canales de denuncia en el país. Para tal fin, el SUPRAC estará integrado por un Comité Rector y una Secretaría Técnica.</p> <p>Párrafo. El SUPRAC deberá crear una página web y disponer de canales físicos y digitales que cumpla con el principio de transparencia a cargo de la Secretaría Técnica del SUPRAC. En ese sentido, deberá cumplir con los requisitos de la Ley 1712 de 2014 sobre la información mínima obligatoria respecto a la</p>	<p>ARTÍCULO 4°. Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciante de Actos de Corrupción (SUPRAC). Créase el Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciante de Actos de Corrupción (SUPRAC), como una instancia interinstitucional de carácter independiente, encargada de coordinar, adoptar decisiones y orientar las actividades relacionadas con la implementación y el seguimiento de las medidas de protección de reportantes/denunciante de presuntos actos de corrupción, y realizar recomendaciones para el fortalecimiento de los sistemas y canales de denuncia en el país. Para tal fin, el SUPRAC estará integrado por un Comité Rector y una Secretaría Técnica.</p> <p>Párrafo. El SUPRAC deberá crear una página web y disponer de canales físicos y digitales que cumpla con el principio de transparencia a cargo de la Secretaría Técnica del SUPRAC. En ese sentido, deberá cumplir con los requisitos de la Ley 1712 de 2014 sobre la información mínima obligatoria respecto a la</p>	<p>Se ajustó la numeración referida.</p> <p>Se ajustó la estructura del artículo para mejorar la fluidez del texto, agrupando las ideas según el sujeto, sin alterar el contenido esencial. Además, se redujo la extensión del párrafo para hacerlo más directo y de fácil comprensión.</p>

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>estructura del sujeto obligado del artículo 9° y la información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado del artículo 11. Lo anterior, en el marco de la política de Estado Abierto, para una mayor transparencia y accesibilidad. Además de estos contenidos mínimos, el SUPRAC deberá publicar la información señalada en el artículo 33 de la presente ley, garantizando la anonimización, seguridad y ciberseguridad de los datos, en aras de proteger la intimidad y habeas data de los reportantes/denunciante.</p>	<p>estructura del sujeto obligado del artículo 9° y la información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado del artículo 11. Lo anterior, en el marco de la política de Estado Abierto, para una mayor transparencia y accesibilidad. Además de estos contenidos mínimos, el SUPRAC deberá publicar la información señalada en el artículo 33 de la presente ley, garantizando la anonimización, seguridad y ciberseguridad de los datos, en aras de proteger la intimidad y habeas data de los reportantes/denunciante.</p> <p>El SUPRAC, a través de su Secretaría Técnica, deberá implementar una página web y habilitar todos los canales físicos y digitales necesarios que garanticen el cumplimiento del principio de transparencia, conforme a la política de Estado Abierto. En este sentido, deberá observar lo previsto en la ley 1712 de 2014 en relación con la información mínima obligatoria, tanto sobre la estructura del sujeto obligado como sobre sus servicios, procedimientos y funcionamiento de acuerdo a los parámetros de anonimización, protección y ciberseguridad de los datos.</p>	<p>Se modificó el artículo para hacerlo más sintético, concentrando la redacción en la obligación sustantiva del SUPRAC de garantizar la confidencialidad de los solicitantes. Además, se fortaleció la claridad jurídica al incorporar expresamente la reserva de la información conforme al artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, con el fin de asegurar un</p>
<p>ARTÍCULO 5°. Protección de la confidencialidad de los reportantes/denunciante mediante el SUPRAC. El Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciante de Actos de Corrupción (SUPRAC) deberá garantizar, mediante su página web, el seguimiento a las solicitudes de protección que presenten los denunciante cobijados por el artículo 2° de la presente ley. Este Sistema de seguimiento a las solicitudes de protección deberá garantizar medidas de almacenamiento, seguridad y confidencialidad para los denunciante.</p>	<p>ARTÍCULO 5°. Protección de la confidencialidad de los reportantes/denunciante mediante el SUPRAC. El Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciante de Actos de Corrupción (SUPRAC) deberá garantizar, mediante su página web, el seguimiento a las solicitudes de protección que presenten los denunciante cobijados por el artículo 2° de la presente ley. Este Sistema de seguimiento a las solicitudes de protección deberá garantizar medidas de almacenamiento, seguridad y confidencialidad para los denunciante.</p>	<p>Se modificó el artículo para hacerlo más sintético, concentrando la redacción en la obligación sustantiva del SUPRAC de garantizar la confidencialidad de los solicitantes. Además, se fortaleció la claridad jurídica al incorporar expresamente la reserva de la información conforme al artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, con el fin de asegurar un</p>

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>La información respecto de los denunciante/reportante de actos y/o hechos de corrupción es reservada y clasificada.</p>	<p>La información respecto de los denunciante/reportante de actos y/o hechos de corrupción es reservada y clasificada.</p> <p>ARTÍCULO 5°. Protección de la confidencialidad de los reportantes o denunciante mediante el SUPRAC. El Sistema Unificado de Protección a Reportantes o Denunciante de Actos de Corrupción (SUPRAC) deberá garantizar medidas de almacenamiento, seguridad y confidencialidad de las solicitudes de protección de los reportantes/denunciante cobijados en el artículo 2 de la presente ley.</p> <p>Toda información relacionada con los reportantes/denunciante tendrá carácter reservado y clasificado, conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014.</p>	<p>estándar normativo de protección de datos personales en casos de denuncia por corrupción.</p>
<p>ARTÍCULO 6°. Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciante de Actos de Corrupción (SUPRAC). El Comité Rector estará conformado por un (1) delegado del nivel directivo de cada una de las siguientes entidades: Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, Fiscalía General de la Nación, Director Policía Nacional, Unidad Nacional de Protección, Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior.</p> <p>La Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación serán invitados permanentes con voz, pero sin voto.</p> <p>La Presidencia del Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciante de Actos de Corrupción (SUPRAC) será ejercida por</p>	<p>ARTÍCULO 6°. Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciante de Actos de Corrupción (SUPRAC). El Comité Rector estará conformado por un (1) delegado del nivel directivo de cada una de las siguientes entidades: Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, Fiscalía General de la Nación, Director Policía Nacional, Unidad Nacional de Protección, Ministerio del Trabajo, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Interior.</p> <p>La Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación serán invitados permanentes con voz, pero sin voto.</p> <p>La Presidencia del Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciante de Actos de Corrupción (SUPRAC) será ejercida por el Secretario de Transparencia de la</p>	<p>Se considera fundamental la participación de un delegado de la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación en el Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciante de Actos de Corrupción - SUPRAC, con el fin de fortalecer la vigilancia, la garantía de derechos y el control preventivo dentro del funcionamiento del sistema.</p> <p>Se realiza un ajuste para modificar la redacción del párrafo cuarto, con la finalidad</p>

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República.</p> <p>El Comité Rector se reunirá como mínimo una vez trimestralmente y cada uno de sus delegados tendrá voz y voto frente a las deliberaciones y medidas que deba adoptar el Comité. Las decisiones del Comité Rector serán por votación ordinaria de la mayoría de sus miembros con derecho a voto.</p> <p>Párrafo 1°. En las sesiones donde se definan estrategias, planes, políticas, procesos y procedimientos, podrán asistir como miembros con voz y no con voto, la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, representantes de la academia, organizaciones de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, y representantes de los gremios económicos.</p> <p>La Secretaría Técnica del SUPRAC adelantará un proceso de invitación pública, para la participación de representantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y empresas del sector privado.</p> <p>Párrafo 2°. En las sesiones donde se estudien casos del sector privado, serán invitados los delegados de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades.</p>	<p>Presidencia de la República. La Presidencia del Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciante de Actos de Corrupción (SUPRAC) será ejercida de manera rotativa, en periodos de dos (2) años, por la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Unidad Nacional de Protección, en el orden mencionado.</p> <p>El Comité Rector se reunirá como mínimo una vez trimestralmente y cada uno de sus delegados tendrá voz y voto frente a las deliberaciones y medidas que deba adoptar el Comité. Las decisiones del Comité Rector serán por votación ordinaria de la mayoría de sus miembros con derecho a voto.</p> <p>Párrafo 1°. En las sesiones donde se definan estrategias, planes, políticas, procesos y procedimientos, podrán asistir como miembros con voz y no con voto, la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, representantes de la academia, organizaciones de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, y representantes de los gremios económicos.</p> <p>La Secretaría Técnica del SUPRAC adelantará un proceso de invitación pública, para la participación de representantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y empresas del sector privado.</p> <p>Párrafo 2°. En las sesiones donde se estudien casos del sector privado, serán invitados los delegados de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades.</p> <p>Párrafo 3°. En las sesiones donde se analicen casos del ámbito territorial,</p>	<p>de aclarar que estas Comisiones tendrán que presentar informes sobre la situación de su territorio en particular.</p> <p>Se modifica el inciso relativo a la Presidencia del Comité Rector del SUPRAC con el propósito de reafirmar su carácter rotativo, garantizando tanto la corresponsabilidad institucional como la continuidad en la gestión del sistema. La rotación se establece específicamente entre la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Unidad Nacional de Protección, en atención a sus respectivas competencias y al papel estratégico que desempeñan en la protección de denunciante y en la implementación de políticas anticorrupción. Esta configuración responde también a las recomendaciones formuladas por organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia por Colombia, y busca asegurar que la dirección del SUPRAC no dependa de ciclos políticos y agenda de gobiernos,</p>

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES	TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>Parágrafo 3°. En las sesiones donde se analicen casos del ámbito territorial, serán invitados los delegados de la Personería de la circunscripción respectiva.</p> <p>Parágrafo 4°. En los territorios las comisiones regionales de moralización, darán a conocer trimestralmente a la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, los procesos de denuncia cuando comuniquen o revelen actos y/o hechos de corrupción.</p> <p>ARTÍCULO 7°. Funciones del Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC). El Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) tendrá las siguientes funciones:</p> <p>a. Definir las estrategias, procesos y procedimientos que orienten, promuevan, faciliten y garanticen el trámite efectivo de las solicitudes de protección de los reportantes/denunciantes, así como las respuestas del Estado frente a dichas solicitudes.</p> <p>b. Hacer evaluación y recomendaciones a las entidades encargadas de brindar Medidas de Protección. En sus decisiones, las entidades encargadas deberán hacer referencia a las recomendaciones realizadas por el Comité Rector del SUPRAC.</p> <p>c. En coordinación con las entidades que conforman el SUPRAC, definir las</p>	<p>serán invitados los delegados de la Personería de la circunscripción respectiva.</p> <p>Así mismo, las Comisiones Regionales de Moralización tendrán participación y deberán presentar informes sobre los procesos de denuncia presentados en el territorio respectivo, cuando se comuniquen o revelen hechos o actos de corrupción.</p> <p>Parágrafo 4°. En los territorios las comisiones regionales de moralización, darán a conocer trimestralmente a la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, los procesos de denuncia cuando comuniquen o revelen actos y/o hechos de corrupción.</p> <p>Sin modificaciones.</p>	<p>promoviendo así una política de Estado sólida, sostenible e independiente.</p> <p>Adicionalmente, se establece un periodo de dos (2) años para el ejercicio de la Presidencia, considerado adecuado para la implementación de planes de acción y la efectiva rotación en el liderazgo, lo que contribuye a una gobernanza más representativa, técnica y transparente.</p>	<p>estrategias, planes y políticas encaminados al fortalecimiento de los canales de denuncia en el país y realizar el seguimiento y adoptar recomendaciones sobre los mecanismos de denuncia adoptados por las entidades públicas y privadas, incluyendo su funcionamiento.</p> <p>d. Apoyar en el proceso de definición de los criterios para estandarizar y unificar los sistemas de denuncia por hechos de corrupción de tal forma que se respete el anonimato, y la confidencialidad, según el caso y se indique la entidad pública afectada.</p> <p>e. Realizar la evaluación de las medidas de protección adoptadas, solicitando los ajustes a las entidades respectivas.</p> <p>f. Realizar un informe público anual en el cual se realicen recomendaciones de política pública para el mejoramiento continuo en la adopción de medidas de protección y fortalecer la caracterización de las prácticas corruptas y las fallas en la arquitectura institucional que lo permite.</p> <p>g. Elaborar informes anuales de gestión que, en el marco de las competencias asignadas en esta Ley, deberán presentarse a la Comisión Nacional de Moralización y al Congreso de la República.</p> <p>h. Adoptar su propio reglamento.</p> <p>i. Reglamentar el funcionamiento de la Secretaría Técnica del SUPRAC.</p> <p>Parágrafo. La delegación de las autoridades competentes para atender las sesiones del Comité Rector del SUPRAC, deberá realizarse según lo estipulado por el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 y los eventos de conflictos de intereses de los delegados.</p>		
<p>ARTÍCULO 8°. De la Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC). El Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) contará con una Secretaría Técnica integrada por profesionales con formación y experiencia relacionada con las funciones asignadas a este organismo, quienes estarán adscritos a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con supervisión permanente de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.</p> <p>La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República liderará y establecerá los lineamientos para la articulación y el cumplimiento de las funciones a cargo de la Secretaría Técnica del SUPRAC.</p> <p>En los eventos de decisión de trámites de solicitudes de medidas de protección de emergencia, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República presentará el proyecto de decisión motivada a los delegados de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, quienes tendrán la facultad de presentar oposición a la adopción o negación de medidas de protección dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su presentación. De presentarse una oposición motivada, la Secretaría de Transparencia deberá realizar los ajustes pertinentes a la proyección de la decisión dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.</p> <p>Este proceso será de obligatorio cumplimiento, so pena de mala conducta del funcionario respectivo.</p> <p>Parágrafo. Para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría Técnica del SUPRAC y la adopción de sus</p>	<p>Sin modificaciones.</p>		<p>decisiones, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República contará con el apoyo de equipos técnicos interdisciplinarios y territoriales de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, en los eventos que sea requerido.</p> <p>ARTÍCULO 9°. Funciones de la Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC). Las funciones de la Secretaría Técnica serán las siguientes:</p> <p>a. Recibir y tramitar las solicitudes de protección. Serán tramitadas directamente por la Secretaría Técnica las solicitudes de Medidas Provisionales de Emergencia.</p> <p>Cuando la solicitud se refiera a otro tipo de medidas de protección, la Secretaría Técnica deberá trasladarlas a la totalidad de las entidades de orden nacional y territorial que tengan dentro de su competencia la ejecución de programas de protección a personas naturales. Lo anterior con el fin de garantizar el principio de legalidad, celeridad y eficiencia en el procedimiento.</p> <p>b. Realizar seguimiento y monitoreo en tiempo real de las solicitudes y las medidas de protección adoptadas, sus procedimientos y plazos.</p> <p>c. Realizar una revisión periódica sobre el uso y eficacia de las medidas de protección adoptadas, para el mejoramiento continuo del sistema.</p> <p>d. Informar al denunciante que contra las decisiones de las autoridades que otorguen, nieguen, modifiquen o extiendan las solicitudes de protección, procede el recurso de reposición de acuerdo con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, el cual deberá interponerse en</p>	<p>ARTÍCULO 9°. Funciones de la Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC). Las funciones de la Secretaría Técnica serán las siguientes:</p> <p>a. Recibir y tramitar las solicitudes de protección. Serán tramitadas directamente por la Secretaría Técnica las solicitudes de Medidas Provisionales de Emergencia.</p> <p>Cuando la solicitud se refiera a otro tipo de medidas de protección, la Secretaría Técnica deberá trasladarlas a la totalidad de las entidades de orden nacional y territorial que tengan dentro de su competencia la ejecución de programas de protección a personas naturales. Lo anterior con el fin de garantizar el principio de legalidad, celeridad y eficiencia en el procedimiento.</p> <p>b. Realizar seguimiento y monitoreo en tiempo real de las solicitudes y las medidas de protección adoptadas, sus procedimientos y plazos.</p> <p>c. Realizar una revisión periódica sobre el uso y eficacia de las medidas de protección adoptadas, para el mejoramiento continuo del sistema.</p> <p>d. Informar al denunciante que contra las decisiones de las autoridades que otorguen, nieguen, modifiquen o extiendan las solicitudes de protección, procede el recurso de reposición de acuerdo con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, el cual deberá interponerse en</p>	<p>Se ajusta la redacción de los literales D, G y J con el fin de mejorar la claridad y precisión del texto, al tiempo que se sintetiza su contenido para facilitar su comprensión. Igualmente, se modifica el alcance de la función relacionada con el diseño y gestión de los canales de comunicación del SUPRAC.</p>

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES	TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>los términos establecidos en el artículo 76 de la Ley en comento.</p> <p>e. En caso de ser aprobada la solicitud de medidas de protección, la Secretaría Técnica del SUPRAC comunicará al reportante/denunciante las medidas otorgadas, brindando asesoría jurídica, sobre el alcance legal de estas y los derechos de los que es titular. La asesoría jurídica debe ser integral, y atender a las características específicas de cada denunciante, considerando la pertenencia del reportante/denunciante a grupos de especial protección constitucional.</p> <p>f. Diseñar y adoptar canales de comunicación eficientes, seguros y oportunos entre los miembros del SUPRAC.</p> <p>g. Administrar un sistema de información del SUPRAC para la recepción y trámite de las solicitudes de protección, el cual debe garantizar la confidencialidad y reserva de la información y salvaguardar la identidad de los reportantes/denunciados.</p> <p>h. Convocar a sesión al Comité Rector trimestralmente o a sesiones extraordinarias si se requiere.</p>	<p>los términos establecidos en el artículo 76 de la Ley en comento. <u>Informar a los reportantes/denunciados sobre la procedencia del recurso de reposición frente a las decisiones adoptadas, conforme a lo establecido en la ley 1437 de 2011.</u></p> <p>e. <u>En caso de ser aprobada la solicitud de medidas de protección, la Secretaría Técnica del SUPRAC comunicará al reportante/denunciante las medidas otorgadas, brindando asesoría jurídica, sobre el alcance legal de estas y los derechos de los que es titular. La asesoría jurídica debe ser integral, y atender a las características específicas de cada denunciante, considerando la pertenencia del reportante/denunciante a grupos de especial protección constitucional. Una vez aprobadas las medidas de protección, la Secretaría Técnica del SUPRAC informará al reportante/denunciante sobre su contenido y brindará asesoría jurídica integral, adecuada a sus circunstancias particulares, especialmente si pertenece a un grupo de especial protección constitucional.</u></p> <p>f. Diseñar y adoptar canales de comunicación eficientes, seguros y oportunos entre los miembros del SUPRAC.</p> <p>g. Administrar un sistema de información del SUPRAC para la recepción y trámite de las solicitudes de protección, <u>que garantice el cual debe garantizar la confidencialidad, y reserva y protección de la identidad de los reportantes/denunciados en el trámite de sus solicitudes de protección, de la información y salvaguardar la identidad de los Reportantes/Denunciados.</u></p> <p>h. Convocar a sesión al Comité Rector trimestralmente o a sesiones extraordinarias si se requiere.</p>		<p>i. Impartir las capacitaciones contempladas en la presente ley para los funcionarios del SUPRAC.</p> <p>j. La Secretaría Técnica del SUPRAC deberá llevar los registros y elaborar estadísticas, así como un informe trimestral en el que conste el número de denuncias recibidas, las medidas aprobadas y negadas, así como su tipo, el estado de su implementación, y el número de medidas brindadas según las características del reportante/denunciante. De igual manera, en el informe también deberá constar la pertenencia del reportante/denunciante protegido a grupos de especial protección constitucional. Este informe trimestral deberá ser presentado al Comité Rector del SUPRAC y a los entes de control, acompañado de un informe financiero que desagregue el costo individual de las medidas de protección de emergencia.</p> <p>k. Elaborar un informe público anual sobre la evaluación de impacto de la presente ley, así como de la gestión del SUPRAC y su ejecución presupuestal.</p> <p>l. Establecer un mecanismo de seguimiento y control para garantizar que todas las entidades de naturaleza pública, tanto del orden nacional, como territorial, deban difundir la página web y los demás canales físicos y digitales por medio de sus propios canales internos.</p> <p>Parágrafo. El tratamiento de los datos que suministren los</p>	<p>i. Impartir las capacitaciones contempladas en la presente ley para los funcionarios del SUPRAC.</p> <p>j. La Secretaría Técnica del SUPRAC deberá llevar los registros, y elaborar estadísticas y <u>presentar un informe trimestral al Comité Rector y a los entes de control, detallando las así como un informe trimestral en el que conste el número de denuncias recibidas, las medidas aprobadas y negadas, así como su tipo, el estado de su implementación, y el número de medidas brindadas según las características del reportante/denunciante, incluyendo su pertenencia a grupos de especial protección constitucional. El informe deberá incluir un anexo financiero con el costo individual de las medidas de protección de emergencia, de igual manera, en el informe también deberá constar la pertenencia del reportante/denunciante protegido a grupos de especial protección constitucional. Este informe trimestral deberá ser presentado al Comité Rector del SUPRAC y a los entes de control, acompañado de un informe financiero que desagregue el costo individual de las medidas de protección de emergencia.</u></p> <p>k. Elaborar un informe público anual sobre la evaluación de impacto de la presente ley, así como de la gestión del SUPRAC y su ejecución presupuestal.</p> <p>l. Establecer un mecanismo de seguimiento y control para garantizar que todas las entidades de naturaleza pública, tanto del orden nacional, como territorial, deban difundir <u>por medio de sus propios canales internos</u>, la página web y los demás canales físicos y digitales <u>del SUPRAC</u> por medio de sus propios canales internos.</p> <p>Parágrafo. <u>El tratamiento de los datos que suministren los</u></p>	
<p>reportantes/denunciados de presuntos hechos de corrupción, deberán ser manejados en virtud del principio de responsabilidad demostrada y necesidad de los datos, garantizando la protección de los datos personales según lo contemplado en la Ley 1581 de 2012.</p> <p>ARTICULO 10. ELIMINADO.</p> <p>CAPITULO II. DE LA PROTECCIÓN</p> <p>ARTICULO 11. Criterios de priorización en la asignación de medidas de protección. La autoridad encargada de evaluar la procedencia y priorización de las medidas de protección, contempladas en la presente ley, deberá tener en cuenta lo contemplado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia y, como mínimo, los siguientes criterios:</p> <p>A. Criterios subjetivos:</p> <p>1. El nivel de riesgo del reportante, denunciante o facilitador, contemplando criterios de territorialidad (situación de orden público de su lugar de origen), grupo poblacional al que pertenece, interseccionalidad y enfoque de género. La situación de riesgo deberá tener en cuenta la existencia de un peligro específico, individualizable, preciso, determinado y cierto, que contenga una prueba siquiera sumaria que permita deducir la probabilidad razonable de lesionar de forma grave los derechos o</p>	<p>Reportantes/Denunciados de presuntos hechos de corrupción, deberán ser manejados en virtud del principio de responsabilidad demostrada y necesidad de los datos, garantizando la protección de los datos personales según lo contemplado en la Ley 1581 de 2012. <u>El tratamiento de los datos suministrados por los reportantes/denunciados deberá ajustarse a los principios de responsabilidad demostrada y necesidad, garantizando la protección de los datos personales conforme a la ley 1581 de 2012.</u></p> <p>ELIMINADO.</p> <p>Sin modificaciones.</p> <p>ARTICULO 44 10. Criterios de priorización en la asignación de medidas de protección. La autoridad encargada de evaluar la procedencia y priorización de las medidas de protección, contempladas en la presente ley, deberá tener en cuenta lo contemplado establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia y, como mínimo, los siguientes criterios:</p> <p>A. Criterios subjetivos:</p> <p>1. El nivel de riesgo del reportante, denunciante o facilitador, contemplando criterios de territorialidad (situación de orden público de su lugar de origen), grupo poblacional al que pertenece, interseccionalidad y enfoque de género. La situación de riesgo deberá tener en cuenta la existencia de un peligro específico, individualizable, preciso, determinado y cierto, que contenga una prueba siquiera sumaria que permita deducir la probabilidad razonable de lesionar de forma grave los derechos o bienes jurídicos del</p>	<p>Se ajustará el articulo subsiguiente en numeración.</p> <p>Se realizan ajustes en torno al parágrafo Primero, para aclarar su unidad temática con el artículo y el alcance respecto del SUPRAC. Así mismo, se elimina el inciso tercero y se subsume en las "autoridades competentes" del inciso segundo. Finalmente, se ajusta la numeración del artículo. Del numeral 7 se suprime la referencia específica a grupos históricamente marginados, con el fin de que sea el reglamento, en el desarrollo del artículo 22 del presente proyecto, el que defina de manera técnica y</p>	<p>bienes jurídicos del denunciante/reportante.</p> <p>2. La existencia de conductas de acoso laboral y/o de retaliación contra el reportante, denunciante o facilitador.</p> <p>3. La situación específica, respecto a los aspectos que rodean al reportante/denunciante o facilitador, tales como lugar de residencia, pertenencia a un partido político, actividad sindical, situación económica, actividad profesional, la labor que desempeña como particular o líder social, vínculos familiares, entre otros.</p> <p>4. Vínculos entre denunciante y denunciado.</p> <p>5. La condición de subordinación entre denunciante y denunciado cuando medie relación contractual o vínculo laboral.</p> <p>6. El escenario, donde se analizan las circunstancias históricas, sociales, económicas y políticas del lugar donde parecen ocurrir los hechos.</p> <p>7. Se deberá considerar la vulnerabilidad social del denunciante, entendida como la situación de riesgo o desventaja derivada de su pertenencia a grupos históricamente marginados o discriminados, tales como poblaciones étnicas, personas en situación de desplazamiento forzado, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, personas mayores, o cualquier otro grupo que por su condición específica se encuentre expuesto a un mayor nivel de violencia o represalias.</p> <p>B. Criterios objetivos:</p> <p>1. Trabajadores del sector privado o funcionarios del sector público que tengan acceso a información sobre presuntos hechos o actos de corrupción en un contexto contractual o laboral y lo</p>	<p>reportante/denunciante denunciante/reportante.</p> <p>2. La existencia de conductas de acoso laboral y/o de retaliación contra el reportante, denunciante o facilitador.</p> <p>3. La situación específica, respecto a los aspectos que rodean al reportante/denunciante o facilitador, tales como lugar de residencia, pertenencia a un partido político, actividad sindical, situación económica, actividad profesional, la labor que desempeña como particular o líder social, vínculos familiares, entre otros.</p> <p>4. Vínculos entre denunciante y denunciado.</p> <p>5. La condición de subordinación entre denunciante y denunciado cuando medie relación contractual o vínculo laboral.</p> <p>6. El escenario, donde se analizan las circunstancias históricas, sociales, económicas y políticas del lugar donde parecen ocurrir los hechos.</p> <p>7. Se deberá considerar la vulnerabilidad social del denunciante, entendida como la situación de riesgo o desventaja derivada de su pertenencia a grupos históricamente marginados o discriminados, tales como poblaciones étnicas, personas en situación de desplazamiento forzado, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, personas mayores, o cualquier otro grupo que por su condición específica se encuentre expuesto a un mayor nivel de violencia o represalias.</p> <p>B. Criterios objetivos:</p> <p>1. Trabajadores del sector privado o funcionarios del sector público que tengan acceso a información sobre presuntos hechos o actos de corrupción en un contexto contractual o laboral y lo</p>	<p>actualizada los criterios de priorización para las poblaciones con especial protección constitucional, garantizando así una mayor flexibilidad, unidad de materia y adecuación a los estándares vigentes.</p> <p>Se modifica el numeral 5 para darle mayor claridad.</p> <p>Se mejora la redacción del parágrafo con la finalidad de clarificar redacción y deberes de las entidades en el marco de la naturaleza del presente artículo.</p>

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES	TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>1. Trabajadores del sector privado o funcionarios del sector público que tengan acceso a información sobre presuntos hechos o actos de corrupción en un contexto contractual o laboral y lo pongan en conocimiento de la autoridad competente.</p> <p>2. Los accionistas, socios individualmente considerados, administrador de hecho o de derecho, directivo, empleado o asesor y las demás personas pertenecientes al órgano de administración como asamblea general de socios, juntas directivas, comités de directivos con capacidad de decisión, incluidos los miembros no ejecutivos, voluntarios y los trabajadores en práctica que perciban o no una remuneración.</p> <p>3. Cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.</p> <p>4. Reportantes/denunciantes cuando comuniquen o revelen públicamente información sobre presuntos hechos o actos de corrupción obtenida en el marco de una relación laboral ya finalizada.</p> <p>5. Reportantes/denunciantes que, con anterioridad a la consecución de los hechos denunciados, hayan realizado denuncias o reportes previos en otras instancias sobre actos y/o hechos de corrupción.</p> <p>6. Reportantes/denunciantes con contratos de prestación de servicios con empresas o entidades contra las que denuncien actos de corrupción, cuya información haya sido obtenida en el marco del desarrollo o ejecución de su contrato.</p>	<p>pongan en conocimiento de la autoridad competente.</p> <p>2. Los accionistas, socios individualmente considerados, administrador de hecho o de derecho, directivo, empleado o asesor y las demás personas pertenecientes al órgano de administración como asamblea general de socios, juntas directivas, comités de directivos con capacidad de decisión, incluidos los miembros no ejecutivos, voluntarios y los trabajadores en práctica que perciban o no una remuneración.</p> <p>3. Cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.</p> <p>4. Reportantes/denunciantes cuando comuniquen o revelen públicamente información sobre presuntos hechos o actos de corrupción obtenida en el marco de una relación laboral ya finalizada.</p> <p>5. <u>Reportantes/denunciantes que, con anterioridad a la consecución de los hechos denunciados, hayan realizado denuncias o reportes previos en otras instancias sobre actos y/o hechos de corrupción. Reportantes/denunciantes que, antes de los hechos objeto de la denuncia, hayan realizado previamente reportes o denuncias sobre actos o hechos de corrupción ante la misma u otras instancias.</u></p> <p>6. Reportantes/denunciantes con contratos de prestación de servicios con empresas o entidades contra las que denuncien actos de corrupción, cuya información haya sido obtenida en el marco del desarrollo o ejecución de su contrato.</p> <p><u>Parágrafo. En las entidades públicas del orden Nacional, departamental, municipal, cuando se presente denuncia por parte de un funcionario contra la</u></p>		<p>Parágrafo. En las entidades públicas del orden Nacional, departamental, municipal, cuando se presente denuncia por parte de un funcionario contra la misma entidad, la oficina de control interno disciplinario, desarrollará protocolos internos tomando medidas de protección garantizando la protección laboral y dispondrá canales para evitar el acoso laboral de reportantes/denunciantes, para lo cual deberá mantener el compromiso de reserva en el desarrollo de sus funciones.</p> <p>La oficina de control interno disciplinario de la entidad pública, en caso de amenazas al reportante/denunciante, deberá remitir a la unidad del Protección, para garantizar su protección.</p> <p>Así mismo, deberá remitir a la procuraduría y contraloría la denuncia del reportante/denunciante, ante la Procuraduría General de la Nación y Contraloría para su respectivo trámite.</p> <p>ARTÍCULO 12. Medidas Provisionales de Emergencia. En los casos de extrema urgencia, cuando se verifique que la vida y/o la integridad física de la persona reportante/denunciante y/o de su grupo</p>	<p>misma entidad, la oficina de control interno disciplinario, desarrollará protocolos internos tomando medidas de protección garantizando la protección laboral y dispondrá canales para evitar el acoso laboral de reportantes/denunciantes, para lo cual deberá mantener el compromiso de reserva en el desarrollo de sus funciones.</p> <p><u>Las entidades públicas del orden nacional, departamental o municipal en las que uno de sus servidores presente denuncias o reportes de actos de corrupción sobre la propia entidad, deberán adoptar protocolos internos para prevenir prácticas de acoso laboral, hostigamiento u otras represalias en contra del reportante/denunciante.</u></p> <p>La oficina de control interno disciplinario de la entidad pública, en caso de amenazas al reportante/denunciante, deberá remitir al SUPRAC y a las autoridades competentes a la unidad del Protección, para garantizar su protección.</p> <p><u>En caso de que un reportante o denunciante reciba amenazas, la oficina de control interno disciplinario de la entidad pública deberá informar de manera inmediata al SUPRAC y a las autoridades competentes con el fin de activar los mecanismos necesarios para garantizar su protección.</u></p> <p>Así mismo, deberá remitir a la procuraduría y contraloría la denuncia del reportante/denunciante, ante la Procuraduría General de la Nación y Contraloría para su respectivo trámite.</p> <p>ARTÍCULO 42 11. Medidas Provisionales de Emergencia. En los casos de extrema urgencia, cuando se verifique que la vida y/o la integridad física de la persona</p>	<p>Se reajusta la numeración del artículo y la ubicación del párrafo 5, pasándolo al 2.</p>
<p>familiar corre grave riesgo, se podrán otorgar medidas provisionales de apoyo de reubicación temporal, las cuales constituyen la asignación y entrega mensual al denunciante de una suma de dinero que oscilará entre uno (1) y tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, según las particularidades del grupo familiar del caso, para facilitar su asentamiento en un lugar diferente a la zona de riesgo. Esta medida de protección es complementaria a las ayudas que buscan suplir el mínimo vital otorgadas por otras entidades del Estado.</p> <p>En los casos en que no se requiera reubicación temporal, la Secretaría Técnica otorgará medidas de protección o autoprotección, según la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.</p> <p>Parágrafo 1°. Las medidas provisionales de emergencia serán de carácter transitorio, y no podrán exceder los seis (6) meses, término en el cual se dará el ingreso del denunciante a un programa de protección de carácter permanente según lo establecido en el artículo 21 de la presente Ley.</p> <p>Si transcurridos ciento veinte días (120) días calendario, no se ha resuelto la situación sobre su ingreso a un programa permanente de protección, la secretaria técnica del SUPRAC citará una reunión extraordinaria del comité rector, en el cual la entidad competente deberá llevar un informe detallado sobre las razones por las cuales no se ha resuelto la solicitud. La realización de la reunión extraordinaria deberá hacerse dentro del mes siguiente al cumplimiento de este término.</p>	<p>reportante/denunciante y/o de su grupo familiar corre grave riesgo, se podrán otorgar medidas provisionales de apoyo de reubicación temporal, las cuales constituyen la asignación y entrega mensual al denunciante de una suma de dinero que oscilará entre uno (1) y tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, según las particularidades del grupo familiar del caso, para facilitar su asentamiento en un lugar diferente a la zona de riesgo. Esta medida de protección es complementaria a las ayudas que buscan suplir el mínimo vital otorgadas por otras entidades del Estado.</p> <p>En los casos en que no se requiera reubicación temporal, la Secretaría Técnica otorgará medidas de protección o autoprotección, según la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.</p> <p>Parágrafo 1°. Las medidas provisionales de emergencia serán de carácter transitorio, y no podrán exceder los seis (6) meses, término en el cual se dará el ingreso del denunciante a un programa de protección de carácter permanente según lo establecido en el artículo 21-20 de la presente Ley.</p> <p>Si transcurridos ciento veinte días (120) días calendario, no se ha resuelto la situación sobre su ingreso a un programa permanente de protección, la secretaria técnica del SUPRAC citará una reunión extraordinaria del comité rector, en el cual la entidad competente deberá llevar un informe detallado sobre las razones por las cuales no se ha resuelto la solicitud. La realización de la reunión extraordinaria deberá hacerse dentro del mes siguiente al cumplimiento de este término.</p> <p>Parágrafo 2°. La resolución de la Secretaría Técnica que otorga medidas provisionales de emergencia,</p>	<p>Se elimina la expresión mínimo vital, en consideración a que las ayudas pueden abarcar otras ayudas más allá de las económicas.</p> <p>Adicionalmente, se reajusta el párrafo 2, con la finalidad de aclarar que pueden ser financiados o cofinanciados con recursos del fondo, dependiendo de las necesidades presupuestales para garantizar los derechos de los Reportantes/Denunciante. De este modo, excepcionalmente se utilizarían recursos por fuera del fondo.</p> <p>Finalmente, se adiciona un inciso a este párrafo, con la finalidad de robustecer el seguimiento y control de los recursos otorgados mediante medidas de emergencia.</p>	<p>Parágrafo 2°. Las Medidas Provisionales de Emergencia de las que trata el presente artículo serán cofinanciadas por el fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción y la reparación de los afectados por actos de corrupción, consagrado en el artículo 62 de la Ley 2195 de 2022.</p> <p>Parágrafo 3°. En el marco del Sistema Unificado de Protección a Denunciantes por Presuntos Actos y/o Hechos de Corrupción, las medidas provisionales de emergencia podrán ser cofinanciadas con recursos de cooperación internacional.</p> <p>Parágrafo 4°. Lo dispuesto en este artículo se ajustará al Marco Fiscal de Mediano Plazo.</p> <p>Parágrafo 5°. La resolución de la Secretaría Técnica que otorga medidas provisionales de emergencia, será remitida a las demás autoridades competentes, para efectos de su</p>	<p>será remitida a las demás autoridades competentes, para efectos de su concurrencia en la protección del reportante/denunciante cuya situación sea de riesgo extremo para su vida o integridad personal. Estas entidades deberán realizar un trámite celeré y oportuno para el otorgamiento de medidas permanentes a los reportantes/denunciantes.</p> <p>Parágrafo 2° 3°. Las Medidas Provisionales de Emergencia de las que trata el presente artículo serán financiados o cofinanciadas por el fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción y la reparación de los afectados por actos de corrupción, consagrado en la Ley 2195 de 2022.</p> <p>El Fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción y la reparación de los afectados por actos de corrupción garantizará los mecanismos para desarrollar la trazabilidad de estos recursos.</p> <p>Parágrafo 3 4°. En el marco del Sistema Unificado de Protección a Denunciantes por Presuntos Actos y/o Hechos de Corrupción, las medidas provisionales de emergencia podrán ser cofinanciadas con recursos de cooperación internacional.</p> <p>Parágrafo 4-5°. Lo dispuesto en este artículo se ajustará al Marco Fiscal de Mediano Plazo.</p> <p>Parágrafo-5°. La resolución de la Secretaría Técnica que otorga medidas provisionales de emergencia, será remitida a las demás autoridades competentes, para efectos de su</p>	

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES	TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>conurrencia en la protección del reportante/denunciante cuya situación sea de riesgo extremo para su vida o integridad personal. Estas entidades deberán realizar un trámite celeré y oportuno para el otorgamiento de medidas permanentes a los reportantes/denunciantes.</p> <p>ARTÍCULO 13. Modifíquese el artículo 62 de la Ley 2195 de 2022, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 62°. Fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción y la reparación de los afectados por actos de corrupción. Constitúyase el fondo nacional para la protección integral a los denunciantes o reportantes de presuntos actos o hechos de corrupción y la reparación de las víctimas por actos y hechos de corrupción, a través de un fondo-cuenta cuyo propósito es otorgar medidas provisionales de protección a los denunciantes y reportantes de presuntos hechos y/o actos de corrupción y de su grupo familiar, el acompañamiento a las mismas y promover la lucha contra la corrupción a través del desarrollo de acciones preventivas y de fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado.</p>	<p>conurrencia en la protección del reportante/denunciante cuya situación sea de riesgo extremo para su vida o integridad personal. Estas entidades deberán realizar un trámite celeré y oportuno para el otorgamiento de medidas permanentes a los reportantes/denunciantes.</p> <p>ARTÍCULO 13 12. Modifíquese el artículo 62 de la Ley 2195 de 2022, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 62°. Fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción y la reparación de los afectados por actos de corrupción. Constitúyase el fondo nacional para la protección integral a los denunciantes o reportantes de presuntos actos o hechos de corrupción y la reparación de las víctimas por actos y hechos de corrupción, a través de un fondo-cuenta cuyo propósito es otorgar medidas provisionales de protección a los denunciantes y reportantes de presuntos hechos y/o actos de corrupción y de su grupo familiar, el acompañamiento a las mismas y promover la lucha contra la corrupción a través del desarrollo de acciones preventivas y de fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado, como un fondo cuenta destinado a otorgar medidas provisionales de protección para los denunciantes o reportantes y sus núcleos familiares, brindar acompañamiento integral y promover acciones preventivas y de fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado en la lucha contra la corrupción.</p>	<p>Se hacen ajustes de redacción del artículo, en particular al inciso primero y se reenumera.</p>	<p>Las fuentes de financiación del fondo serán las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Presupuesto General de la Nación. 2. Los recursos que aporten las entidades públicas, de acuerdo con los convenios que se celebren al respecto. 3. Las donaciones o aportes de organizaciones internacionales o nacionales. 4. Los recaudos provenientes de las multas impuestas conforme lo establecido en los artículos 60 y 61 de la presente Ley. 5. Los recaudos provenientes de las multas impuestas por conductas retaliatorias ante denuncias o reportes de corrupción, contempladas en la Ley. <p>Adscribese el fondo de que trata este artículo a la Procuraduría General de la Nación, entidad que se encargará de recaudar, administrar y distribuir los recursos conforme a la siguiente ordenación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El 30% a la Procuraduría General de la Nación para garantizar el restablecimiento de los derechos colectivos indivisibles afectados por los actos de corrupción, y a la reparación integral pecuniaria o no pecuniaria de los afectados 	<p>Las fuentes de financiación del fondo serán las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Presupuesto General de la Nación. 2. Los recursos que aporten las entidades públicas, de acuerdo con los convenios que se celebren al respecto. 3. Las donaciones o aportes de organizaciones internacionales o nacionales. 4. Los recaudos provenientes de las multas impuestas conforme lo establecido en los artículos 60 y 61 de la presente Ley. 5. Los recaudos provenientes de las multas impuestas por conductas retaliatorias ante denuncias o reportes de corrupción, contempladas en la Ley. <u>Los recursos recaudados por concepto de las multas impuestas por actos de retaliación contra reportantes o denunciantes de hechos de corrupción, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la presente ley.</u> <p>Adscribese el fondo de que trata este artículo a la Procuraduría General de la Nación, entidad que se encargará de recaudar, administrar y distribuir los recursos conforme a la siguiente ordenación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El 30% a la Procuraduría General de la Nación para garantizar el restablecimiento de los derechos colectivos indivisibles afectados por los actos de corrupción, y a la reparación integral pecuniaria o no pecuniaria de los afectados 	
<p>individuales y colectivos de los actos de corrupción.</p> <p>Quienes se consideren afectados individuales o colectivos de los actos de corrupción, podrán presentar solicitudes a la Procuraduría General de la Nación para que se les considere en los procesos de restablecimiento de los derechos y en la reparación integral pecuniaria o no pecuniaria.</p> <p>La Procuraduría General de la Nación deberá establecer las condiciones para garantizar la reparación pecuniaria y no pecuniaria de las víctimas a las que hubiere lugar.</p> <p>2. El 20% a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que pueda adelantar las acciones de repetición y defensa de los derechos colectivos que se pretenden amparar con este capítulo.</p> <p>3. El 40% al DAPRE para que a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, para lo relacionado con otorgar medidas provisionales a los reportantes/denunciantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción a través del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC).</p> <p>Parágrafo 1°. Se reservará un porcentaje de 10% de los recursos del fondo para cubrir los gastos de administración. El porcentaje se ajustará cada año y corresponderá, exclusivamente,</p>	<p>individuales y colectivos de los actos de corrupción.</p> <p>Quienes se consideren afectados individuales o colectivos de los actos de corrupción, podrán presentar solicitudes a la Procuraduría General de la Nación para que se les considere en los procesos de restablecimiento de los derechos y en la reparación integral pecuniaria o no pecuniaria.</p> <p>La Procuraduría General de la Nación deberá establecer las condiciones para garantizar la reparación pecuniaria y no pecuniaria de las víctimas a las que hubiere lugar.</p> <p>2. El 20% a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que pueda adelantar las acciones de repetición y defensa de los derechos colectivos que se pretenden amparar con este capítulo.</p> <p>3. El 40% al DAPRE Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para que, a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, para lo relacionado con otorgar se otorguen medidas provisionales a los reportantes/denunciantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción a través del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC).</p> <p>Parágrafo 1°. Se reservará un porcentaje de 10% de los recursos del fondo para cubrir los gastos de administración a cargo de la Procuraduría General de la Nación. El porcentaje se ajustará</p>		<p>al monto necesario para pagar los gastos administrativos.</p> <p>Parágrafo 2°. La Procuraduría General de la Nación deberá emitir informes estadísticos y un informe anual de la inversión y ejecución de los recursos asignados al Fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción y la reparación de los afectados por actos de corrupción.</p> <p>La Procuraduría General de la Nación deberá remitir un informe anual al Congreso de la República sobre la ejecución de los recursos asignados al Fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción y la reparación de los afectados por actos de corrupción.</p> <p>Parágrafo transitorio. La Procuraduría General de la Nación, reglamentará y pondrá en operación el Fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción y la reparación de los afectados por actos de corrupción, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.</p>	<p>cada año y corresponderá, exclusivamente, al monto necesario para pagar los gastos administrativos.</p> <p>Parágrafo 2°. La Procuraduría General de la Nación deberá emitir informes estadísticos y un informe anual de la inversión y ejecución de los recursos asignados al Fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción y la reparación de los afectados por actos de corrupción.</p> <p>La Procuraduría General de la Nación deberá remitir un informe anual al Congreso de la República sobre la ejecución de los recursos asignados al Fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción y la reparación de los afectados por actos de corrupción.</p> <p>Parágrafo transitorio. La Procuraduría General de la Nación, reglamentará y pondrá en operación el Fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción y la reparación de los afectados por actos de corrupción, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.</p>	<p>La modificación propuesta responde a la necesidad de armonizar el lenguaje normativo con los estándares actuales de formulación de políticas públicas en salud, asegurando que el</p>
<p>ARTÍCULO NUEVO. Protección psicológica de los reportantes/denunciante de Actos de Corrupción. La Secretaría Técnica del SUPRAC deberá recibir y tramitar, con carácter prioritario, las solicitudes de atención psicológica de calidad presentadas por los reportantes o denunciantes de actos de corrupción,</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO. Protección psicológica de los reportantes/denunciante de Actos de Corrupción. La Secretaría Técnica del SUPRAC deberá recibir y tramitar, con carácter prioritario, las solicitudes de atención psicológica de calidad presentadas por los reportantes o denunciantes de actos de corrupción,</p>		<p>ARTÍCULO NUEVO. Protección psicológica de los reportantes/denunciante de Actos de Corrupción. La Secretaría Técnica del SUPRAC deberá recibir y tramitar, con carácter prioritario, las solicitudes de atención psicológica de calidad presentadas por los reportantes o denunciantes de actos de corrupción,</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO. Protección psicológica de los reportantes/denunciante de Actos de Corrupción. La Secretaría Técnica del SUPRAC deberá recibir y tramitar, con carácter prioritario, las solicitudes de atención psicológica de calidad presentadas por los reportantes o denunciantes de actos de corrupción,</p>	

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>para él o su núcleo familiar.</p> <p>Dichas solicitudes se gestionarán en coordinación con el Ministerio de Salud, o la entidad que cumpla con sus funciones, quien será responsable de establecer una ruta de atención adecuada, asegurando en todo momento el anonimato de los solicitantes.</p>	<p>para él o su núcleo familiar.</p> <p>Dichas solicitudes se gestionarán en coordinación con el Ministerio de Salud, o la entidad que cumpla con sus funciones, quien será responsable de establecer una ruta de atención adecuada, asegurando en todo momento el anonimato de los solicitantes.</p> <p>ARTICULO 13. Protección psicológica de los reportantes/denunciante de Actos de Corrupción. El Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con la Secretaría Técnica del SUPRAC, deberá incluir en sus protocolos y guías de actuación medidas específicas para la atención psicológica prioritaria e integral de los reportantes o denunciantes de actos de corrupción y su núcleo familiar. Estas medidas deberán contemplar acciones para mitigar el riesgo psicosocial derivado del ejercicio de denuncia, garantizando en todo momento el anonimato de los solicitantes.</p> <p>Parágrafo. En un plazo máximo de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio de Salud y Protección Social deberá adoptar un protocolo para la atención del riesgo psicosocial de los reportantes o denunciantes de actos de corrupción.</p>	<p>Ministerio de Salud y Protección Social incorpore de manera sistemática y actualizada la atención psicológica a reportantes o denunciantes de actos de corrupción dentro de sus protocolos. Esto permite garantizar un abordaje integral del riesgo psicosocial y asegurar el anonimato de los solicitantes, reconociendo que las represalias por denunciar actos de corrupción pueden generar afectaciones emocionales y familiares que requieren atención especializada y oportuna.</p>
<p>ARTICULO 14. Medidas cautelares de protección laboral. El Ministerio del Trabajo, a través de sus inspectores de trabajo y de acuerdo con el marco legal de sus competencias en materia laboral, brindará medidas cautelares de protección a los reportantes/denunciantes cuando acrediten sumariamente ser objeto de las conductas contempladas en el artículo 2° y en el artículo 7 de la Ley 1010 de 2006</p>	<p>ARTICULO 14. Medidas cautelares de protección laboral. El Ministerio del Trabajo, a través de sus inspectores de trabajo y de acuerdo con el marco legal de sus competencias en materia laboral, brindará medidas cautelares de protección a los reportantes/denunciantes cuando acrediten sumariamente ser objeto de de retaliación por medio de acciones como lo son los actos de acoso o</p>	<p>Se realizan ajustes de redacción y alcance, con la finalidad de unificar los criterios utilizados respecto de las medidas laborales.</p>

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>por causa o con ocasión a la denuncia o reporte presentado, así como de cualquier acto injusto o de retaliación encaminado a la desmejora de las condiciones laborales del reportante/denunciante derivados de la decisión de denunciar, que se presenten con posterioridad y como consecuencia del reporte o denuncia de un presunto acto de corrupción.</p> <p>Las medidas cautelares en favor de los reportantes/denunciantes serán las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución del denunciante/reportante de presuntos hechos y/o actos de corrupción cuando se acredite de manera sumaria ser objeto de las conductas constitutivas de acoso laboral, así como de cualquier acto injusto o de retaliación encaminado a la desmejora de las condiciones laborales de reportante/denunciante derivados de la decisión de denunciar, que se presenten con posterioridad y como consecuencia del reporte o denuncia de un presunto acto de corrupción, carecerá de todo efecto jurídico cuando se profieran dentro de los seis (6) meses siguientes a la denuncia/reporte, siempre y cuando la autoridad competente verifique la ocurrencia de las acciones de retaliación puestas en su conocimiento. 2. Traslado de dependencia administrativa dentro de la entidad o empresa. 3. Traslado de lugar de trabajo, sede o ciudad, en condiciones laborales equivalentes o mejores. 	<p>actos injustificados o cualquier otra actuación de las conductas contempladas en el artículo 2° y en el artículo 7 de la Ley 1010 de 2006 por causa o con ocasión a la denuncia o reporte presentado, así como de cualquier acto injusto o de retaliación encaminada a la desmejora de las condiciones laborales del reportante/denunciante derivados de la decisión de denunciar, que se presenten con posterioridad y como consecuencia del reporte o denuncia de un presunto acto de corrupción.</p> <p>Las medidas cautelares en favor de los reportantes/denunciantes serán las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución del denunciante/reportante de presuntos hechos y/o actos de corrupción cuando se acredite de manera sumaria ser objeto de las conductas constitutivas de acoso laboral, así como de cualquier acto injusto o de retaliación encaminado a la desmejora de las condiciones laborales de reportante/denunciante derivados de la decisión de denunciar, que se presenten con posterioridad y como consecuencia del reporte o denuncia de un presunto acto de corrupción, carecerá de todo efecto jurídico cuando se profieran dentro de los seis (6) meses siguientes a la denuncia/reporte, siempre y cuando la autoridad competente verifique la ocurrencia de las acciones de retaliación puestas en su conocimiento. 2. Traslado de dependencia administrativa dentro de la entidad o empresa. 3. Traslado de lugar de trabajo, sede o ciudad, en condiciones laborales equivalentes o mejores. 	<p>1. La terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución del denunciante/reportante de presuntos hechos y/o actos de corrupción cuando se acredite de manera sumaria ser objeto de las conductas constitutivas de acoso laboral, así como de cualquier acto injusto o de retaliación encaminado a la desmejora de las condiciones laborales de reportante/denunciante derivados de la decisión de denunciar, que se presenten con posterioridad y como consecuencia del reporte o denuncia de un presunto acto de corrupción, carecerá de todo efecto jurídico cuando se profieran dentro de los seis (6) meses siguientes a la denuncia/reporte, siempre y cuando la autoridad competente verifique la ocurrencia de las acciones de retaliación puestas en su conocimiento.</p>

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>4. Traslado del trabajador reportante/denunciante a la modalidad de teletrabajo. La determinación de la clase de teletrabajo se hará de común acuerdo con el reportante/denunciante teniendo en cuenta su situación particular y las necesidades de las actividades laborales por este desempeñadas.</p> <p>5. Cualquier otra necesaria para garantizar los Derechos Laborales de los reportantes/denunciantes.</p> <p>El Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes emitirá un concepto previo vinculante al Ministerio del Trabajo, otorgará, mediante acto administrativo debidamente motivado, las Medidas de Protección Laboral a favor del reportante/denunciante, indicando cuáles son, su pertinencia, necesidad y por cuánto tiempo se otorgan, de acuerdo con el estudio de cada caso. La respuesta deberá otorgarse, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 29 de la presente Ley.</p> <p>La adopción de medidas de protección laboral podrá ser aceptada o rechazada por el denunciante/reportante.</p> <p>Parágrafo 1°. La garantía contemplada en el numeral 1 del presente artículo, tendrá una duración de seis (6) meses.</p> <p>Parágrafo 2°. La protección que sea otorgada en el ejercicio del Programa deberá sujetarse a un periodo mínimo de tres (3) meses, a excepción de la contemplada en el numeral 1, la cual será objeto de revisión de los hechos que la originaron una vez al mes; lo anterior para verificar si persiste la situación de riesgo que motivó la medida de protección.</p>	<p>4. Traslado del trabajador reportante/denunciante a la modalidad de teletrabajo. La determinación de la clase de teletrabajo se hará de común acuerdo con el reportante/denunciante teniendo en cuenta su situación particular y las necesidades de las actividades laborales por este desempeñadas.</p> <p>5. Cualquier otra necesaria para garantizar los Derechos Laborales de los reportantes/denunciantes.</p> <p>El Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes emitirá un concepto previo vinculante al Ministerio del Trabajo, quien otorgará, mediante acto administrativo debidamente motivado, las Medidas de Protección Laboral a favor del reportante/denunciante, indicando cuáles son, su pertinencia, necesidad y por cuánto tiempo se otorgan, de acuerdo con el estudio de cada caso. La respuesta deberá otorgarse, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 29 24 de la presente Ley.</p> <p>La adopción de medidas de protección laboral podrá ser aceptada o rechazada por el reportante/denunciante denunciante/reportante.</p> <p>Parágrafo 1°. La garantía contemplada en el numeral 1 del presente artículo, tendrá una duración de seis (6) meses.</p> <p>Parágrafo 2°. La protección que sea otorgada en el ejercicio del Programa deberá sujetarse a un periodo mínimo de tres (3) meses, a excepción de la contemplada en el numeral 1, la cual será objeto de revisión de los hechos que la originaron una vez al mes; lo anterior para verificar si persiste la situación de riesgo que motivó la medida de protección.</p>	<p>Se brindará a los reportantes/denunciantes asesoría y acompañamiento jurídico especializada por parte de defensores de la Defensoría del Pueblo respecto de la aplicación de la indemnidad y las medidas retaliatorias de acoso judicial instauradas en su contra.</p>

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>En caso de que ya no sea necesaria la medida de protección, se levantará mediante acto administrativo motivado, proferido por la autoridad competente. El periodo otorgado será modificable y renovable dentro del marco y objetivos de la presente ley.</p> <p>Parágrafo 3°. Indemnidad. Se garantizará al reportante/denunciante, mantenerse indemne de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena, perjuicio o cualquier reclamación judicial o extracontractual con indemnización de perjuicios. Lo anterior, deberá aplicarse tanto a los casos en los que el denunciante revele el contenido de documentos a los que tenga acceso lícitamente, como a aquellos en los que obtenga copias o los retire de los locales de la organización de la cual es trabajador, desconociendo cláusulas contractuales o de otro tipo que estipulen que los documentos son propiedad de la organización.</p> <p>Cuando el denunciante haya obtenido la información o documentos mediante la comisión de un delito, como la intromisión física o informática, la responsabilidad penal ha de seguir rigiéndose por el régimen ordinario aplicable.</p> <p>Se brindará a los reportantes/denunciantes asesoría y acompañamiento jurídico especializada por parte de defensores de la Defensoría del Pueblo respecto de la aplicación de la indemnidad y las medidas retaliatorias de acoso judicial instauradas en su contra.</p>	<p>En caso de que ya no sea necesaria la medida de protección, se levantará mediante acto administrativo motivado, proferido por la autoridad competente. El periodo otorgado será modificable y renovable dentro del marco y objetivos de la presente ley.</p> <p>Parágrafo 3°. Indemnidad. Se garantizará al reportante/denunciante, mantenerse indemne de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena, perjuicio o cualquier reclamación judicial o extracontractual con indemnización de perjuicios. Lo anterior, deberá aplicarse tanto a los casos en los que el denunciante revele el contenido de documentos a los que tenga acceso lícitamente, como a aquellos en los que obtenga copias o los retire de los locales de la organización de la cual es trabajador, desconociendo cláusulas contractuales o de otro tipo que estipulen que los documentos son propiedad de la organización.</p> <p>Cuando el denunciante haya obtenido la información o documentos mediante la comisión de un delito, como la intromisión física o informática, la responsabilidad penal ha de seguir rigiéndose por el régimen ordinario aplicable. Esta garantía no aplicará cuando la información se haya adquirido mediante la comisión de delitos, caso en el cual se aplicará el régimen penal ordinario.</p> <p>Se brindará a los Reportantes/Denunciantes asesoría y acompañamiento jurídico especializada por parte de defensores de la Defensoría del Pueblo respecto de la aplicación de la indemnidad y las medidas retaliatorias de acoso judicial instauradas en su contra. Se brindará a los reportantes/denunciantes asesoría y acompañamiento jurídico</p>	<p>Se brindará a los reportantes/denunciantes asesoría y acompañamiento jurídica especializada por parte de defensores de la Defensoría del Pueblo respecto de la aplicación de la indemnidad y las medidas retaliatorias de acoso judicial instauradas en su contra.</p>

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
	especializado por parte de defensores de la Defensoría del Pueblo respecto de la aplicación de la indemnidad.	
ARTÍCULO 15. Requisitos mínimos para la protección laboral. Para la aplicación de las medidas de protección laboral descritas en el artículo anterior, el Ministerio del Trabajo deberá acreditar de manera sumaria la existencia de pruebas, evidencias o indicios que establezcan que el reportante/denunciante está siendo víctima de las conductas descritas en el artículo 2°, el artículo 7° de la Ley 1010 de 2006 y el artículo 43 de la Ley 1474 de 2011 y cualquier otro de los actos de retaliación contemplados en la presente Ley.	ARTÍCULO 15. Requisitos mínimos para la protección laboral. Para la aplicación de las medidas de protección laboral descritas en el artículo anterior, el Ministerio del Trabajo deberá acreditar de manera sumaria la existencia de pruebas, evidencias o indicios que establezcan que el reportante/denunciante está siendo víctima de las conductas descritas en el artículo 2°, el artículo 7° de la Ley 1010 de 2006 y el artículo 43 de la Ley 1474 de 2011 y cualquier otro de los actos de retaliación contemplados en la presente Ley.	Se ajusta la numeración del artículo y los subsiguientes. Asimismo, se elimina el término "indicio", dado que, en términos jurídicos, constituye un medio probatorio con un valor inferior al de las pruebas directas, lo cual podría generar ambigüedad o una interpretación errónea sobre los estándares probatorios requeridos.
ARTÍCULO 16°. ELIMINADO.	ELIMINADO.	Se ajustará el articulado subsiguiente en numeración.
ARTÍCULO 17. Medidas de protección a personas naturales sin vínculo laboral. Las personas naturales sin relación laboral pero con relación contractual y con los demás supuestos descritos en el artículo 2° de esta Ley, también se sujetarán a medidas de protección para salvaguardar sus derechos. Las medidas se evaluarán y aplicarán según el caso, previo análisis de la autoridad competente. Parágrafo 1°. El Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General de la Nación conocerán de estas solicitudes de protección y evaluarán su procedencia, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y si: (i) persiste la necesidad institucional de continuar con esos servicios y (ii) que el contratista haya ejecutado cabalmente sus obligaciones.	ARTÍCULO 17. Medidas de protección a personas naturales sin vínculo laboral. Las personas naturales sin relación laboral pero con relación contractual, y con los demás supuestos descritos en el artículo 2° de esta Ley, también se sujetarán a medidas de protección para salvaguardar sus derechos. Las medidas se evaluarán y aplicarán según el caso, previo análisis de la autoridad competente. Parágrafo 1°. El Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General de la Nación, según sus competencias , conocerán de estas solicitudes de protección y evaluarán su procedencia, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y si: (i) persiste la necesidad institucional de continuar con esos servicios y (ii) que el contratista haya ejecutado cabalmente sus obligaciones.	Se ajusta la redacción para dar más claridad al articulado y se reenumera el artículo.
Lo anterior, para verificar la procedencia de la terminación, modificación o	Lo anterior, para verificar la procedencia de la terminación, modificación o	

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
interpretación unilateral del contrato de aquellas personas denunciadas de presuntos hechos de corrupción, la cual solo procederá previo pronunciamiento del referido Ministerio. Esto, teniendo en cuenta la especial situación de riesgo y de las represalias de las que pueden ser víctimas los reportantes/denunciados de presuntos actos de corrupción con vínculos contractuales diferentes al laboral, tales como (i) retraso o fraccionamiento del pago de honorarios, (ii) imposibilidad de ejecución contractual por causas imputables al contratante, (iii) terminación, modificación o interpretación unilateral del contrato, con excepción de la aplicación de las cláusulas exorbitantes (iv) inclusión en listas negras sobre la base de un acuerdo sectorial, informal o formal, que pueda implicar que en el futuro la persona no pueda vincularse en determinado sector, y (v) cualquier otro trato injustificado.	interpretación unilateral del contrato de aquellas personas denunciadas de presuntos hechos de corrupción, la cual solo procederá previo pronunciamiento del referido Ministerio. Esto, teniendo en cuenta la especial situación de riesgo y de las represalias de las que pueden ser víctimas los reportantes/denunciados de presuntos actos de corrupción con vínculos contractuales diferentes al laboral, tales como (i) retraso o fraccionamiento del pago de honorarios; (ii) imposibilidad de ejecución contractual por causas imputables al contratante; (iii) terminación, modificación o interpretación unilateral del contrato, con excepción de la aplicación de las cláusulas exorbitantes; (iv) inclusión en listas negras sobre la base de un acuerdo sectorial, informal o formal, que pueda implicar que en el futuro la persona no pueda vincularse en determinado sector; y (v) cualquier otro trato injustificado.	
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de Función Pública reglamentarán lo dispuesto en el presente artículo, en un término no mayor a seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley.	Parágrafo 2°. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de Función Pública reglamentarán lo dispuesto en el presente artículo, en un término no mayor a seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley.	
ARTÍCULO 18. De las sanciones por retaliación contra reportantes/denunciados de actos de corrupción. Se considerará retaliación cualquier conducta que, como consecuencia de un reporte o denuncia de presuntos actos de corrupción, implique represalias injustificadas contra el reportante/denunciante por parte de superiores, pares, subalternos u otras personas dentro de la organización a la que pertenece. En caso de que se verifique la existencia de retaliación, se aplicarán las sanciones contempladas en la presente ley, así	ARTÍCULO 18-17. De las sanciones por retaliación contra reportantes/denunciados de actos de corrupción. Se considerará retaliación cualquier conducta que, como consecuencia de un reporte o denuncia de presuntos actos de corrupción, implique represalias injustificadas contra el reportante/denunciante por parte de superiores, pares, subalternos u otras personas dentro de la organización a la que pertenece. En caso de que se verifique la existencia de retaliación, se aplicarán las sanciones contempladas en la presente ley, así	Se ajusta la numeración del artículo y se suprime la expresión repetida. Así mismo, se realizan ajustes de redacción del artículo para aclarar el alcance del mismo.

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
como las previstas en la Ley 1010 de 2006 y demás normas aplicables. El Juez Laboral ante el incumplimiento de las medidas cautelares por parte del empleador o contratante deberá adelantar un procedimiento sancionatorio y establecer las sanciones conforme a la legislación vigente. Lo anterior, sin perjuicio de la sanción disciplinaria y/o penal a que haya lugar. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias o penales a que haya lugar conforme a la normativa vigente. Parágrafo 1°. Para el caso de los contratistas persona natural, de los cuales no se predica una relación laboral, se prohíbe también cualquier acto de represalias que tenga como fuente misma el hecho de haber sido denunciante de actos de corrupción con respecto a la empresa o entidad a la cual presta el servicio. Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo anterior, en el desarrollo de esta Ley, cuando se determine que los hechos denunciados generen indicios que ameriten situaciones de sanción, los funcionarios deben hacer el traslado según las competencias en materia penal, disciplinaria, fiscal y administrativa. Parágrafo 3°. Para la resolución de las disputas por reparación y compensación económica del denunciante de actos de corrupción por los daños generados por el acto de retaliación, se priorizará el uso de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. El denunciante/reportante tendrá el derecho de optar por la reparación y compensación económica mediante el Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos. Las denuncias o reportes por los casos	como las previstas en la Ley 1010 de 2006 y demás normas aplicables. El Juez Laboral ante el incumplimiento de las medidas cautelares por parte del empleador o contratante deberá adelantar un procedimiento sancionatorio y establecer las sanciones conforme a la legislación vigente. Lo anterior, sin perjuicio de la sanción disciplinaria y/o penal a que haya lugar. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias o penales a que haya lugar conforme a la normativa vigente. Parágrafo 1°. Para el caso de los contratistas que tienen calidad de persona natural, de los cuales no se predica una relación laboral, se prohíbe también cualquier acto de represalias que tenga como fuente misma el hecho de haber sido denunciante de actos de corrupción con respecto a la empresa o entidad a la cual presta el servicio. Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo anterior, en el desarrollo de esta Ley, cuando se determine que los hechos denunciados generen indicios que ameriten situaciones de sanción, los funcionarios deben hacer el traslado según las competencias en materia penal, disciplinaria, fiscal y administrativa. Parágrafo 3°. Para la resolución de las disputas por reparación y compensación económica del denunciante de actos de corrupción por los daños generados por el acto de retaliación, se priorizará el uso de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. El reportante/denunciante tendrá el derecho de optar por la reparación y compensación económica mediante el Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos.	

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
de retaliación contemplados en la presente ley no requerirán surtir trámite previo ante los comités de empresa. Los empleadores deberán adoptar en sus políticas internas los requerimientos de la presente ley, dentro de los tres (3) meses siguientes a su promulgación y su incumplimiento será sancionado por el Ministerio del Trabajo.	Las denuncias o reportes por los casos de retaliación contemplados en la presente ley no requerirán surtir trámite previo ante los comités de empresa. Los empleadores deberán adoptar en sus políticas internas los requerimientos de la presente ley, dentro de los tres (3) meses siguientes a su promulgación, y su incumplimiento será sancionado por el Ministerio del Trabajo.	
ARTÍCULO 19. Tratamiento sancionatorio de la retaliación ante denuncias o reportes de corrupción. Las conductas de retaliación y de acoso laboral contra el trabajador motivadas en la denuncia o reporte de hechos y/o actos de corrupción, cuando estuviere debidamente acreditado, se sancionará así: 1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, cuando su autor sea un servidor público. 2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador. En tal caso procede la indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. 3. Con sanción de multa entre diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la persona realice la conducta, diferente del empleador. 4. Con sanción de multa entre cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el	ARTÍCULO 18-18. Tratamiento sancionatorio de la retaliación ante denuncias o reportes de corrupción. Las conductas de retaliación y de acoso laboral contra el trabajador motivadas en la denuncia o reporte de hechos y/o actos de corrupción, cuando estuviere debidamente acreditado, se sancionará así: Las conductas de retaliación contra un trabajador, motivadas por la presentación de una denuncia o reporte de presuntos actos de corrupción, serán sancionadas cuando se encuentren debidamente acreditadas así: 1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, cuando su autor sea un servidor público. 2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador. En tal caso procede la indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. 3. Con sanción de multa entre diez (10) a cinuenta cien (40050) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la persona que realice la conducta, diferente del empleador. 4. Con sanción de multa entre cien (100) a doscientos cincuenta (600250) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el empleador que realice la	Se ajusta el parágrafo tercero, para que se aclare que hace referencia únicamente a aquellos funcionarios elegidos por voto popular. Además, se ajusta la numeración del artículo. Las sanciones deben guardar un equilibrio justo entre la gravedad de la conducta y la intensidad de la pena impuesta. Un margen sancionatorio excesivamente amplio (como 100 a 500 SMLMV) puede convertirse en una carga desproporcionada, especialmente en contextos donde la conducta reprochada no implica daño directo o efectivo. Es por eso que se ajusta a la mitad de las aprobadas en Cámara las multas del presente artículo.

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES	TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>empleador que realice la conducta o tolere el actuar de otros trabajadores.</p> <p>5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador, particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo.</p> <p>6. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, según la gravedad de los hechos, cuando la conducta retaliatoria sea ejercida por un compañero de trabajo o un subalterno.</p> <p>Para imponer las sanciones previstas en este artículo, se tomará en cuenta los siguientes criterios de graduación de la sanción:</p> <p>CRITERIOS ATENUANTES:</p> <p>a. Procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuir o anular sus consecuencias.</p> <p>b. Reparar, discrecionalmente, el daño ocasionado, aunque no sea en forma total.</p> <p>CRITERIOS AGRAVANTES:</p> <p>a. Reiteración de la conducta.</p> <p>b. Cuando exista concurrencia de causales.</p> <p>c. Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria.</p> <p>d. El ocultamiento o el aprovechamiento de condiciones de tiempo, modo y lugar, que dificulten la defensa del ofendido, o la identificación del autor y/o participe.</p> <p>e. Aumentar deliberada e inhumanamente el daño psíquico y biológico causado al sujeto pasivo.</p> <p>f. La posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, por su cargo, rango</p>	<p>conducta o tolere el actuar de otros trabajadores.</p> <p>5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador, particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo.</p> <p>6. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, según la gravedad de los hechos, cuando la conducta retaliatoria sea ejercida por un compañero de trabajo o un subalterno.</p> <p>Para imponer las sanciones previstas en este artículo, se tomará en cuenta los siguientes criterios de graduación de la sanción:</p> <p>CRITERIOS ATENUANTES:</p> <p>a. Procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuir o anular sus consecuencias.</p> <p>b. Reparar, discrecionalmente, el daño ocasionado, aunque no sea en forma total.</p> <p>CRITERIOS AGRAVANTES:</p> <p>a. Reiteración de la conducta.</p> <p>b. Cuando exista concurrencia de causales.</p> <p>c. Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria.</p> <p>d. El ocultamiento o el aprovechamiento de condiciones de tiempo, modo y lugar, que dificulten la defensa del ofendido, o la identificación del autor y/o participe.</p> <p>e. Aumentar deliberada e inhumanamente el daño psíquico y biológico causado al sujeto pasivo.</p> <p>f. La posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, por su cargo, rango</p>		<p>económico, posición en el mercado, ilustración, poder, oficio o dignidad.</p> <p>g. Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable.</p> <p>h. Cuando la conducta desplegada por el sujeto activo causa un daño en la salud física o psíquica al sujeto pasivo.</p> <p>i. La gravedad del acto y/o hecho de corrupción y el grado de vinculación de la persona con el acto y/o hecho de corrupción.</p> <p>j. La importancia de la afectación ocasionada al trabajador.</p> <p>Parágrafo 1°. Los dineros provenientes de las multas impuestas se destinarán a financiar al Fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción y la reparación de los afectados por actos de corrupción, de la Ley 2195 de 2022.</p> <p>Parágrafo 2°. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por conductas constitutivas de acoso laboral, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, trabajador o contratista, siempre y cuando existan serios indicios de actitudes retaliatorias en contra de la posible víctima.</p> <p>Parágrafo 3°. La suspensión provisional a la entidad pública de elección popular deberá realizarse por el juez competente.</p> <p>ARTÍCULO 20. Competencia y procedimiento sancionatorio de la retaliación ante denuncias y reportes de corrupción. Corresponde a los inspectores de trabajo con competencia en el lugar de los hechos adoptar las medidas sancionatorias que prevé el artículo 19 de la presente ley, cuando las víctimas sean trabajadores o empleados</p>	<p>económico, posición en el mercado, ilustración, poder, oficio o dignidad.</p> <p>g. Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable.</p> <p>h. Cuando la conducta desplegada por el sujeto activo causa un daño en la salud física o psíquica al sujeto pasivo.</p> <p>i. La gravedad del acto y/o hecho de corrupción y el grado de vinculación de la persona con el acto y/o hecho de corrupción.</p> <p>j. La importancia de la afectación ocasionada al trabajador.</p> <p>Parágrafo 1°. Los dineros provenientes de las multas impuestas se destinarán a financiar al Fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción y la reparación de los afectados por actos de corrupción, de la Ley 2195 de 2022.</p> <p>Parágrafo 2°. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por conductas constitutivas de acoso laboral, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, trabajador o contratista, siempre y cuando existan serios indicios de actitudes retaliatorias en contra de la posible víctima.</p> <p>Parágrafo 3°. La suspensión provisional de servidores públicos de a la entidad pública de elección popular deberá realizarse por el juez competente.</p> <p>ARTÍCULO 20-19. Competencia y procedimiento sancionatorio de la retaliación ante denuncias y reportes de corrupción. Corresponde a los jueces laborales inspectores de trabajo con competencia en el lugar de los hechos adoptar las medidas sancionatorias que prevé el artículo 49-18 de la presente ley, cuando las víctimas</p>	<p>Se ajusta el articulado, atendiendo a la necesidad de que las decisiones del procedimiento sancionatorio recaigan en un juez laboral. Por ende, se eliminan las expresiones</p>
<p>particulares de acuerdo a sus funciones de inspección, vigilancia y control previstas en la Ley 1610 de 2013.</p> <p>En estos eventos, el inspector de trabajo citará a audiencia, la cual tendrá lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la solicitud o queja. De la iniciación del procedimiento se notificará personalmente al acusado de las conductas retaliatorias y al empleador que lo haya tolerado, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud o queja. Las pruebas se practicarán antes de la audiencia o dentro de ella. La decisión se proferirá al finalizar la audiencia, a la cual sólo podrán asistir las partes y los testigos o peritos. Contra la decisión que ponga fin a esta actuación procederá el recurso de apelación, que se decidirá en los treinta (30) días siguientes a su interposición. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Procesal del Trabajo.</p> <p>Cuando la víctima sea un servidor público, la competencia para conocer de la falta disciplinaria corresponde al Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, conforme a las competencias y procedimiento que señala la Ley 1952 de 2019, o aquella que la modifique o sustituya. Lo anterior sin perjuicio de las faltas penales, fiscales o administrativas a las que haya lugar.</p> <p>Parágrafo. El juez podrá comisionar al inspector del trabajo con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas. Para tal efecto, el inspector del trabajo deberá proporcionar un canal ágil de comunicación para que la posible víctima pueda reportar nuevos hechos de retaliación, en caso de darse.</p>	<p>sean trabajadores o empleados particulares de acuerdo a sus funciones de inspección, vigilancia y control previstas en la Ley 1610 de 2013.</p> <p>En estos eventos, el juez laboral el inspector de trabajo citará a audiencia, la cual tendrá lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la solicitud o queja. De la iniciación del procedimiento se notificará personalmente al acusado de las conductas retaliatorias y al empleador que lo haya tolerado, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud o queja. Las pruebas se practicarán antes de la audiencia o dentro de ella. La decisión se proferirá al finalizar la audiencia, a la cual sólo podrán asistir las partes y los testigos o peritos. Contra la decisión que ponga fin a esta actuación procederá el recurso de apelación, que se decidirá en los treinta (30) días siguientes a su interposición. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Procesal del Trabajo.</p> <p>Cuando la víctima sea un servidor público, la competencia para conocer de la falta disciplinaria corresponde al Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, conforme a las competencias y procedimiento que señala la Ley 1952 de 2019, o aquella que la modifique o sustituya. Lo anterior sin perjuicio de las faltas penales, fiscales o administrativas a las que haya lugar.</p> <p>Parágrafo. El juez podrá comisionar al inspector del trabajo para verificar el cumplimiento de las medidas cautelares, quien deberá habilitar un canal ágil de comunicación para que la presunta víctima informe posibles actos de retaliación en el fin de verificar el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas. Para tal efecto, el</p>	<p>relacionadas a la competencia de los inspectores de trabajo para decidir sobre esta medida.</p> <p>se ajusta la redacción del parágrafo para facilitar su comprensión.</p> <p>Finalmente, se ajusta la numeración del artículo.</p>	<p>ARTÍCULO 21. De la Protección a la vida, integridad y seguridad personal. Las entidades de orden nacional y territorial que tengan dentro de su competencia la ejecución de programas de protección a personas naturales en situación de riesgo a la vida, integridad y seguridad personal, atenderán con celeridad y debida diligencia los casos trasladados por la Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC).</p> <p>Los Reportantes/Denunciantes de actos y/o hechos de corrupción que presuntamente se encuentren en situación de riesgo serán incluidos en el Programa de Protección de la Unidad Nacional de Protección, siguiendo la reglamentación para la protección de personas en situación de riesgo. Por ende, tendrán protección especial y tratamiento prioritario para acceder a mecanismos de protección necesarios para salvaguardar su seguridad e integridad.</p> <p>La Unidad Nacional de Protección, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, adoptará y socializará una ruta de atención especial para las personas que realicen denuncias o reportes de presuntos hechos y/o actos de corrupción, y definirá el plazo máximo para el traslado de los casos al programa de protección de testigos de la Fiscalía que permita la revisión y respuesta ágil y oportuna de las situaciones de riesgo de las personas objeto de la presente ley.</p> <p>Si el reportante/denunciante adquiere la calidad de testigo por su participación en un proceso penal derivado de su reporte,</p>	<p>inspector del trabajo deberá proporcionar un canal ágil de comunicación para que la posible víctima pueda reportar nuevos hechos de retaliación, en caso de darse.</p> <p>ARTÍCULO 24-20. De la Protección a la vida, integridad y seguridad personal. Las entidades de orden nacional y territorial que tengan dentro de su competencia la ejecución de programas de protección a personas naturales en situación de riesgo a la vida, integridad y seguridad personal, atenderán con celeridad y debida diligencia los casos trasladados por la Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC).</p> <p>Los Reportantes/Denunciantes de actos y/o hechos de corrupción que presuntamente se encuentren en situación de riesgo serán incluidos en el Programa de Protección de la Unidad Nacional de Protección, siguiendo la reglamentación para la protección de personas en situación de riesgo. Por ende, tendrán protección especial y tratamiento prioritario para acceder a mecanismos de protección necesarios para salvaguardar su seguridad e integridad.</p> <p>La Unidad Nacional de Protección, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, adoptará y socializará una ruta de atención especial para las personas que realicen denuncias o reportes de presuntos hechos y/o actos de corrupción, y definirá el plazo máximo para el traslado de los casos al programa de protección de testigos de la Fiscalía que permita la revisión y respuesta ágil y oportuna de las situaciones de riesgo de las personas objeto de la presente ley.</p> <p>Si el reportante/denunciante adquiere la calidad de testigo por su participación en un proceso penal derivado de su reporte,</p>	<p>Se realizan ajustes de redacción.</p>

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>la protección será competencia de la Fiscalía General de la Nación de acuerdo con el artículo 67 de la Ley 418 de 1997 y las normas que la modifiquen, entidad que aplicará su régimen legal para tal fin. La Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) continuará realizando el seguimiento y monitoreo del estado la situación de riesgo del reportante/denunciante para asegurar que cuente con las garantías necesarias para el ejercicio de sus derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad personal, así como el derecho al trabajo, y las garantías laborales, económicas y el libre desarrollo de la personalidad.</p> <p>Parágrafo. Para la realización del traslado de competencia al Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación del que trata el cuarto inciso del presente artículo, la entidad responsable tendrá 5 días hábiles para dicho trámite.</p>	<p>la protección será competencia de la Fiscalía General de la Nación de acuerdo con el artículo 67 de la Ley 418 de 1997 y las normas que la modifiquen, entidad que aplicará su régimen legal para tal fin. La Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) continuará realizando el seguimiento y monitoreo del estado la situación de riesgo del reportante/denunciante para asegurar que cuente con las garantías necesarias para el ejercicio de sus derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad personal, así como el derecho al trabajo, y las garantías laborales, económicas y el libre desarrollo de la personalidad.</p> <p>Parágrafo. Para la realización del traslado de competencia al Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación del que trata el cuarto inciso del presente artículo, la entidad responsable tendrá cinco (5) días hábiles para dicho trámite.</p>	<p>Se eliminó para evitar redundancias y fragmentación normativa, ya que su contenido fue plenamente integrado en el nuevo Artículo 25 – Priorización de Medidas de Protección a Grupos de Protección Especial Constitucional.</p> <p>En específico, se mantuvo el enfoque diferencial, así como el deber de evaluar la condición social y</p>
<p>ARTÍCULO 22. Priorización de las Medidas de Protección con enfoque diferencial y de género. En los procesos de calificación del riesgo, y de determinación de las medidas a aplicar dentro de todas las modalidades que contempla esta ley, las autoridades competentes deben estudiar si el denunciante pertenece a grupos de especial protección constitucional como mujeres, población LGBTIQ+, comunidades étnicas, población en condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado, líderes y lideresas sociales como defensores de derechos humanos, campesinado, entre otros. Así como su condición social y económica. La oferta de medidas deberá estar</p>	<p>ELIMINADO.</p>	<p>Se eliminó para evitar redundancias y fragmentación normativa, ya que su contenido fue plenamente integrado en el nuevo Artículo 25 – Priorización de Medidas de Protección a Grupos de Protección Especial Constitucional.</p> <p>En específico, se mantuvo el enfoque diferencial, así como el deber de evaluar la condición social y</p>
<p>a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 para la protección de datos personales.</p> <p>CAPÍTULO III</p> <p>PROTECCIÓN ESPECIAL A PERIODISTAS, LIDERES Y LIDERESAS SOCIALES QUE DENUNCIEN O REPORTEN PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN.</p>	<p>ELIMINADO.</p>	<p>El nuevo Artículo 22 – Priorización de Medidas de Protección a Grupos de Protección Especial Constitucional. unifica y sistematiza los criterios de priorización para la adopción de medidas de protección dirigidas a reportantes y denunciantes de actos de corrupción que pertenezcan a grupos de especial protección constitucional. Esta disposición reemplaza y consolida los contenidos originalmente distribuidos en los artículos 22, 24, 25 y 26 del proyecto, integrando sus elementos esenciales en un único marco normativo coherente, claro y funcional.</p>
<p>ARTÍCULO 24. Medidas de Protección prioritaria a periodistas que investiguen y denuncien actos y/o hechos de presunta corrupción. Las personas que el oficio del periodismo en sus diferentes modalidades, serán sujetos de especial protección en el desarrollo de sus actividades de investigación y divulgación de hechos y actos de presunta corrupción, por lo que recibirán un trato prioritario en el otorgamiento de las medidas de protección contempladas en esta Ley, previo análisis de los criterios objetivos y</p>	<p>ELIMINADO.</p>	<p>Se eliminó como disposición autónoma para consolidar los criterios de priorización en una sola norma.</p> <p>Su contenido fue incorporado en el párrafo principal del nuevo Artículo 22 – Priorización de Medidas de Protección a Grupos de Protección Especial Constitucional.</p>
<p>adecuada, y las decisiones deben hacer referencia a este análisis.</p> <p>Parágrafo 1°. Los funcionarios integrantes del Comité Rector del SUPRAC y de la Secretaría Técnica, deberán tener capacitaciones anuales obligatorias sobre la atención de la población contemplada en este artículo, y en ningún caso será motivo de exclusión o negación de las medidas de protección, el que algún denunciante/reportante no haga parte de los sectores priorizados.</p> <p>Parágrafo 2°. A ningún reportante/denunciante que no haga parte de los grupos de especial protección constitucional, o demás grupos priorizados, se le podrá excluir o negar las medidas de protección a causa de no ser perteneciente a alguno de dichos grupos.</p> <p>ARTÍCULO 23. Del reporte o denuncia anónimos. Los canales de denuncia de actos y/o hechos de corrupción deben incluir medios tecnológicos que permitan la denuncia anónima y denuncia con protección de identidad, siguiendo el procedimiento dispuesto para tal fin en el artículo 30 de la presente ley.</p> <p>Parágrafo 1°. El reporte o denuncia anónima se registrará de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 de la Ley 906 de 2004 o por la norma que lo modifique o adicione.</p> <p>En ningún evento, las entidades receptoras podrán negarse a recibir reportes o denuncias anónimas, para lo anterior, el reportante/denunciante debe suministrar evidencia o datos concretos que permitan encauzar una investigación.</p> <p>Parágrafo 2°. La información y datos personales del denunciante sólo podrá ser revelada bajo su consentimiento previo, expreso, informado y por escrito separado o por orden judicial, de acuerdo</p>	<p>económica del reportante/denunciante. Esta parte se encuentra en el primer y último enunciado del párrafo principal del nuevo artículo.</p> <p>ARTÍCULO 23—21. Del reporte o denuncia anónimos. Los canales de denuncia de actos y/o hechos de corrupción deben incluir medios tecnológicos que permitan la denuncia anónima y denuncia con protección de identidad, siguiendo el procedimiento dispuesto para tal fin en el artículo 30 22 de la presente ley.</p> <p>Parágrafo 1°. El reporte o denuncia anónima se registrará de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 de la Ley 906 de 2004 o por la norma que lo modifique o adicione.</p> <p>En ningún evento, las entidades receptoras podrán negarse a recibir reportes o denuncias anónimas, para lo anterior, el reportante/denunciante debe suministrar evidencia o datos concretos que permitan encauzar una investigación.</p> <p>Parágrafo 2°. La información y datos personales del denunciante sólo podrá ser revelada bajo su consentimiento previo, expreso, informado y por escrito</p>	<p>Se ajusta la numeración del artículo y se ajusta la redacción.</p>
<p>subjetivos descritos en el artículo 11 de la presente ley.</p> <p>La Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) dará respuesta a las peticiones de medidas de protección de emergencia a esta categoría de sujetos de especial protección, en un término prioritario de tres (3) días siguientes a la solicitud de protección.</p> <p>ARTÍCULO 25. Medidas de Protección prioritaria a líderes y lideresas sociales, y de defensoras y defensores de derechos humanos que investiguen y denuncien actos y/o hechos de presunta corrupción. Se brindará a líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo los de derechos ambientales, un tratamiento prioritario en relación con las medidas de protección contempladas en esta ley. Esto será aplicable previo análisis de los criterios objetivos y subjetivos descritos en el artículo 11 de la presente ley. Esta disposición no afectará la autoridad y competencia de la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General de la Nación en sus respectivas áreas.</p> <p>La Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) dará respuesta a las peticiones de medidas de protección de emergencia a esta categoría de sujetos de especial protección, en un término prioritario de tres (3) días calendario siguientes a la solicitud de protección.</p> <p>ARTÍCULO 26. Medidas de Protección prioritaria a profesiones u oficios relacionados con hallazgos de presuntos hechos de corrupción. Las personas naturales que, por su formación</p>	<p>ELIMINADO.</p>	<p>Se suprimió como artículo independiente para evitar duplicidad temática con otras disposiciones sobre sujetos de especial protección.</p> <p>Su contenido fue incorporado en el nuevo artículo 25 – Priorización de Medidas de Protección a Grupos de Especial Protección Constitucional. en los apartados que mencionan expresamente a líderes, lideresas, y defensores(as) de derechos humanos (incluidos los ambientales), así como en el compromiso de respuesta rápida y diferencial por parte del SUPRAC.</p>
<p>Se eliminó para agrupar todos los criterios relacionados con la priorización de medidas hacia actores técnicos y</p>	<p>ELIMINADO.</p>	<p>Se eliminó para agrupar todos los criterios relacionados con la priorización de medidas hacia actores técnicos y</p>

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES	TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>académica, profesión u oficio sea de carácter dependiente o independiente al campo de acción y que, dentro de sus actividades, giro normal de sus negocios o labores y como producto de estas encuentren hallazgos y revelen presuntos actos de corrupción, serán sujetos de protección especial de acuerdo con lo establecido en el presente artículo.</p> <p>Entre las profesiones u oficios se encuentran, pero no se limitan a, revisores fiscales, jefes de control interno, auditores, auditores forenses, auditores financieros, oficiales de transparencia, oficiales de cumplimiento, interventores de obra, supervisores de obra, peritos contables y financieros, veedores ciudadanos, entre otros.</p> <p>La Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) dará respuesta a las peticiones de medidas de protección de emergencia a esta categoría de sujetos de especial protección, en un término prioritario de tres (3) días calendario siguientes a la solicitud de protección.</p>	<p>profesionales en una única disposición.</p> <p>El nuevo Artículo 22 – Priorización de Medidas de Protección a Grupos de Especial Protección Constitucional. El artículo retoma esta protección en el tramo final del párrafo principal, donde se menciona explícitamente a revisores fiscales, auditores, interventores, supervisores, veedores ciudadanos y demás profesionales o técnicos que identifiquen hechos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.</p>	<p>Se ajusta el número del capítulo</p>	<p>electrónico, teléfono o cualquier otro medio físico o virtual, y deberá manifestar de forma expresa, clara e inequívoca la voluntad de ser beneficiario de las Medidas de Protección. La Secretaría Técnica del SUPRAC podrá determinar si el conocimiento de actos y/o hechos de corrupción amerita el estudio de medidas de protección a reportantes/denunciante por parte de las entidades competentes, por lo cual podrán contactarse con el reportante/denunciante a efectos de determinar su voluntad de acceder a las medidas contempladas en la presente Ley.</p> <p>b. Las entidades que reciban la denuncia y solicitud de protección por parte del reportante/denunciante deberán dar traslado a la Secretaría Técnica del SUPRAC de la mencionada solicitud de protección, dentro de las 72 horas siguientes a la recepción, junto con el análisis y reporte del caso, incluyendo el detalle de los riesgos específicos del denunciante. La Secretaría Técnica del SUPRAC garantizará la confidencialidad y anonimato del denunciante.</p> <p>c. En el reglamento interno del SUPRAC se deberá establecer y ofrecer los canales y métodos físicos y virtuales, para presentar denuncias y solicitudes de protección al reportante/denunciante por presuntos hechos o actos de corrupción en los que se pueda especificar de forma fácil y concreta la descripción de los hechos y las condiciones modo, tiempo y lugar de su ocurrencia. En ningún caso podrá negarse el estudio de la solicitud con fundamento en la omisión de los requisitos formales.</p> <p>d. La Secretaría técnica del SUPRAC, mediante acto administrativo motivado, dará respuesta al ciudadano sobre el resultado del trámite y las Medidas de Protección adoptadas o rechazadas, en un término de cinco (5) días calendario</p>	<p>electrónico, teléfono o cualquier otro medio físico o virtual, y deberá manifestar de forma expresa, clara e inequívoca la voluntad de ser beneficiario de las Medidas de Protección. La Secretaría Técnica del SUPRAC podrá determinar si el conocimiento de actos y/o hechos de corrupción amerita el estudio de medidas de protección a reportantes/denunciante por parte de las entidades competentes, por lo cual podrán contactarse con el reportante/denunciante a efectos de determinar su voluntad de acceder a las medidas contempladas en la presente Ley.</p> <p>b. Las entidades que reciban la denuncia y solicitud de protección por parte del reportante/denunciante deberán dar traslado a la Secretaría Técnica del SUPRAC de la mencionada solicitud de protección, dentro de las 72 horas siguientes a la recepción, junto con el análisis y reporte del caso, incluyendo el detalle de los riesgos específicos del denunciante. La Secretaría Técnica del SUPRAC garantizará la confidencialidad y anonimato del denunciante.</p> <p>c. En el reglamento interno del SUPRAC se deberá establecer y ofrecer los canales y métodos físicos y virtuales, para presentar denuncias y solicitudes de protección al reportante/denunciante por presuntos hechos o actos de corrupción en los que se pueda especificar de forma fácil y concreta la descripción de los hechos y las condiciones modo, tiempo y lugar de su ocurrencia. En ningún caso podrá negarse el estudio de la solicitud con fundamento en la omisión de los requisitos formales.</p> <p>d. La Secretaría técnica del SUPRAC, mediante acto administrativo motivado, dará respuesta al ciudadano sobre el resultado del trámite y las Medidas de Protección adoptadas o rechazadas, en un término de cinco (5) días calendario</p>	<p>Se hace el ajuste para dar armonía con el resto del articulado y evitar confusiones en el operador jurídico.</p> <p>Finalmente, el artículo se reenumera.</p>
<p>CAPÍTULO IV DEL PROCEDIMIENTO.</p> <p>ARTÍCULO 27. Procedimiento para la solicitud de protección. Las solicitudes de protección se presentarán de acuerdo con los siguientes criterios:</p> <p>a. Se presentarán de manera conjunta con el reporte o denuncia ante los canales dispuestos en el artículo 3° de la presente ley, o de forma posterior ante la Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciante de Actos de Corrupción (SUPRAC). La solicitud de protección podrá presentarse de forma verbal o por escrito, por correo</p>	<p>CAPÍTULO IV DEL PROCEDIMIENTO.</p> <p>ARTÍCULO 27. Procedimiento para la solicitud de protección. Las solicitudes de protección se presentarán de acuerdo con los siguientes criterios:</p> <p>a. Se presentarán de manera conjunta con el reporte o denuncia ante los canales dispuestos en el artículo 3° de la presente ley, o de forma posterior ante la Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciante de Actos de Corrupción (SUPRAC). La solicitud de protección podrá presentarse de forma verbal o por escrito, por correo</p>	<p>Se modifica la numeración del artículo y se ajusta la redacción del párrafo 4° con el fin de mejorar su claridad y facilitar su comprensión.</p>	<p>contados a partir de la recepción de la solicitud de protección, el cual es susceptible del recurso de reposición.</p> <p>Parágrafo 1°. Lo anterior, sin perjuicio de los demás canales establecidos por las autoridades competentes para radicación de denuncias de presuntos hechos de corrupción.</p> <p>Parágrafo 2°. El funcionario receptor de la denuncia o reporte deberá informar al denunciante de sus derechos, los procedimientos correspondientes para garantizar su protección, así como las medidas de protección de las que puede ser beneficiario y las entidades a las que puede acudir. Debe existir constancia que se otorgó esta información.</p> <p>Parágrafo 3°. Es deber del funcionario de la Secretaría Técnica del SUPRAC hacer seguimiento efectivo de las medidas de protección y denuncias recibidas y tramitadas, transmitiéndole al reportante/denunciante, de manera oportuna y actualizada, la información de los avances y resultados de la solicitud.</p> <p>Parágrafo 4°. Los formularios de denuncia deberán adecuarse para permitir que, si el denunciante lo desea, pueda incluirse información relacionada con la pertenencia de este a grupos de especial protección constitucional, con el fin de realizar trámite y seguimiento del caso de acuerdo con el enfoque diferencial y de género. Los formularios de denuncia deberán contener las previsiones del tratamiento de datos personales, contemplado en la Ley 1581 de 2012 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.</p>	<p>contados a partir de la recepción de la solicitud de protección, el cual es susceptible del recurso de reposición.</p> <p>Parágrafo 1°. Lo anterior, sin perjuicio de los demás canales establecidos por las autoridades competentes para radicación de denuncias de presuntos hechos de corrupción.</p> <p>Parágrafo 2°. El funcionario receptor de la denuncia o reporte deberá informar al denunciante de sus derechos, los procedimientos correspondientes para garantizar su protección, así como las medidas de protección de las que puede ser beneficiario y las entidades a las que puede acudir. Debe existir constancia que se otorgó esta información.</p> <p>Parágrafo 3°. Es deber del funcionario de la Secretaría Técnica del SUPRAC hacer seguimiento efectivo de las medidas de protección y denuncias recibidas y tramitadas, transmitiéndole al reportante/denunciante, de manera oportuna y actualizada, la información de los avances y resultados de la solicitud.</p> <p>Parágrafo 4°. Los formularios de denuncia deberán adecuarse para permitir que, si el denunciante lo desea, pueda incluirse información relacionada con la pertenencia de este a grupos de especial protección constitucional, con el fin de realizar trámite y seguimiento del caso de acuerdo con el enfoque diferencial y de género. Los formularios de denuncia deberán contener las previsiones del tratamiento de datos personales, contemplado en la Ley 1581 de 2012 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. Los formularios de denuncia deberán permitir, de forma voluntaria, que el denunciante incluya información sobre su pertenencia a grupos de especial protección constitucional, con el fin de aplicar un enfoque diferencial en el trámite y seguimiento del caso. Asimismo,</p>	<p>Se hace el ajuste para dar armonía con el resto del articulado y evitar confusiones en el operador jurídico.</p> <p>Finalmente, el artículo se reenumera.</p>
<p>TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>contados a partir de la recepción de la solicitud de protección, el cual es susceptible del recurso de reposición.</p> <p>Parágrafo 1°. Lo anterior, sin perjuicio de los demás canales establecidos por las autoridades competentes para radicación de denuncias de presuntos hechos de corrupción.</p> <p>Parágrafo 2°. El funcionario receptor de la denuncia o reporte deberá informar al denunciante de sus derechos, los procedimientos correspondientes para garantizar su protección, así como las medidas de protección de las que puede ser beneficiario y las entidades a las que puede acudir. Debe existir constancia que se otorgó esta información.</p> <p>Parágrafo 3°. Es deber del funcionario de la Secretaría Técnica del SUPRAC hacer seguimiento efectivo de las medidas de protección y denuncias recibidas y tramitadas, transmitiéndole al reportante/denunciante, de manera oportuna y actualizada, la información de los avances y resultados de la solicitud.</p> <p>Parágrafo 4°. Los formularios de denuncia deberán adecuarse para permitir que, si el denunciante lo desea, pueda incluirse información relacionada con la pertenencia de este a grupos de especial protección constitucional, con el fin de realizar trámite y seguimiento del caso de acuerdo con el enfoque diferencial y de género. Los formularios de denuncia deberán contener las previsiones del tratamiento de datos personales, contemplado en la Ley 1581 de 2012 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.</p>	<p>TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA</p> <p>contados a partir de la recepción de la solicitud de protección, el cual es susceptible del recurso de reposición.</p> <p>Parágrafo 1°. Lo anterior, sin perjuicio de los demás canales establecidos por las autoridades competentes para radicación de denuncias de presuntos hechos de corrupción.</p> <p>Parágrafo 2°. El funcionario receptor de la denuncia o reporte deberá informar al denunciante de sus derechos, los procedimientos correspondientes para garantizar su protección, así como las medidas de protección de las que puede ser beneficiario y las entidades a las que puede acudir. Debe existir constancia que se otorgó esta información.</p> <p>Parágrafo 3°. Es deber del funcionario de la Secretaría Técnica del SUPRAC hacer seguimiento efectivo de las medidas de protección y denuncias recibidas y tramitadas, transmitiéndole al reportante/denunciante, de manera oportuna y actualizada, la información de los avances y resultados de la solicitud.</p> <p>Parágrafo 4°. Los formularios de denuncia deberán adecuarse para permitir que, si el denunciante lo desea, pueda incluirse información relacionada con la pertenencia de este a grupos de especial protección constitucional, con el fin de realizar trámite y seguimiento del caso de acuerdo con el enfoque diferencial y de género. Los formularios de denuncia deberán contener las previsiones del tratamiento de datos personales, contemplado en la Ley 1581 de 2012 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. Los formularios de denuncia deberán permitir, de forma voluntaria, que el denunciante incluya información sobre su pertenencia a grupos de especial protección constitucional, con el fin de aplicar un enfoque diferencial en el trámite y seguimiento del caso. Asimismo,</p>	<p>Se hace el ajuste para dar armonía con el resto del articulado y evitar confusiones en el operador jurídico.</p> <p>Finalmente, el artículo se reenumera.</p>	<p>TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>ARTÍCULO 28°. Terminación de las medidas de protección. La terminación de la medida de protección al reportante/denunciante por actos y/o hechos de corrupción, iniciará una vez la autoridad competente determine el cese definitivo o terminación de las amenazas contra los derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad personal del denunciante, la persona natural que funja como facilitador y/o la de su núcleo familiar, así como los derechos laborales, libre desarrollo de la personalidad, lo que conlleva al análisis social y probatorio del mismo, el cual deberá hacerse mediante un estudio final de terminación de medidas y un acto administrativo motivado de acuerdo con el procedimiento administrativo ordinario de la Ley 1437 de 2011. Una vez terminadas las medidas de protección, la autoridad competente tendrá la obligación de suministrar un canal de fácil comunicación para que el reportante/denunciante, la persona natural que funja como facilitador o alguien de su núcleo familiar pueda reportar nuevas amenazas, para activar el procedimiento contemplado en la presente ley y realizar el adecuado monitoreo.</p> <p>ARTÍCULO 29. Procedimiento de Protección Laboral y a la Integridad Personal. La ruta para la solicitud y otorgamiento de las Medidas de Protección solicitadas será la siguiente:</p> <p>Procedimiento de protección a la vida e integridad personal:</p> <p>1. El reportante/denunciante podrá solicitar directamente la protección a la</p>	<p>TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA</p> <p>deberán incorporar las disposiciones sobre tratamiento de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012 o la normativa que la sustituya.</p> <p>ARTÍCULO 28 23°. Terminación de las medidas de protección. La terminación de la medida de protección al reportante/denunciante por actos y/o hechos de corrupción, iniciará una vez la autoridad competente determine el cese definitivo o terminación de las amenazas contra los derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad personal del denunciante, la persona natural que funja como facilitador y/o la de su núcleo familiar, así como los derechos laborales, libre desarrollo de la personalidad, lo que conlleva al análisis social y probatorio del mismo, el cual deberá hacerse mediante un estudio final de terminación de medidas y un acto administrativo motivado de acuerdo con el procedimiento administrativo ordinario de la Ley 1437 de 2011. Una vez terminadas las medidas de protección, la autoridad competente tendrá la obligación de suministrar un canal de fácil comunicación para que el reportante/denunciante, la persona natural que funja como facilitador o alguien de su núcleo familiar pueda reportar nuevas amenazas, para activar el procedimiento contemplado en la presente ley y realizar el adecuado monitoreo.</p> <p>ARTÍCULO 29 24. Procedimiento de Protección Laboral y a la vida e Integridad Personal. La ruta para la solicitud y otorgamiento de las Medidas de Protección solicitadas será la siguiente:</p> <p>Procedimiento de protección a la vida e integridad personal:</p> <p>1. El reportante/denunciante podrá solicitar directamente la protección a la</p>	<p>Se hace el ajuste para dar armonía con el resto del articulado y evitar confusiones en el operador jurídico.</p> <p>Finalmente, el artículo se reenumera.</p> <p>Se reenumera el artículo.</p>

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) o a la autoridad competente ante la que se presente la denuncia o reporte del presunto hecho o acto de corrupción. En el primer caso, la Secretaría Técnica del SUPRAC, en un plazo de 72 horas, deberá remitir la solicitud de protección a la autoridad competente con los respectivos soportes, previa revisión del cumplimiento de los criterios objetivos y subjetivos establecidos en los literales a) y b) del artículo 11 de la presente ley.</p> <p>2. La Secretaría Técnica del SUPRAC remitirá la solicitud a las entidades encargadas, así: Medidas de protección a la vida, integridad y seguridad personal, a las entidades de orden nacional y territorial que tengan dentro de su competencia la ejecución de programas de protección.</p> <p>3. Las entidades encargadas de brindar las Medidas de Protección adelantarán las evaluaciones técnicas pertinentes y determinarán qué Medidas de Protección se brindan y por cuánto tiempo. Estas medidas pueden cambiar, ser ajustadas, prolongadas o finalizadas de acuerdo con el nivel de riesgo que se derive del avance de las investigaciones o por el incumplimiento de las obligaciones suscritas mediante acta de compromiso por parte de la persona protegida.</p> <p>4. Las entidades encargadas de brindar las Medidas de Protección informarán de ello a la Secretaría Técnica del SUPRAC y ésta a su vez notificará la decisión al reportante/denunciante.</p> <p>5. Los tiempos de respuesta a las solicitudes de protección serán los determinados en esta Ley, procurando</p>	<p>Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) o a la autoridad competente ante la que se presente la denuncia o reporte del presunto hecho o acto de corrupción. En el primer caso, la Secretaría Técnica del SUPRAC, en un plazo de 72 horas, deberá remitir la solicitud de protección a la autoridad competente con los respectivos soportes, previa revisión del cumplimiento de los criterios objetivos y subjetivos establecidos en los literales a) y b) del artículo 44 10 de la presente ley.</p> <p>2. La Secretaría Técnica del SUPRAC remitirá la solicitud a las entidades encargadas, así: Medidas de protección a la vida, integridad y seguridad personal, a las entidades de orden nacional y territorial que tengan dentro de su competencia la ejecución de programas de protección.</p> <p>3. Las entidades encargadas de brindar las Medidas de Protección adelantarán las evaluaciones técnicas pertinentes y determinarán qué Medidas de Protección se brindan y por cuánto tiempo. Estas medidas pueden cambiar, ser ajustadas, prolongadas o finalizadas de acuerdo con el nivel de riesgo que se derive del avance de las investigaciones o por el incumplimiento de las obligaciones suscritas mediante acta de compromiso por parte de la persona protegida.</p> <p>4. Las entidades encargadas de brindar las Medidas de Protección informarán de ello a la Secretaría Técnica del SUPRAC y ésta a su vez notificará la decisión al reportante/denunciante.</p> <p>5. Los tiempos de respuesta a las solicitudes de protección serán los determinados en esta Ley, procurando</p>	

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>siempre preservar los derechos del solicitante de manera ágil y oportuna.</p> <p>Procedimiento de protección laboral y a personas sin vínculo laboral:</p> <p>1. El reportante/denunciante podrá solicitar directamente la protección a la Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) o a la autoridad competente ante la que se presente la denuncia o reporte del presunto hecho o acto de corrupción. Las autoridades competentes deben remitir la solicitud de protección en materia laboral y a personas sin vínculo laboral al Ministerio del Trabajo o a la Procuraduría General de la Nación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción con los respectivos soportes.</p> <p>2. El Ministerio del Trabajo decidirá sobre la adopción de las Medidas de Protección Laboral y Medidas de Protección a Personas Naturales sin Vínculo Laboral respecto de los vínculos contractuales del sector privado, previo concepto del Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción - SUPRAC.</p> <p>3. La Procuraduría General de la Nación decidirá sobre la adopción de las Medidas de Protección Laboral y Medidas de Protección a Personas Naturales sin Vínculo Laboral respecto de los vínculos contractuales del sector público, previo concepto del Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción - SUPRAC.</p> <p>4. La autoridad competente deberá emitir acto administrativo que decida sobre la valoración de la protección dentro de los</p>	<p>siempre preservar los derechos del solicitante de manera ágil y oportuna.</p> <p>Procedimiento de protección laboral y a personas sin vínculo laboral:</p> <p>1. El reportante/denunciante podrá solicitar directamente la protección a la Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) o a la autoridad competente ante la que se presente la denuncia o reporte del presunto hecho o acto de corrupción. Las autoridades competentes deben remitir la solicitud de protección en materia laboral y a personas sin vínculo laboral al Ministerio del Trabajo o a la Procuraduría General de la Nación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción con los respectivos soportes.</p> <p>2. El Ministerio del Trabajo decidirá sobre la adopción de las Medidas de Protección Laboral y Medidas de Protección a Personas Naturales sin Vínculo Laboral respecto de los vínculos contractuales del sector privado, previo concepto del Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción - SUPRAC.</p> <p>3. La Procuraduría General de la Nación decidirá sobre la adopción de las Medidas de Protección Laboral y Medidas de Protección a Personas Naturales sin Vínculo Laboral respecto de los vínculos contractuales del sector público, previo concepto del Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción - SUPRAC.</p> <p>4. La autoridad competente deberá emitir acto administrativo que decida sobre la valoración de la protección dentro de los</p>	

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>veinte (20) días hábiles siguientes a su recepción.</p> <p>Para ello, el Comité Rector del SUPRAC elaborará un estudio previo sobre la solicitud, que será puesto en conocimiento de la autoridad competente con anterioridad a la adopción de la decisión sobre las medidas de protección.</p> <p>5. Para la adopción de medidas de protección, se concederá un término de tres (3) días calendario, al empleador o contratante, para que se pronuncie sobre los hechos y pruebas que soportan la solicitud de protección.</p> <p>Parágrafo 1°. Durante todo el procedimiento de protección laboral y a la integridad personal, las entidades deberán garantizar la reserva de la identidad de las personas destinatarias de las medidas de protección y de la información que constitucional y legalmente sea considerada como reservada y clasificada, de conformidad a lo reglado por la Ley 1581 de 2012 y la Ley 1712 de 2014.</p> <p>Parágrafo 2°. Los funcionarios del Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General de la Nación que participen en el Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción - SUPRAC, no podrán participar en la adopción de las medidas de protección laboral y a personas sin vínculo laboral.</p> <p>ARTICULO NUEVO.</p>	<p>veinte (20) días hábiles siguientes a su recepción.</p> <p>Para ello, el Comité Rector del SUPRAC elaborará un estudio previo sobre la solicitud, que será puesto en conocimiento de la autoridad competente con anterioridad a la adopción de la decisión sobre las medidas de protección.</p> <p>5. Para la adopción de medidas de protección, se concederá un término de tres (3) días calendario, al empleador o contratante, para que se pronuncie sobre los hechos y pruebas que soportan la solicitud de protección.</p> <p>Parágrafo 1°. Durante todo el procedimiento de protección laboral y a la integridad personal, las entidades deberán garantizar la reserva de la identidad de las personas destinatarias de las medidas de protección y de la información que constitucional y legalmente sea considerada como reservada y clasificada, de conformidad a lo reglado por la Ley 1581 de 2012 y la Ley 1712 de 2014.</p> <p>Parágrafo 2°. Los funcionarios del Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General de la Nación que participen en el Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción - SUPRAC, no podrán participar en la adopción de las medidas de protección laboral y a personas sin vínculo laboral.</p> <p>ARTICULO 25. Priorización y Medidas de Protección a grupos de especial protección constitucional. En la evaluación del riesgo y definición de medidas de protección previstas en esta ley, las autoridades competentes deberán considerar la situación particular del reportante/denunciante.</p>	<p>El artículo 25 del proyecto de ley establece una obligación específica para que las autoridades competentes, en el marco del Sistema</p>

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
	<p>El Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción - SUPRAC deberá desarrollar lo dispuesto en el presente artículo dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley. Para ello, deberá adoptar criterios que reconozcan las particularidades de las poblaciones con especial protección constitucional y se ajusten a los estándares internacionales en materia de protección a denunciantes.</p> <p>Parágrafo 1°. No será requisito pertenecer a un grupo priorizado para acceder a las medidas de protección. Ningún reportante o denunciante podrá ser excluido por no formar parte de los sectores aquí señalados.</p> <p>Parágrafo 2°. La Secretaría Técnica del Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) dará respuesta a las peticiones de medidas de protección de emergencia en el término de tres (3) días calendario, si la persona pertenece a las siguientes categorías de sujetos de protección:</p> <p>A. Las personas que ejerzan el oficio del periodismo en sus diferentes modalidades.</p> <p>B. Los líderes, líderes defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo los de derechos ambientales.</p> <p>C. Las personas naturales que, por su formación académica, profesión u oficio sea de carácter dependiente o independiente al campo de acción y que, dentro de sus actividades, giro normal de sus negocios o labores y como producto de estas encuentren hallazgos y revelen presuntos</p>	<p>Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción - SUPRAC, consideren de manera diferenciada las condiciones particulares de los grupos con especial protección constitucional al momento de evaluar el riesgo y definir las medidas de protección.</p> <p>La norma asigna al Comité Rector del SUPRAC la responsabilidad de desarrollar e implementar estos criterios dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, adoptando lineamientos que estén en consonancia con los estándares internacionales de protección a denunciantes y con el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos.</p> <p>Además, este artículo busca desarrollar de manera concreta lo previsto de forma más general en los artículos 22, 24, 25 y 26 del proyecto, al establecer directrices específicas</p>

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>de Actos de Corrupción (SUPRAC) deberá garantizar la protección a los reportantes/denunciantes que soliciten reserva de su identidad y demás datos sensibles, a través del siguiente procedimiento:</p> <p>a. Las denuncias presentadas con reserva de identidad serán registradas con un código numérico especial que identifique al reportante/denunciante.</p> <p>b. Se mantendrá un registro cronológico de las personas que intervengan en el trámite de las denuncias presentadas con reserva de identidad, quedando impedidas de divulgar cualquier información relacionada con la identidad de los Reportantes/Denunciante.</p> <p>CAPITULO V RESTRICCIONES A LA APLICACIÓN DE LA LEY Y EFECTOS DE LA MALA FE.</p> <p>ARTICULO 31°. Personas que no podrán beneficiarse de una medida de protección. Quedarán excluidas de la posibilidad de acceder a cualquier medida de protección establecida en esta Ley, no sólo debido al incumplimiento de los requisitos necesarios, sino también en virtud de las siguientes circunstancias:</p> <p>1. El reportante/denunciante que haya incumplido de manera reiterada los compromisos suscritos con las entidades encargadas de brindar las Medidas de Protección del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciante de Actos de Corrupción (SUPRAC), siempre que se le haya garantizado el derecho a la defensa y se haya comprobado su incumplimiento mediante un procedimiento administrativo.</p> <p>2. Quien denuncie una conducta de corrupción que ya fue investigada y sobre</p>	<p>actos de corrupción. Entre las profesiones u oficios se encuentran, pero no se limitan a, revisores fiscales, jefes de control interno, auditores, auditores forenses, auditores financieros, oficiales de transparencia, oficiales de cumplimiento, interventores de obra, supervisores de obra, peritos contables y financieros, veedores ciudadanos, entre otros.</p> <p>Parágrafo 3°. Los funcionarios del Comité Rector del SUPRAC y de su Secretaría Técnica deberán recibir capacitaciones anuales obligatorias en atención a los grupos de especial protección constitucional.</p> <p>Parágrafo 4°. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las competencias de la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación u otras autoridades competentes en materia de protección.</p> <p>ARTICULO 30 26°. El Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciante</p>	<p>de protección reforzada y priorización.</p> <p>Parágrafo 1°: garantiza el principio de igualdad al establecer que la pertenencia a un grupo priorizado no es requisito para acceder a las medidas de protección, evitando exclusiones injustificadas.</p> <p>Parágrafo 2°: impone una obligación de formación a los integrantes del Comité Rector y de la Secretaría Técnica del SUPRAC en atención diferencial y enfoque de derechos, asegurando que la aplicación de la ley tenga una base técnica sólida y respetuosa de la diversidad.</p> <p>Parágrafo 3°: aclara la articulación del SUPRAC con otras entidades del Estado que también tienen funciones en materia de protección, como la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía General de la Nación, evitando solapamientos y conflictos de competencia.</p> <p>Se reenumera el artículo.</p>
<p>la cual ya se tomó una decisión judicial definitiva sin aportar elementos nuevos de prueba.</p> <p>3. El reportante/denunciante que haya presentado pruebas falsas, alterando información o actuado de manera dolosa con el fin de perjudicar a un tercero, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de esta ley.</p> <p>4. El que realice denuncias falsas o carentes de pruebas ante las entidades encargadas de brindar las Medidas de Protección del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciante de Actos de Corrupción (SUPRAC), lo que deberá ponerse en conocimiento de las autoridades competentes para la correspondiente investigación.</p> <p>La exclusión de la posibilidad de acceder a las medidas de protección contempladas en la presente Ley deberá preferirse mediante acto administrativo motivado, que garantice el derecho a la defensa y contradicción del denunciante/reportante, en el cual procederá el recurso de reposición.</p> <p>Parágrafo 1°. Para excluir a un reportante/denunciante de la protección establecida en esta ley, se deberá garantizar un procedimiento con derecho a defensa y contradicción.</p> <p>Parágrafo 2°. Si un reportante/denunciante excluido de la protección considera que la decisión fue injusta, podrá solicitar una revisión ante una instancia de control independiente.</p> <p>ARTICULO 32°. Efectos de la denuncia de mala fe. Se entenderá como reportante/denunciante de mala fe, a</p>	<p>la cual ya se tomó una decisión judicial definitiva sin aportar elementos nuevos de prueba.</p> <p>3. El reportante/denunciante que haya presentado pruebas falsas, alterando información o actuado de manera dolosa con el fin de perjudicar a un tercero, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 28 de esta ley.</p> <p>4. El que realice denuncias falsas o carentes de pruebas ante las entidades encargadas de brindar las Medidas de Protección del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciante de Actos de Corrupción (SUPRAC), lo que deberá ponerse en conocimiento de las autoridades competentes para la correspondiente investigación.</p> <p>La exclusión de la posibilidad de acceder a las medidas de protección contempladas en la presente Ley deberá preferirse mediante acto administrativo motivado, que garantice un el procedimiento con el derecho a la defensa y contradicción del reportante/denunciante reportante/denunciante, en el cual procederá el recurso de reposición.</p> <p>Parágrafo 1°. Para excluir a un reportante/denunciante de la protección establecida en esta ley, se deberá garantizar un procedimiento con derecho a defensa y contradicción. reportante/denunciante de la protección establecida en esta ley, se deberá garantizar un procedimiento con derecho a defensa y contradicción.</p> <p>Parágrafo 2°. Si un reportante/denunciante excluido de la protección considera que la decisión fue injusta, podrá solicitar una revisión ante una instancia de control independiente ante las instancias judiciales pertinentes antes una instancia de control independiente</p> <p>ARTICULO 32 28°. Efectos de la denuncia de mala fe. Se entenderá como reportante/denunciante de mala fe,</p>	<p>Se ajusta la numeración del artículo.</p>
<p>quien ponga en conocimiento de la autoridad receptora dentro del marco de sus competencias descritas en los criterios de la presente ley, actos y/o hechos que se constituyan como presunta corrupción a sabiendas que los actos no son de posible ocurrencia, o con simulación de pruebas con el fin de iniciar un proceso de investigación administrativa, disciplinaria y/o penal, a sabiendas de que los hechos no ocurrieron, no constituyan actos de corrupción o basados en elementos con vocación probatoria que falten a la verdad.</p> <p>La condición de mala fe atenderá a una valoración objetiva de las pruebas con las que se sustentó la denuncia. En caso de encontrarse indicios de la comisión de alguna de las circunstancias de mala fe, se procederá con la investigación por falsa denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Procuraduría General de la Nación.</p> <p>En caso de encontrarse indicios que evidencien la mala fe del reportante/denunciante, la Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciante de Actos de Corrupción - SUPRAC dará traslado a las autoridades competentes para evaluar la procedencia del proceso para la reintegración de los aportes monetarios que el Sistema le haya otorgado al denunciante de mala fe y los demás perjuicios económicos generados por esta denuncia.</p> <p>La destinación de lo recaudado a través de estos procesos se destinará al 40% asignado del Fondo Nacional para la Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción a cargo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, y su utilización será para las medidas provisionales de emergencia contempladas en la presente ley.</p>	<p>a quien ponga en conocimiento de la autoridad receptora dentro del marco de sus competencias descritas en los criterios de la presente ley, actos y/o hechos que se constituyan como presunta corrupción a sabiendas que los actos no son de posible ocurrencia, o con simulación de pruebas con el fin de iniciar un proceso de investigación administrativa, disciplinaria y/o penal, a sabiendas de que los hechos no ocurrieron, no constituyan actos de corrupción o basados en elementos con vocación probatoria que falten a la verdad.</p> <p>La condición de mala fe atenderá a una valoración objetiva de las pruebas con las que se sustentó la denuncia. En caso de encontrarse indicios de la comisión de alguna de las circunstancias de mala fe, se procederá con la investigación por falsa denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Procuraduría General de la Nación.</p> <p>En caso de encontrarse indicios que evidencien la mala fe del reportante/denunciante, la Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciante de Actos de Corrupción - SUPRAC dará traslado a las autoridades competentes para evaluar la procedencia del proceso para la reintegración de los aportes monetarios que el Sistema le haya otorgado al denunciante de mala fe y los demás perjuicios económicos generados por esta denuncia.</p> <p>La destinación de lo recaudado a través de estos procesos se destinará al 40% asignado del Fondo Nacional para la Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción a cargo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, y su utilización será para las medidas provisionales de emergencia contempladas en la presente ley. El 40%</p>	<p>Se elimina un aparte del numeral 1 y el parágrafo 2, teniendo presente que ya se encuentra posteriormente en otro inciso.</p> <p>Además, se hace un ajuste en el numeral 4, para dar armonía con lo contemplado en el numeral 3.</p> <p>Igualmente, se ajusta un apartado del parágrafo 2, atendiendo aclarando a qué hace referencia el control independiente.</p> <p>Finalmente, reenumera el artículo.</p>

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES	TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
<p>Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, la falsa denuncia o denuncia de mala fe será trasladada por la secretaria técnica de SUPRAC para que sea investigada y sancionada de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I del Título XVI de la Ley 599 de 2000. Igualmente dará traslado a la Procuraduría General de la Nación para el caso de los funcionarios públicos.</p> <p>CAPITULO VI DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN.</p> <p>ARTÍCULO 33°. Información relativa a la recepción y seguimiento de denuncias. Las entidades del orden nacional y territorial tendrán la obligación de promocionar la lucha contra corrupción bajo los parámetros de esta Ley, por lo que deben publicar en sus sitios web y demás canales de comunicación oficiales, en una sección separada, fácilmente identificable y accesible, como mínimo la siguiente información:</p> <p>a. Los procedimientos y medidas disponibles para reportar/denunciar casos de corrupción, la protección frente a represalias y los derechos de la persona afectada. Las condiciones para</p>	<p>de los recursos recaudados mediante estos procesos se destinará al Fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción. Este fondo estará a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Transparencia, y será utilizado para la implementación de las medidas provisionales de emergencia previstas en la presente ley.</p> <p>Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, la falsa denuncia o denuncia de mala fe será trasladada por la secretaria técnica de SUPRAC para que sea investigada y sancionada de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I del Título XVI de la Ley 599 de 2000. Igualmente dará traslado a la Procuraduría General de la Nación para el caso de los funcionarios públicos.</p> <p>CAPITULO V. VI DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN.</p> <p>ARTÍCULO 33 29°. Información relativa a la recepción y seguimiento de denuncias. Las entidades del orden nacional y territorial tendrán la obligación de promocionar la lucha contra corrupción bajo los parámetros de esta Ley, por lo que deben publicar en sus sitios web y demás canales de comunicación oficiales, en una sección separada, fácilmente identificable y accesible, como mínimo la siguiente información:</p> <p>a. Los procedimientos y medidas disponibles para reportar/denunciar casos de corrupción, la protección frente a represalias y los derechos de la persona afectada. Las condiciones para</p>	<p>Se ajusta el numeral del capítulo</p> <p>Se incorpora en el presente artículo las disposiciones de los artículos nuevos denominados "Cooperación Interinstitucional" y "Rendición de Cuentas", con la finalidad de unificar las medidas en un único artículo.</p>	<p>acogerse a la protección de reportante/denunciante.</p> <p>b. Las rutas de atención y medidas de protección por situaciones de riesgo generadas por denuncias o reportes de presuntos hechos y/o actos de corrupción.</p> <p>c. Los datos de contacto para los canales de reporte/denuncia de las autoridades competentes, como son, direcciones de correo electrónico, y números de teléfono para dichos canales, los cuales deberán ser actualizados trimestralmente.</p> <p>d. Los procedimientos y términos aplicables para el trámite del reporte/denuncia de presuntos actos o hechos de corrupción.</p> <p>e. El régimen de confidencialidad y anonimato aplicable a los reportes/denuncias y el tratamiento de datos personales será de conformidad a lo establecido por la Ley 1581 de 2012, el cual garantizará la reserva de los datos.</p> <p>f. Los procedimientos y recursos procedentes con respecto a la solicitud de medidas de protección ante represalias y disponibilidad de asesoramiento confidencial para las personas que contemplen reportar/denunciar.</p> <p>g. Explicar el alcance de la figura de indemnidad del reportante/denunciante de buena fe, cuando en la formulación del reporte/denuncia se expongan secretos profesionales o comerciales violentando cláusulas de confidencialidad contractual.</p> <p>h. Los datos de información del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC).</p> <p>Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo anterior las entidades del orden nacional y territorial diseñarán e implementarán campañas de pedagogía, asesoramiento</p>	<p>acogerse a la protección de reportante/denunciante.</p> <p>b. Las rutas de atención y medidas de protección por situaciones de riesgo generadas por denuncias o reportes de presuntos hechos y/o actos de corrupción.</p> <p>c. Los datos de contacto para los canales de reporte/denuncia de las autoridades competentes, como son, direcciones de correo electrónico, y números de teléfono para dichos canales, los cuales deberán ser actualizados trimestralmente.</p> <p>d. Los procedimientos y términos aplicables para el trámite del reporte/denuncia de presuntos actos o hechos de corrupción.</p> <p>e. El régimen de confidencialidad y anonimato aplicable a los reportes/denuncias y el tratamiento de datos personales será de conformidad a lo establecido por la Ley 1581 de 2012, el cual garantizará la reserva de los datos.</p> <p>f. Los procedimientos y recursos procedentes con respecto a la solicitud de medidas de protección ante represalias y disponibilidad de asesoramiento confidencial para las personas que contemplen reportar/denunciar.</p> <p>g. Explicar el alcance de la figura de indemnidad del reportante/denunciante de buena fe, cuando en la formulación del reporte/denuncia se expongan secretos profesionales o comerciales violentando cláusulas de confidencialidad contractual.</p> <p>h. Los datos de información del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC).</p> <p>Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo anterior las entidades del orden nacional y territorial diseñarán e implementarán campañas de pedagogía, asesoramiento</p>	
<p>y promoción de la lucha contra la corrupción y los sistemas y procedimientos de protección de reportante/denunciante dispuestos en esta Ley con el objetivo de orientar y acompañar a la ciudadanía sobre los mecanismos de denuncia o reporte y las medidas de protección, asegurando la difusión y divulgación permanente y periódica de la presente ley.</p> <p>Las entidades del orden nacional y territorial deberán capacitar a sus funcionarios sobre la importancia de la lucha contra la corrupción, la reporte/denuncia de actos y/o hechos de corrupción y los canales y mecanismos disponibles para la protección del reportante/denunciante, así como de las medidas de confidencialidad, tratamiento de datos personales y seguridad frente a la información.</p> <p>Parágrafo 2°. Las entidades del orden nacional y territorial deben adoptar medidas para el mejoramiento, modernización y actualización de sus canales de reporte/denuncia de actos y/o hechos de corrupción, en consonancia con las buenas prácticas y recomendaciones del SUPRAC, garantizando la denuncia anónima y la denuncia con protección de identidad o confidencial.</p> <p>La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República o quien haga sus veces, en el término de seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, adoptará los lineamientos para la unificación de los canales de denuncia de corrupción en el país y la estandarización del tratamiento de la información.</p> <p>Parágrafo 3°. Las entidades y demás sujetos obligados en el presente artículo, deberán proporcionar una versión pedagógica de fácil lectura de lo reglamentado en este artículo, que</p>	<p>y promoción de la lucha contra la corrupción y los sistemas y procedimientos de protección de reportante/denunciante dispuestos en esta Ley con el objetivo de orientar y acompañar a la ciudadanía sobre los mecanismos de denuncia o reporte y las medidas de protección, asegurando la difusión y divulgación permanente y periódica de la presente ley.</p> <p>Las entidades del orden nacional y territorial deberán capacitar a sus funcionarios sobre la importancia de la lucha contra la corrupción, la reporte/denuncia de actos y/o hechos de corrupción y los canales y mecanismos disponibles para la protección del reportante/denunciante, así como de las medidas de confidencialidad, tratamiento de datos personales y seguridad frente a la información.</p> <p>Parágrafo 2°. Las entidades del orden nacional y territorial deben adoptar medidas para el mejoramiento, modernización y actualización de sus canales de reporte/denuncia de actos y/o hechos de corrupción, en consonancia con las buenas prácticas y recomendaciones del SUPRAC, garantizando la denuncia anónima y la denuncia con protección de identidad o confidencial.</p> <p>La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República o quien haga sus veces, en el marco de sus competencias y en el término de seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, adoptará los lineamientos para la unificación de los canales de denuncia de corrupción en el país y la estandarización del tratamiento de la información.</p> <p>Parágrafo 3°. Las entidades y demás sujetos obligados en el presente artículo, deberán proporcionar una versión pedagógica de fácil lectura de lo</p>		<p>garantice el control social y la accesibilidad de la información a toda la ciudadanía.</p> <p>Parágrafo 4°. Las entidades del orden nacional y territorial, así como cualquier entidad receptora de denuncias por presunta corrupción, establecerán parámetros de comunicación y retroalimentación claros dirigidos a quienes soliciten medidas de protección, estos tendrán que ser asertivos, pedagógicos y periódicos.</p> <p>ARTÍCULO NUEVO. Rendición de cuentas. La entidad receptora de denuncias publicará informes semestrales sobre la gestión de casos, incluyendo estadísticas anónimas sobre denuncias recibidas, investigaciones iniciadas, resultados obtenidos, tiempos de respuesta y efectividad de las medidas de protección implementadas.</p> <p>ARTÍCULO NUEVO. Cooperación Interinstitucional. Las entidades públicas deberán establecer protocolos</p>	<p>reglamentado en este artículo, que garantice el control social y la accesibilidad de la información a toda la ciudadanía.</p> <p><u>Adicionalmente, las entidades receptoras de denuncias publicarán informes semestrales sobre la gestión de casos, incluyendo estadísticas anónimas sobre denuncias recibidas, investigaciones iniciadas, resultados obtenidos, tiempos de respuesta y efectividad de las medidas de protección implementadas, garantizando la reserva y confidencialidad de la información.</u></p> <p>Parágrafo 4°. Las entidades del orden nacional y territorial, así como cualquier entidad receptora de denuncias por presunta corrupción, establecerán parámetros de comunicación y retroalimentación claros dirigidos a quienes soliciten medidas de protección, <u>estos los cuales</u> tendrán que ser asertivos, pedagógicos y periódicos.</p> <p>Parágrafo 5°. Coordinación Interinstitucional. Las entidades públicas deberán establecer protocolos de coordinación interinstitucional para la gestión eficiente de denuncias, la protección de denunciantes y la investigación de hechos denunciados, incluyendo la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo.</p> <p>ELIMINADO.</p> <p>ELIMINADO.</p>	<p>Se elimina el presente artículo nuevo, toda vez que su contenido fue introducido en el parágrafo 3 del artículo 32.</p> <p>Se elimina el presente artículo nuevo, toda vez que su contenido fue</p>

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES	TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
de cooperación interinstitucional para la gestión eficiente de denuncias, la protección de denunciantes y la investigación de hechos denunciados, incluyendo la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo.		introducido como un parágrafo 5 del artículo 32.	reportante/denunciante, sin su consentimiento expreso u orden judicial, a persona que no sea miembro autorizado del personal competente para recibir o tramitar el reporte/denuncia. Lo anterior, en concordancia con la Ley 1581 de 2012 o aquellas que la modifiquen o sustituyan.		sistemática dentro del cuerpo normativo.
ARTICULO NUEVO.	ARTICULO 30. Medidas de comunicación y cultura de la integridad y la lucha contra la corrupción. El Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción – SUPRAC, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, implementarán una estrategia para visibilizar las consecuencias negativas de la corrupción y de los actos de amenaza y retaliación contra aquellas personas que denuncien o reporten de estas situaciones. Para ello, se podrán vincular las empresas del sector privado, especialmente aquellas que contraten con el Estado o presten servicios públicos, con la finalidad de que incluyan en sus programas de Responsabilidad Social Empresarial componentes específicos para la lucha contra la corrupción y la recepción de las denuncias y/o reportes de estas situaciones en armonía con la Ley 2199 de 2022.	Se adiciona el presente artículo, con la finalidad de incorporar parcialmente el artículo nuevo dejado como constancia y propuesto por la bancada del partido MIRA.	Los miembros del SUPRAC que manejen información relacionada con los Reportantes/Denunciantes de presuntos hechos de corrupción, deberán firmar cláusula expresa y clara sobre la especial reserva y confidencialidad de la información al momento de su vinculación. El incumplimiento de la obligación de confidencialidad por parte del personal del SUPRAC dará lugar a responsabilidad disciplinaria en los términos del artículo 35 de la presente ley.	ARTICULO 35-31. Compromiso de Reserva. Los servidores públicos de las Entidades que participen en la recepción o tratamiento de información relacionada con reportantes/denunciantes de presuntos hechos de corrupción, que indebidamente divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, empleen, comuniquen, publiquen, declaren, permitan o realicen conducta alguna con el fin de que alguien emplee la información o documentos relacionados con la información de los reportantes/denunciantes de presuntos hechos de corrupción, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.	Se ajusta la numeración y redacción del artículo sin alterar su contenido sustancial.
ARTICULO 34. Deber de confidencialidad. Las autoridades receptoras, los integrantes y miembros del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) y las entidades públicas y privadas que reciban reportes/denuncias por actos y/o hechos de corrupción tendrán prohibido revelar, divulgar o dar uso indebido de la información personal o sensible, que permita identificar al	ELIMINADO	Se suprime el artículo 34 original, dado que su contenido se incorpora de manera más adecuada en el inciso 2 del artículo siguiente, relacionado con el compromiso de reserva, lo cual permite una redacción más coherente, integrada y	ARTICULO 35. Compromiso de Reserva. Los servidores públicos de las Entidades que participen en la recepción o tratamiento de información relacionada con reportantes/denunciantes de presuntos hechos de corrupción, que indebidamente divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, empleen, comuniquen, publiquen, declaren, permitan o realicen conducta alguna con el fin de que alguien emplee la información o documentos relacionados con la información de los reportantes/denunciantes de presuntos hechos de corrupción, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.	ARTICULO 35-31. Compromiso de Reserva. Los servidores públicos de las Entidades que participen intervengan participen en la recepción o tratamiento manejo de información relacionada con reportantes/denunciantes de presuntos hechos de corrupción; y que de manera indebida indebidamente divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, utilicen, empleen, comuniquen, publiquen, declaren, permitan el acceso o realicen cualquier conducta que facilite el uso no autorizado de dicha información o documentación, incurrirán en falta disciplinaria por causal de mala conducta, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan alguna con el fin de que alguien emplee la información o documentos relacionados con la información de los reportantes/denunciantes de presuntos hechos de corrupción, incurrirán en	Se ajusta la numeración y redacción del artículo sin alterar su contenido sustancial.
TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES Parágrafo 1°. Las entidades involucradas en la recepción o tratamiento de información relacionada con reportantes/denunciantes de presuntos hechos de corrupción, deberán tomar todas las medidas necesarias para impedir que sus miembros copien, porten, reproduzcan, almacenen, manipulen, divulguen o realicen cualquier conducta con el fin de suministrar cualquier tipo de información sensible relacionada con los reportantes/denunciantes de presuntos hechos de corrupción. Parágrafo 2°. Las entidades involucradas en la recepción o tratamiento de la información relacionada con reportantes/denunciantes de presuntos hechos de corrupción, deberán garantizar la sostenibilidad técnica.	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar. Las autoridades receptoras, los integrantes y miembros del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) y entidades que gestionen reportes o denuncias por presuntos actos de corrupción deberán garantizar la reserva de la información personal o sensible del reportante o denunciante, la cual sólo podrá ser tratada por personal autorizado y divulgada con su consentimiento expreso o por orden judicial, conforme a la Ley 1581 de 2012 y sus disposiciones complementarias. Además, los miembros del SUPRAC que accedan a dicha información deberán suscribir, al momento de su vinculación, una cláusula expresa de confidencialidad que refuerce su deber de reserva. Parágrafo 1°. Las entidades involucradas en la recepción o tratamiento de información relacionada con reportantes/denunciantes de presuntos hechos de corrupción, deberán tomar todas las medidas necesarias para impedir que sus miembros copien, porten, reproduzcan, almacenen, manipulen, divulguen o suministren realicen cualquier realicen cualquier tipo de información sensible relacionada con los reportantes/denunciantes de presuntos hechos de corrupción. Parágrafo 2°. Las entidades involucradas en la recepción o tratamiento de la información relacionada con reportantes/denunciantes de presuntos hechos de corrupción, deberán	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES	TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES presupuestal, de seguridad y ciberseguridad de los aplicativos, servidores, programas, sistemas de información y bases de datos que empleen para el almacenamiento y administración de la información y datos sensibles relacionada con los reportantes/denunciantes de presuntos hechos de corrupción. Adicionalmente, las entidades deberán establecer mecanismos de monitoreo y auditorías periódicas de los aplicativos, servidores, programas, sistemas de información y bases de datos para identificar fallos y vulnerabilidades que puedan afectar el almacenamiento y administración de la información. Lo presente será reglamentado durante los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, por parte del Gobierno Nacional. La presente obligación también será responsabilidad de la entidad encargada de administrar la página web del SUPRAC. Parágrafo 3°. Las autoridades y demás sujetos obligados deberán adecuar sus sistemas y canales de reporte/denuncia de actos y/o hechos de corrupción para garantizar la denuncia anónima y con reserva de identidad del denunciante. Parágrafo 4°. Los funcionarios integrantes del Comité Rector del SUPRAC y de la Secretaría Técnica, deberán tener capacitaciones anuales obligatorias sobre el manejo y confidencialidad de la información relacionada con los denunciantes/reportantes. ARTICULO 36. Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación y	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA presupuestal, de seguridad y ciberseguridad de los aplicativos, servidores, programas, sistemas de información y bases de datos que empleen para el almacenamiento y administración de la información y datos sensibles relacionada con los reportantes/denunciantes de presuntos hechos de corrupción. Adicionalmente, las entidades deberán establecer mecanismos de monitoreo y auditorías periódicas de los aplicativos, servidores, programas, sistemas de información y bases de datos para identificar fallos y vulnerabilidades que puedan afectar el almacenamiento y administración de la información. Lo presente será reglamentado durante los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, por parte del Gobierno Nacional. La presente obligación también será responsabilidad de la entidad encargada de administrar la página web del SUPRAC. Parágrafo 3°. Las autoridades y demás sujetos obligados deberán adecuar sus sistemas y canales de reporte/denuncia de actos y/o hechos de corrupción para garantizar la denuncia anónima y con reserva de identidad del denunciante. Parágrafo 4°. Los funcionarios integrantes del Comité Rector del SUPRAC y de la Secretaría Técnica, deberán tener capacitaciones anuales obligatorias sobre el manejo y confidencialidad de la información relacionada con los denunciantes/reportantes. ARTICULO 36 32. Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación y	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES Se ajusta la numeración del artículo.

TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA	JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.	deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.	

VI. PROPOSICIÓN

Considerando los argumentos expuestos y en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 51a de 1992 presentamos ponencia positiva y en consecuencia solicitamos a los miembros de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República dar primer debate al Proyecto de Ley No. 291 de 2023 Cámara – 414 de 2025 Senado, "Por la cual se adoptan medidas de protección para personas naturales frente al reporte o denuncia de presuntos actos y/o hechos de corrupción – Ley Jorge Pizano", de conformidad con el texto propuesto.

Cordialmente,



CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN
Senadora de la República
Coalición Pacto Histórico

VII. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN LA COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.

PROYECTO DE LEY No. 291 DE 2023 CÁMARA – 414 DE 2025 SENADO

Por la cual se adoptan medidas de protección para personas naturales frente al reporte o denuncia de presuntos actos y/o hechos de corrupción

Ley Jorge Pizano

requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; tráfico de influencias de particular; enriquecimiento ilícito; enriquecimiento ilícito de servidor público; prevaricato por acción; prevaricato por omisión; soborno transnacional; corrupción privada; y, administración desleal.

De conformidad con lo establecido en la ley 1474 de 2011 y las normas que la modifiquen, así como en las convenciones y tratados internacionales contra la corrupción ratificados por Colombia, también se consideran actos y/o hechos de corrupción aquellas conductas que den lugar a faltas disciplinarias, decisiones de responsabilidad fiscal o abusos de poder, asociadas a: (i) el uso indebido de poder para obtener beneficios personales; (ii) el detrimento del patrimonio público; (iii) un perjuicio social significativo, que afecte el interés general; y (iv) la corrupción electoral.

b. Reportante/Denunciante: Quien, mediante las formalidades legales dispuestas para tal fin, ya sea ante la autoridad receptora, mediante mecanismos internos o a través de divulgación pública, informe sobre hechos que puedan constituir presuntos actos de corrupción, y quien o quienes suministren evidencia o datos concretos que permitan encauzar una investigación.

c. Denuncia: La denuncia consiste en una manifestación, mediante la cual se pone en conocimiento de la autoridad receptora un hecho presuntamente delictivo, incluyendo una descripción detallada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que le consten, a la vez que representa la activación de un mecanismo para el acceso a la administración de justicia.

d. Reporte: El reporte es un mecanismo por el cual se alerta de un presunto caso de corrupción, sin requerirse el empleo de los canales formales de una denuncia, ni que exista, de manera directa e inicial, la intención de acceder a la administración de justicia.

La información derivada de una denuncia o reporte tendrá carácter confidencial y deberá mantenerse en reserva por la autoridad receptora hasta su entrega a la autoridad competente.

e. Autoridad receptora: Se entenderá como autoridad receptora, la designada para recibir y gestionar las denuncias, solicitudes, reportes u otros tipos de comunicaciones formales dentro de un marco legal o administrativo específico de la presente ley, como lo serán: La Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Fiscalía General de la Nación y cualquier entidad con funciones disciplinarias, de vigilancia y control.

Así mismo, se tendrán como autoridades receptoras a las entidades públicas y privadas que reciben denuncias o reportes por medio de sus canales internos.

f. Facilitador: persona natural que brinda apoyo y/o asistencia a reportantes/denunciados de actos y/o hechos de corrupción. Lo anterior, incluye a los informantes.

g. Reportante/denunciante anónimo: Quien presente la denuncia o reporte reservándose su identidad. El reportante/denunciante anónimo debe suministrar evidencia o datos concretos que permitan encauzar una investigación.

h. Denuncia con reserva de identidad o confidencialidad: Acción mediante la cual el reportante/denunciante solicita mantener en absoluta reserva su identidad.

i. Situación de Riesgo: Es el estado de amenaza, que conlleva la existencia de señales o manifestaciones que hagan vislumbrar la situación de riesgo de los derechos del reportante/denunciante. Este estado implica la presencia de signos objetivos que evidencian la inminencia del peligro o la probabilidad de que se materialice un daño.

j. Medidas de Protección: Conjunto de acciones dispuestas por las autoridades competentes orientadas a proteger el ejercicio de los derechos fundamentales de los

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

**CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES**

ARTÍCULO 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer normas, procedimientos y mecanismos para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los reportantes/denunciados de hechos o actos que presuntamente constituyan o puedan constituir corrupción. Además, se crea el Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciados de Actos de Corrupción (SUPRAC), se fortalece la institucionalidad y se adoptan medidas para promover la denuncia de presuntos hechos o actos de corrupción.

ARTÍCULO 2°. Ámbito de Aplicación. Los mecanismos de protección contemplados en la presente ley están dirigidos a personas naturales, tanto particulares como servidores públicos, que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de haber presentado denuncia o reporte, dado información, o haber revelado por cualquier medio presuntos hechos y/o actos de corrupción.

Parágrafo 1°. Las medidas de protección previstas para el reportante/denunciante también se aplicarán, en su caso, a terceros que estén relacionados con el reportante/denunciante y que puedan sufrir represalias, tales como su cónyuge, compañero o compañera permanente, o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, así como a la persona natural que actúe como facilitador.

ARTÍCULO 3°. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se entiende por:

a. Actos o hechos de corrupción: Son las conductas que implican la desviación de la gestión de lo público y de lo privado, con el propósito de obtener ventajas o beneficios para sí o para un tercero.

Se considera un hecho o acto de corrupción las siguientes conductas punibles descritas en la Ley 599 de 2000 o cualquiera que la modifique, sustituya o adicione, entre los que se encuentran, pero no se limitan a: contrabando; fraude aduanero; favorecimiento por servidor público; favorecimiento por servidor público de contrabando de hidrocarburos o sus derivados; lavado de activos; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas; violación de los toques o límites de gastos en las campañas electorales; constreñimiento al sufragante; fraude al sufragante; fraude en inscripción de cédulas; corrupción de sufragante; voto fraudulento; favorecimiento de voto fraudulento; alteración de resultados electorales; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula; peculado por apropiación; peculado por uso; peculado por aplicación oficial diferente; fraude de subvenciones; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimiento de

denunciados. Su aplicación dependerá de los criterios de priorización reglamentados a partir de la presente ley.

Las Medidas de Protección deberán ser viables y proporcionales a los siguientes criterios: (i) la vulnerabilidad del denunciante sujeto a las medidas de protección; (ii) la situación de riesgo; (iii) la relevancia del caso; (iv) la trascendencia e idoneidad de la denuncia o testimonio; (v) la capacidad de la persona para adaptarse a las condiciones del Programa; y (vi) otras circunstancias que justifiquen la medida.

k. Solicitud de Medidas de Protección por parte de los reportantes/denunciados de presuntos actos de corrupción: Es aquella acción por la cual un reportante/denunciante recurre a la autoridad competente por cualquier medio, con el fin de solicitar la adopción de Medidas de Protección, al considerar que su vida, integridad física, la de su núcleo familiar o su derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, se encuentran en riesgo de vulneración.

l. Conductas de retaliación: Toda conducta realizada por una persona natural o jurídica en contra de un reportante/denunciante de actos y/o hechos de corrupción que se derive del reporte, denuncia o delación presentada que derive en amenazas, situaciones de riesgo o daño al reportante/denunciante. La acción retaliatoria puede consistir en la imposición de cambios significativos de los deberes, responsabilidades o condiciones laborales; amenazas a su vida, integridad y/o seguridad personal o la de su familia; o en la ejecución de acciones que atenten contra el buen nombre y la honra del reportante/denunciante o que afecten sus derechos laborales, derecho al trabajo, económicos o libre desarrollo de la personalidad, tales como: (i) retraso o fraccionamiento del pago de honorarios; (ii) imposibilidad de ejecución contractual por causas imputables al contratante o sujeciones, auditorías e inspecciones injustas, así como su divulgación; (iii) terminación unilateral del contrato laboral, o terminación, modificación o interpretación unilaterales del contrato de prestación de servicio; (iv) degradación o disminución de categoría profesional o de cargo; (v) traslado a otra dependencia en contra de su voluntad; (vi) terminación del vínculo; (vii) disminución del salario, honorarios o pagos; (viii) retiro de beneficios, retiro de permisos o cancelación de oportunidades de autodesarrollo; (ix) acoso laboral; (x) extorsión; (xi) constreñimiento ilegal; (xii) estigmatización; (xiii) descalificación; (xiv) injuria y calumnia; (xv) suspensión o asignación de funciones sin justificación; (xvi) discriminación en las evaluaciones de rendimiento; (xvii) inclusión en buró laboral o listas negras de trabajadores; y (xviii) cualquier trato injustificado.

m. Persona protegida: es la cualidad del reportante/denunciante de un acto o hecho de corrupción que se le ha concedido medidas de protección, con la finalidad de garantizar sus derechos fundamentales. En caso necesario, la persona protegida también será el tercero relacionado con el reportante/denunciante como cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil.

ARTÍCULO 4°. Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciados de Actos de Corrupción (SUPRAC). Créase el Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciados de Actos de Corrupción (SUPRAC), como una instancia interinstitucional de carácter independiente, encargada de coordinar, adoptar decisiones y orientar las actividades relacionadas con la implementación y el seguimiento de las medidas de protección de reportantes/denunciados de presuntos actos de corrupción, y realizar recomendaciones para el fortalecimiento de los sistemas y canales de denuncia en el país. Para tal fin, el SUPRAC estará integrado por un Comité Rector y una Secretaría Técnica.

Parágrafo. El SUPRAC, a través de su Secretaría Técnica, deberá implementar una página web y habilitar todos los canales físicos y digitales necesarios que garanticen el cumplimiento del principio de transparencia, conforme a la política de Estado Abierto. En este sentido, deberá observar lo previsto en la ley 1712 de 2014 en relación con la información mínima obligatoria, tanto sobre la estructura del sujeto obligado como sobre sus servicios, procedimientos y funcionamiento de acuerdo a los parámetros de anonimización, protección y ciberseguridad de los datos.

ARTÍCULO 5°. Protección de la confidencialidad de los reportantes o denunciantes mediante el SUPRAC. El Sistema Unificado de Protección a Reportantes o Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) deberá garantizar medidas de almacenamiento, seguridad y confidencialidad de las solicitudes de protección de los reportantes/denunciantes cobijados en el artículo 2 de la presente ley.

Toda información relacionada con los reportantes/denunciantes tendrá carácter reservado y clasificado, conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014.

ARTÍCULO 6°. Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC). El Comité Rector estará conformado por un (1) delegado del nivel directivo de cada una de las siguientes entidades: Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Unidad Nacional de Protección, Ministerio del Trabajo, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Interior.

La Presidencia del Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) será ejercida de manera rotativa, en periodos de dos (2) años, por la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Unidad Nacional de Protección, en el orden mencionado.

El Comité Rector se reunirá como mínimo una vez trimestralmente y cada uno de sus delegados tendrá voz y voto frente a las deliberaciones y medidas que deba adoptar el Comité. Las decisiones del Comité Rector serán por votación ordinaria de la mayoría de sus miembros con derecho a voto.

Parágrafo 1°. En las sesiones donde se definan estrategias, planes, políticas, procesos y procedimientos, podrán asistir como miembros con voz y no con voto, la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, representantes de la academia, organizaciones de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, y representantes de los gremios económicos.

La Secretaría Técnica del SUPRAC adelantará un proceso de invitación pública, para la participación de representantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y empresas del sector privado.

Parágrafo 2°. En las sesiones donde se estudien casos del sector privado, serán invitados los delegados de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades.

Parágrafo 3°. En las sesiones donde se analicen casos del ámbito territorial, serán invitados los delegados de la Personería de la circunscripción respectiva.

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República liderará y establecerá los lineamientos para la articulación y el cumplimiento de las funciones a cargo de la Secretaría Técnica del SUPRAC.

En los eventos de decisión de trámites de solicitudes de medidas de protección de emergencia, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República presentará el proyecto de decisión motivada a los delegados de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, quienes tendrán la facultad de presentar oposición a la adopción o negación de medidas de protección dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su presentación. De presentarse una oposición motivada, la Secretaría de Transparencia deberá realizar los ajustes pertinentes a la proyección de la decisión dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.

Este proceso será de obligatorio cumplimiento, so pena de mala conducta del funcionario respectivo.

Parágrafo. Para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría Técnica del SUPRAC y la adopción de sus decisiones, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República contará con el apoyo de equipos técnicos interdisciplinarios y territoriales de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, en los eventos que sea requerido.

ARTÍCULO 9°. Funciones de la Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC). Las funciones de la Secretaría Técnica serán las siguientes:

- a. Recibir y tramitar las solicitudes de protección. Serán tramitadas directamente por la Secretaría Técnica las solicitudes de Medidas Provisionales de Emergencia.
- b. Cuando la solicitud se refiera a otro tipo de medidas de protección, la Secretaría Técnica deberá trasladarlas a la totalidad de las entidades de orden nacional y territorial que tengan dentro de su competencia la ejecución de programas de protección a personas naturales. Lo anterior con el fin de garantizar el principio de legalidad, celeridad y eficiencia en el procedimiento.
- c. Realizar seguimiento y monitoreo en tiempo real de las solicitudes y las medidas de protección adoptadas, sus procedimientos y plazos.
- d. Realizar una revisión periódica sobre el uso y eficacia de las medidas de protección adoptadas, para el mejoramiento continuo del sistema.
- e. Informar a los reportantes/denunciantes sobre la procedencia del recurso de reposición frente a las decisiones adoptadas, conforme a lo establecido en la ley 1437 de 2011.
- f. Una vez aprobadas las medidas de protección, la Secretaría Técnica del SUPRAC informará al reportante/denunciante sobre su contenido y brindará asesoría jurídica integral, adecuada a sus circunstancias particulares, especialmente si pertenece a un grupo de especial protección constitucional.
- g. Diseñar y adoptar canales de comunicación eficientes, seguros y oportunos entre los miembros del SUPRAC.
- h. Administrar un sistema de información para la recepción y trámite de las solicitudes de protección, que garantice la confidencialidad, reserva y protección de la identidad de los reportantes/denunciantes en el trámite de sus solicitudes de protección.
- i. Convocar a sesión al Comité Rector trimestralmente o a sesiones extraordinarias si se requiere.

Así mismo, las Comisiones Regionales de Moralización tendrán participación y deberán presentar informes sobre los procesos de denuncia presentados en el territorio respectivo, cuando se comuniquen o revelen hechos o actos de corrupción.

ARTÍCULO 7°. Funciones del Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC). El Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) tendrá las siguientes funciones:

- a. Definir las estrategias, procesos y procedimientos que orienten, promuevan, faciliten y garanticen el trámite efectivo de las solicitudes de protección de los reportantes/denunciantes, así como las respuestas del Estado frente a dichas solicitudes.
- b. Hacer evaluación y recomendaciones a las entidades encargadas de brindar Medidas de Protección. En sus decisiones, las entidades encargadas deberán hacer referencia a las recomendaciones realizadas por el Comité Rector del SUPRAC.
- c. En coordinación con las entidades que conforman el SUPRAC, definir las estrategias, planes y políticas encaminados al fortalecimiento de los canales de denuncia en el país y realizar el seguimiento y adoptar recomendaciones sobre los mecanismos de denuncia adoptados por las entidades públicas y privadas, incluyendo su funcionamiento.
- d. Apoyar en el proceso de definición de los criterios para estandarizar y unificar los sistemas de denuncia por hechos de corrupción de tal forma que se respete el anonimato, y la confidencialidad, según el caso y se indique la entidad pública afectada.
- e. Realizar la evaluación de las medidas de protección adoptadas, solicitando los ajustes a las entidades respectivas.
- f. Realizar un informe público anual en el cual se realicen recomendaciones de política pública para el mejoramiento continuo en la adopción de medidas de protección y fortalecer la caracterización de las prácticas corruptas y las fallas en la arquitectura institucional que lo permite.
- g. Elaborar informes anuales de gestión que, en el marco de las competencias asignadas en esta Ley, deberán presentarse a la Comisión Nacional de Moralización y al Congreso de la República.
- h. Adoptar su propio reglamento.
- i. Reglamentar el funcionamiento de la Secretaría Técnica del SUPRAC.

Parágrafo. La delegación de las autoridades competentes para atender las sesiones del Comité Rector del SUPRAC, deberá realizarse según lo estipulado por el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 y los eventos de conflictos de intereses de los delegados.

ARTÍCULO 8°. De la Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC). El Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) contará con una Secretaría Técnica integrada por profesionales con formación y experiencia relacionada con las funciones asignadas a este organismo, quienes estarán adscritos a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con supervisión permanente de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

- j. Impartir las capacitaciones contempladas en la presente ley para los funcionarios del SUPRAC.
- k. La Secretaría Técnica del SUPRAC deberá llevar registros, elaborar estadísticas y presentar un informe trimestral al Comité Rector y a los entes de control, detallando las denuncias recibidas, las medidas aprobadas o negadas, su tipo, estado de implementación, y características del reportante/denunciante, incluyendo su pertenencia a grupos de especial protección constitucional. El informe deberá incluir un anexo financiero con el costo individual de las medidas de protección de emergencia.
- l. Elaborar un informe público anual sobre la evaluación de impacto de la presente ley, así como de la gestión del SUPRAC y su ejecución presupuestal.
- m. Establecer un mecanismo de seguimiento y control para garantizar que todas las entidades públicas, tanto del orden nacional, como territorial, deban difundir por medio de sus propios canales internos, la página web y los demás canales físicos y digitales del SUPRAC.

Parágrafo. El tratamiento de los datos suministrados por los reportantes/denunciantes deberá ajustarse a los principios de responsabilidad demostrada y necesidad, garantizando la protección de los datos personales conforme a la ley 1581 de 2012.

CAPÍTULO II.

DE LA PROTECCIÓN

ARTÍCULO 10. Criterios de priorización en la asignación de medidas de protección. La autoridad encargada de evaluar la procedencia y priorización de las medidas de protección, contempladas en la presente ley, deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia y, como mínimo, los siguientes criterios:

A. Criterios subjetivos:

1. El nivel de riesgo del reportante, denunciante o facilitador, contemplando criterios de territorialidad (situación de orden público de su lugar de origen), grupo poblacional al que pertenece. La situación de riesgo deberá tener en cuenta la existencia de un peligro específico, individualizable, preciso, determinado y cierto, que contenga una prueba si quiera sumaria que permita deducir la probabilidad razonable de lesionar de forma grave los derechos o bienes jurídicos del reportante/denunciante.
2. La existencia de conductas de acoso laboral y/o de retaliación contra el reportante, denunciante o facilitador.
3. La situación específica, respecto a los aspectos que rodean al reportante/denunciante o facilitador, tales como lugar de residencia, pertenencia a un partido político, actividad sindical, situación económica, actividad profesional, la labor que desempeña como particular o líder social, vínculos familiares, entre otros.
4. Vínculos entre denunciante y denunciado.
5. La condición de subordinación entre denunciante y denunciado cuando medie relación contractual o vínculo laboral.
6. El escenario, donde se analizan las circunstancias históricas, sociales, económicas y políticas del lugar donde parecen ocurrir los hechos.
7. Se deberá considerar la vulnerabilidad social del denunciante, entendida como la situación de riesgo o desventaja derivada de su pertenencia a grupos históricamente marginados o discriminados.

B. Criterios objetivos:

1. Trabajadores del sector privado o funcionarios del sector público que tengan acceso a información sobre presuntos hechos o actos de corrupción en un contexto contractual o laboral y lo pongan en conocimiento de la autoridad competente.
2. Los accionistas, socios individualmente considerados, administrador de hecho o de derecho, directivo, empleado o asesor y las demás personas pertenecientes al órgano de administración como asamblea general de socios, juntas directivas, comités de directivos con capacidad de decisión, incluidos los miembros no ejecutivos, voluntarios y los trabajadores en práctica que perciban o no una remuneración.
3. Cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.
4. Reportantes/denunciantes cuando comuniquen o revelen públicamente información sobre presuntos hechos o actos de corrupción obtenida en el marco de una relación laboral ya finalizada.
5. Reportantes/denunciantes que, antes de los hechos objeto de la denuncia, hayan realizado previamente reportes o denuncias sobre actos o hechos de corrupción ante la misma u otras instancias.
6. Reportantes/denunciantes con contratos de prestación de servicios con empresas o entidades contra las que denuncien actos de corrupción, cuya información haya sido obtenida en el marco del desarrollo o ejecución de su contrato.

Parágrafo. Las entidades públicas del orden nacional, departamental o municipal en las que uno de sus servidores presente denuncias o reportes de actos de corrupción sobre la propia entidad, deberán adoptar protocolos internos para prevenir prácticas de acoso laboral, hostigamiento u otras represalias en contra del reportante/denunciante.

En caso de que un reportante o denunciante reciba amenazas, la oficina de control interno disciplinario de la entidad pública deberá informar de manera inmediata al SUPRAC y a las autoridades competentes, con el fin de activar los mecanismos necesarios para garantizar su protección.

ARTÍCULO 11. Medidas Provisionales de Emergencia. En los casos de extrema urgencia, cuando se verifique que la vida y/o la integridad física de la persona reportante/denunciante y/o de su grupo familiar corre grave riesgo, se podrán otorgar medidas provisionales de apoyo de reubicación temporal, las cuales constituyen la asignación y entrega mensual al denunciante de una suma de dinero que oscilará entre uno (1) y tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, según las particularidades del grupo familiar del caso, para facilitar su asentamiento en un lugar diferente a la zona de riesgo. Esta medida de protección es complementaria a las ayudas otorgadas por otras entidades del Estado.

En los casos en que no se requiera reubicación temporal, la Secretaría Técnica otorgará medidas de protección o autoprotección, según la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

Parágrafo 1°. Las medidas provisionales de emergencia serán de carácter transitorio, y no podrán exceder los seis (6) meses, término en el cual se dará el ingreso del denunciante a un programa de protección de carácter permanente según lo establecido en el artículo 20 de la presente ley.

5. Los recursos recaudados por concepto de las multas impuestas por actos de retaliación contra reportantes o denunciantes de hechos de corrupción, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la presente ley.

Adscribese el fondo de que trata este artículo a la Procuraduría General de la Nación, entidad que se encargará de recaudar, administrar y distribuir los recursos conforme a la siguiente ordenación:

1. El 30% a la Procuraduría General de la Nación para garantizar el restablecimiento de los derechos colectivos indivisibles afectados por los actos de corrupción, y a la reparación integral pecuniaria o no pecuniaria de los afectados individuales y colectivos de los actos de corrupción.

Quienes se consideren afectados individuales o colectivos de los actos de corrupción, podrán presentar solicitudes a la Procuraduría General de la Nación para que se les considere en los procesos de restablecimiento de los derechos y en la reparación integral pecuniaria o no pecuniaria.

La Procuraduría General de la Nación deberá establecer las condiciones para garantizar la reparación pecuniaria y no pecuniaria de las víctimas a las que hubiere lugar.

2. El 20% a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que pueda adelantar las acciones de repetición y defensa de los derechos colectivos que se pretenden amparar con este capítulo.
3. El 40% al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para que, a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, se otorguen medidas provisionales a los reportantes/denunciantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción a través del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC).

Parágrafo 1°. Se reservará un porcentaje de 10% de los recursos del fondo para cubrir los gastos de administración a cargo de la Procuraduría General de la Nación. El porcentaje se ajustará cada año y corresponderá, exclusivamente, al monto necesario para pagar los gastos administrativos.

Parágrafo 2°. La Procuraduría General de la Nación deberá emitir informes estadísticos y un informe anual de la inversión y ejecución de los recursos asignados al Fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción y la reparación de los afectados por actos de corrupción.

La Procuraduría General de la Nación deberá remitir un informe anual al Congreso de la República sobre la ejecución de los recursos asignados al Fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción y la reparación de los afectados por actos de corrupción.

Parágrafo transitorio. La Procuraduría General de la Nación, reglamentará y pondrá en operación el Fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción y la reparación de los afectados por actos de corrupción, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Si transcurridos ciento veinte días (120) días calendario, no se ha resuelto la situación sobre su ingreso a un programa permanente de protección, la secretaria técnica del SUPRAC citará una reunión extraordinaria del comité rector, en el cual la entidad competente deberá llevar un informe detallado sobre las razones por las cuales no se ha resuelto la solicitud. La realización de la reunión extraordinaria deberá hacerse dentro del mes siguiente al cumplimiento de este término.

Parágrafo 2°. La resolución de la Secretaría Técnica que otorga medidas provisionales de emergencia, será remitida a las demás autoridades competentes, para efectos de su concurrencia en la protección del reportante/denunciante cuya situación sea de riesgo extremo para su vida o integridad personal. Estas entidades deberán realizar un trámite celeré y oportuno para el otorgamiento de medidas permanentes a los reportantes/denunciantes.

Parágrafo 3°. Las Medidas Provisionales de Emergencia de las que trata el presente artículo serán financiados o cofinanciados por el fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción y la reparación de los afectados por actos de corrupción, consagrado en el artículo 62 de la Ley 2195 de 2022.

El Fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción y la reparación de los afectados por actos de corrupción garantizará los mecanismos para desarrollar la trazabilidad de estos recursos.

Parágrafo 4°. En el marco del Sistema Unificado de Protección a Denunciantes por Presuntos Actos y/o Hechos de Corrupción, las medidas provisionales de emergencia podrán ser cofinanciadas con recursos de cooperación internacional.

Parágrafo 5°. Lo dispuesto en este artículo se ajustará al Marco Fiscal de Mediano Plazo.

ARTÍCULO 12. Modifíquese el artículo 62 de la Ley 2195 de 2022, el cual quedará así:

Artículo 62°. Fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción y la reparación de los afectados por actos de corrupción. Constitúyase el fondo nacional para la protección integral a los denunciantes o reportantes de presuntos actos o hechos de corrupción y la reparación de las víctimas por actos y hechos de corrupción, como un fondo cuenta destinado a otorgar medidas provisionales de protección para los denunciantes o reportantes y sus núcleos familiares, brindar acompañamiento integral y promover acciones preventivas y de fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado en la lucha contra la corrupción.

Las fuentes de financiación del fondo serán las siguientes:

1. El Presupuesto General de la Nación.
2. Los recursos que aporten las entidades públicas, de acuerdo con los convenios que se celebren al respecto.
3. Las donaciones o aportes de organizaciones internacionales o nacionales.
4. Los recaudos provenientes de las multas impuestas conforme lo establecido en los artículos 60 y 61 de la presente Ley.

ARTÍCULO 13. Protección psicológica de los reportantes/denunciante de Actos de Corrupción. El Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con la Secretaría Técnica del SUPRAC, deberá incluir en sus protocolos y guías de actuación medidas específicas para la atención psicológica prioritaria e integral de los reportantes o denunciantes de actos de corrupción y su núcleo familiar. Estas medidas deberán contemplar acciones para mitigar el riesgo psicosocial derivado del ejercicio de denuncia, garantizando en todo momento el anonimato de los solicitantes.

Parágrafo. En un plazo máximo de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio de Salud y Protección Social deberá adoptar un protocolo para la atención del riesgo psicosocial de los reportantes o denunciantes de actos de corrupción.

ARTÍCULO 14. Medidas cautelares de protección laboral. El Ministerio del Trabajo, a través de sus inspectores de trabajo y de acuerdo con el marco legal de sus competencias en materia laboral, brindará medidas cautelares de protección a los reportantes/denunciantes cuando acrediten sumariamente ser objeto de retaliación por medio de acciones como lo son los actos de acoso o actos injustificados o cualquier otra actuación encaminada a la desmejora de las condiciones laborales del reportante/denunciante como consecuencia del reporte o denuncia de un presunto acto de corrupción.

Las medidas cautelares en favor de los reportantes/denunciantes serán las siguientes:

1. La terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución del denunciante/reportante de presuntos hechos y/o actos de corrupción cuando se acredite de manera sumaria ser objeto de las conductas constitutivas de acoso laboral, así como de cualquier acto injusto o de retaliación encaminado a la desmejora de las condiciones laborales de reportante/denunciante derivados de la decisión de denunciar, que se presenten con posterioridad y como consecuencia del reporte o denuncia de un presunto acto de corrupción, carecerá de todo efecto jurídico cuando se profieran dentro de los seis (6) meses siguientes a la denuncia/reportes, siempre y cuando la autoridad competente verifique la ocurrencia de las acciones de retaliación puestas en su conocimiento.
2. Traslado de dependencia administrativa dentro de la entidad o empresa.
3. Traslado de lugar de trabajo, sede o ciudad, en condiciones laborales equivalentes o mejores.
4. Traslado del trabajador reportante/denunciante a la modalidad de teletrabajo. La determinación de la clase de teletrabajo se hará de común acuerdo con el reportante/denunciante teniendo en cuenta su situación particular y las necesidades de las actividades laborales por este desempeñadas.
5. Cualquier otra necesaria para garantizar los Derechos Laborales de los reportantes/denunciantes.

El Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes emitirá un concepto previo vinculante al Ministerio del Trabajo, quien otorgará, mediante acto administrativo debidamente motivado, las Medidas de Protección Laboral a favor del reportante/denunciante, indicando cuáles son, su pertinencia, necesidad y por cuánto tiempo se otorgan, de acuerdo con el estudio de cada caso. La respuesta deberá otorgarse, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 24 de la presente Ley.

<p>La adopción de medidas de protección laboral podrá ser aceptada o rechazada por el reportante/denunciante.</p> <p>Parágrafo 1°. La garantía contemplada en el numeral 1 del presente artículo, tendrá una duración de seis (6) meses.</p> <p>Parágrafo 2°. La protección que sea otorgada en el ejercicio del Programa deberá sujetarse a un periodo mínimo de tres (3) meses, a excepción de la contemplada en el numeral 1, la cual será objeto de revisión de los hechos que la originaron una vez al mes; le anterior para verificar si persiste la situación de riesgo que motivó la medida de protección.</p> <p>En caso de que ya no sea necesaria la medida de protección, se levantará mediante acto administrativo motivado, proferido por la autoridad competente. El periodo otorgado será modificable y renovable dentro del marco y objetivos de la presente ley.</p> <p>Parágrafo 3°. Se garantizará al reportante/denunciante, mantenerse indemne. Esta garantía no aplicará cuando la información se haya adquirido mediante la comisión de delitos, caso en el cual se aplicará el régimen penal ordinario.</p> <p>Se brindará a los reportantes/denunciante asesoría y acompañamiento jurídico especializado por parte de defensores de la Defensoría del Pueblo respecto de la aplicación de la indemnidad.</p> <p>ARTÍCULO 15. Requisitos mínimos para la protección laboral. Para la aplicación de las medidas de protección laboral descritas en el artículo anterior, el Ministerio del Trabajo deberá acreditar de manera sumaria la existencia de pruebas y evidencias que establezcan que el reportante/denunciante está siendo víctima de las conductas descritas en el artículo 2°, el artículo 7° de la Ley 1010 de 2006 y el artículo 43 de la Ley 1474 de 2011 y cualquier otro de los actos de retaliación contemplados en la presente Ley.</p> <p>ARTÍCULO 16. Medidas de protección a personas naturales sin vínculo laboral. Las personas naturales sin relación laboral, pero con relación contractual, y con los demás supuestos descritos en el artículo 2° de esta Ley, también se sujetarán a medidas de protección para salvaguardar sus derechos. Las medidas se evaluarán y aplicarán según el caso, previo análisis de la autoridad competente.</p> <p>Parágrafo 1°. El Ministerio del Trabajo o la Procuraduría General de la Nación, según sus competencias, conocerán de estas solicitudes de protección y evaluarán su procedencia, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y si: (i) persiste la necesidad institucional de continuar con esos servicios y (ii) que el contratista haya ejecutado cabalmente sus obligaciones.</p> <p>Lo anterior, para verificar la procedencia de la terminación, modificación o interpretación unilateral del contrato de aquellas personas denunciadas de presuntos hechos de corrupción, la cual solo procederá previo pronunciamiento del referido Ministerio. Esto, teniendo en cuenta la especial situación de riesgo y de las represalias de las que pueden ser víctimas los reportantes/denunciados de presuntos actos de corrupción con vínculos contractuales diferentes al laboral, tales como (i) retraso o fraccionamiento del pago de honorarios; (ii) imposibilidad de ejecución contractual por causas imputables al contratante; (iii) terminación, modificación o interpretación unilateral del contrato, con excepción de la aplicación de las cláusulas exorbitantes; (iv) inclusión en listas negras sobre la base de un acuerdo sectorial,</p>	<p>informal o formal, que pueda implicar que en el futuro la persona no pueda vincularse en determinado sector; y, (V) cualquier otro trato injustificado.</p> <p>Parágrafo 2°. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de Función Pública reglamentarán lo dispuesto en el presente artículo, en un término no mayor a seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley.</p> <p>ARTÍCULO 17. De las sanciones por retaliación contra reportantes/denunciados de actos de corrupción. Se considerará retaliación cualquier conducta que, como consecuencia de un reporte o denuncia de presuntos actos de corrupción, implique represalias injustificadas contra el reportante/denunciante por parte de superiores, pares, subalternos u otras personas dentro de la organización a la que pertenece.</p> <p>En caso de que se verifique la existencia de retaliación, se aplicarán las sanciones contempladas en la presente ley, así como las previstas en la Ley 1010 de 2006 y demás normas aplicables.</p> <p>El Juez Laboral ante el incumplimiento de las medidas cautelares por parte del empleador o contratante deberá adelantar un procedimiento sancionatorio y establecer las sanciones conforme la legislación vigente. Lo anterior, sin perjuicio de la sanción disciplinaria y/o penal a que haya lugar.</p> <p>Parágrafo 1°. Para el caso de los contratistas que tienen calidad de persona natural, de los cuales no se predica una relación laboral, se prohíbe también cualquier acto de represalias que tenga como fuente misma el hecho de haber sido denunciante de actos de corrupción con respecto a la empresa o entidad a la cual presta el servicio.</p> <p>Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo anterior, en el desarrollo de esta ley, cuando se determine que los hechos denunciados generen indicios que ameriten situaciones de sanción, los funcionarios deben hacer el traslado según las competencias en materia penal, disciplinaria, fiscal y administrativa.</p> <p>Parágrafo 3°. Para la resolución de las disputas por reparación y compensación económica del denunciante de actos de corrupción por los daños generados por el acto de retaliación, se priorizará el uso de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. El reportante/denunciante tendrá el derecho de optar por la reparación y compensación económica mediante el Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos.</p> <p>Las denuncias o reportes por los casos de retaliación contemplados en la presente ley no requerirán surtir trámite previo ante los comités de empresa.</p> <p>Los empleadores deberán adoptar en sus políticas internas los requerimientos de la presente ley, dentro de los tres (3) meses siguientes a su promulgación, y su incumplimiento será sancionado por el Ministerio del Trabajo.</p> <p>ARTÍCULO 18. Tratamiento sancionatorio de la retaliación ante denuncias o reportes de corrupción. Las conductas de retaliación contra un trabajador, motivadas por la presentación de una denuncia o reporte de presuntos actos de corrupción, serán sancionadas cuando se encuentren debidamente acreditadas así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, cuando su autor sea un servidor público.
<ol style="list-style-type: none"> 2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador. En tal caso procede la indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. 3. Con sanción de multa entre diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la persona que realice la conducta, diferente del empleador. 4. Con sanción de multa entre cien (100) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el empleador que realice la conducta o tolere el actuar de otros trabajadores. 5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador, particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo. 6. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, según la gravedad de los hechos, cuando la conducta retaliatoria sea ejercida por un compañero de trabajo o un subalterno. <p>Para imponer las sanciones previstas en este artículo, se tomará en cuenta los siguientes criterios de graduación de la sanción:</p> <p>CRITERIOS ATENUANTES:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuir o anular sus consecuencias. b. Reparar, discrecionalmente, el daño ocasionado, aunque no sea en forma total. <p>CRITERIOS AGRAVANTES:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reiteración de la conducta. b. Cuando exista concurrencia de causales. c. Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. d. El ocultamiento o el aprovechamiento de condiciones de tiempo, modo y lugar, que dificulten la defensa del ofendido, o la identificación del autor y/o participe. e. Aumentar deliberada e inhumanamente el daño psíquico y biológico causado al sujeto pasivo. f. La posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, por su cargo, rango económico, posición en el mercado, ilustración, poder, oficio o dignidad. g. Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable. h. Cuando la conducta desplegada por el sujeto activo causa un daño en la salud física o psíquica al sujeto pasivo. i. La gravedad del acto y/o hecho de corrupción y el grado de vinculación de la persona con el acto y/o hecho de corrupción. j. La importancia de la afectación ocasionada al trabajador. <p>Parágrafo 1°. Los dineros provenientes de las multas impuestas se destinarán a financiar al Fondo para la protección de denunciados y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción y la reparación de los afectados por actos de corrupción, de la Ley 2195 de 2022.</p> <p>Parágrafo 2°. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por conductas constitutivas de acoso laboral, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, trabajador o contratista, siempre y cuando existan serios indicios de actitudes retaliatorias en contra de la posible víctima.</p>	<p>Parágrafo 3°. La suspensión provisional de servidores públicos de elección popular deberá realizarse por el juez competente.</p> <p>ARTÍCULO 19. Competencia y procedimiento sancionatorio de la retaliación ante denuncias y reportes de corrupción. Corresponde a los jueces laborales con competencia en el lugar de los hechos adoptar las medidas sancionatorias que prevé el artículo 18 de la presente ley, cuando las víctimas sean trabajadores o empleados particulares.</p> <p>En estos eventos, el juez laboral citará a audiencia, la cual tendrá lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la solicitud o queja. De la iniciación del procedimiento se notificará personalmente al acusado de las conductas retaliatorias y al empleador que lo haya tolerado, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud o queja. Las pruebas se practicarán antes de la audiencia o dentro de ella. La decisión se proferirá al finalizar la audiencia, a la cual sólo podrán asistir las partes y los testigos o peritos. Contra la decisión que ponga fin a esta actuación procederá el recurso de apelación, que se decidirá en los treinta (30) días siguientes a su interposición. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Procesal del Trabajo.</p> <p>Cuando la víctima sea un servidor público, la competencia para conocer de la falta disciplinaria corresponde al Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, conforme a las competencias y procedimiento que señala la Ley 1952 de 2019, o aquella que la modifique o sustituya. Lo anterior sin perjuicio de las faltas penales, fiscales o administrativas a las que haya lugar.</p> <p>Parágrafo. El juez podrá comisionar al inspector del trabajo para verificar el cumplimiento de las medidas cautelares, quien deberá habilitar un canal ágil de comunicación para que la presunta víctima informe posibles actos de retaliación.</p> <p>ARTÍCULO 20. De la Protección a la vida, integridad y seguridad personal. Las entidades de orden nacional y territorial que tengan dentro de su competencia la ejecución de programas de protección a personas naturales en situación de riesgo a la vida, integridad y seguridad personal, atenderán con celeridad y debida diligencia los casos trasladados por la Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciados de Actos de Corrupción (SUPRAC).</p> <p>Los Reportantes/Denunciados de actos y/o hechos de corrupción que presuntamente se encuentren en situación de riesgo serán incluidos en el Programa de Protección de la Unidad Nacional de Protección, siguiendo la reglamentación para la protección de personas en situación de riesgo. Por ende, tendrán protección especial y tratamiento prioritario para acceder a mecanismos de protección necesarios para salvaguardar su seguridad e integridad.</p> <p>La Unidad Nacional de Protección, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, adoptará y socializará una ruta de atención especial para las personas que realicen denuncias o reportes de presuntos hechos y/o actos de corrupción, y definirá el plazo máximo para el traslado de los casos al programa de protección de testigos de la Fiscalía que permita la revisión y respuesta ágil y oportuna de las situaciones de riesgo de las personas objeto de la presente ley.</p> <p>Si el reportante/denunciante adquiere la calidad de testigo por su participación en un proceso penal derivado de su reporte, la protección será competencia de la Fiscalía General de la</p>

<p>Nación de acuerdo con el artículo 67 de la Ley 418 de 1997 y las normas que la modifiquen, entidad que aplicará su régimen legal para tal fin. La Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) continuará realizando el seguimiento y monitoreo del estado la situación de riesgo del reportante/denunciante para asegurar que cuente con las garantías necesarias para el ejercicio de sus derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad personal, así como el derecho al trabajo, y las garantías laborales, económicas y el libre desarrollo de la personalidad.</p> <p>Parágrafo. Para la realización del traslado de competencia al Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación del que trata el cuarto inciso del presente artículo, la entidad responsable tendrá cinco (5) días hábiles para dicho trámite.</p> <p>ARTÍCULO 21. Del reporte o denuncia anónimos. Los canales de denuncia de actos y/o hechos de corrupción deben incluir medios tecnológicos que permitan la denuncia anónima y denuncia con protección de identidad, siguiendo el procedimiento dispuesto para tal fin en el artículo 22 de la presente ley.</p> <p>Parágrafo 1°. El reporte o denuncia anónima se registrará de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 de la Ley 906 de 2004 o por la norma que lo modifique o adicione.</p> <p>En ningún evento, las entidades receptoras podrán negarse a recibir reportes o denuncias anónimas, para lo anterior, el reportante/denunciante debe suministrar evidencia o datos concretos que permitan encauzar una investigación.</p> <p>Parágrafo 2°. La información y datos personales del denunciante sólo podrá ser revelada bajo su consentimiento previo, expreso, informado y por escrito separado o por orden judicial, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 para la protección de datos personales.</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO III DEL PROCEDIMIENTO.</p> <p>ARTÍCULO 22. Procedimiento para la solicitud de protección. Las solicitudes de protección se presentarán de acuerdo con los siguientes criterios:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se presentarán de manera conjunta con el reporte o denuncia ante los canales dispuestos en el artículo 3° de la presente ley, o de forma posterior ante la Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC). La solicitud de protección podrá presentarse de forma verbal o por escrito, por correo electrónico, teléfono o cualquier otro medio físico o virtual, y deberá manifestar de forma expresa, clara e inequívoca la voluntad de ser beneficiario de las Medidas de Protección. La Secretaría Técnica del SUPRAC podrá determinar si el conocimiento de actos y/o hechos de corrupción amerita el estudio de medidas de protección a reportantes/denunciantes por parte de las entidades competentes, por lo cual podrán contactarse con el reportante/denunciante a efectos de determinar su voluntad de acceder a las medidas contempladas en la presente Ley. Las entidades que reciban la denuncia y solicitud de protección por parte del reportante/denunciante deberán dar traslado a la Secretaría Técnica del SUPRAC de la mencionada solicitud de protección, dentro de las 72 horas siguientes a la recepción, junto 	<p>con el análisis y reporte del caso, incluyendo el detalle de los riesgos específicos del denunciante. La Secretaría Técnica del SUPRAC garantizará la confidencialidad y anonimato del denunciante.</p> <ol style="list-style-type: none"> En el reglamento interno del SUPRAC se deberá establecer y ofrecer los canales y métodos físicos y virtuales, para presentar denuncias y solicitudes de protección al reportante/denunciante por presuntos hechos o actos de corrupción en los que se pueda especificar de forma fácil y concreta la descripción de los hechos y las condiciones modo, tiempo y lugar de su ocurrencia. En ningún caso podrá negarse el estudio de la solicitud con fundamento en la omisión de los requisitos formales. La Secretaría técnica del SUPRAC, mediante acto administrativo motivado, dará respuesta al ciudadano sobre el resultado del trámite y las Medidas de Protección adoptadas o rechazadas, en un término de cinco (5) días calendario contados a partir de la recepción de la solicitud de protección, el cual es susceptible del recurso de reposición. <p>Parágrafo 1°. Lo anterior, sin perjuicio de los demás canales establecidos por las autoridades competentes para radicación de denuncias de presuntos hechos de corrupción.</p> <p>Parágrafo 2°. El funcionario receptor de la denuncia o reporte deberá informar al denunciante de sus derechos, los procedimientos correspondientes para garantizar su protección, así como las medidas de protección de las que puede ser beneficiario y las entidades a las que puede acudir. Debe existir constancia que se otorgó esta información.</p> <p>Parágrafo 3°. Es deber del funcionario de la Secretaría Técnica del SUPRAC hacer seguimiento efectivo de las medidas de protección y denuncias recibidas y tramitadas, transmitiéndole al reportante/denunciante, de manera oportuna y actualizada, la información de los avances y resultados de la solicitud.</p> <p>Parágrafo 4°. Los formularios de denuncia deberán permitir, de forma voluntaria, que el denunciante incluya información sobre su pertenencia a grupos de especial protección constitucional, con el fin de aplicar un enfoque diferencial en el trámite y seguimiento del caso. Asimismo, deberán incorporar las disposiciones sobre tratamiento de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012 o la normativa que la sustituya.</p> <p>ARTÍCULO 23°. Terminación de las medidas de protección. La terminación de la medida de protección al reportante/denunciante por actos y/o hechos de corrupción, iniciará una vez la autoridad competente determine el cese definitivo o terminación de las amenazas contra los derechos fundamentales del denunciante, la persona natural que funja como facilitador y/o la de su núcleo familiar, así como los derechos laborales, libre desarrollo de la personalidad, lo que conlleva al análisis social y probatorio del mismo, el cual deberá hacerse mediante un estudio final de terminación de medidas y un acto administrativo motivado de acuerdo con el procedimiento administrativo ordinario de la Ley 1437 de 2011. Una vez terminadas las medidas de protección, la autoridad competente tendrá la obligación de suministrar un canal de fácil comunicación para que el reportante/denunciante, la persona natural que funja como facilitador o alguien de su núcleo familiar pueda reportar nuevas amenazas, para activar el procedimiento contemplado en la presente ley y realizar el adecuado monitoreo.</p> <p>ARTÍCULO 24. Procedimiento de Protección Laboral y a la vida e Integridad Personal. La ruta para la solicitud y otorgamiento de las Medidas de Protección solicitadas será la siguiente:</p>
<p>Procedimiento de protección a la vida e integridad personal:</p> <ol style="list-style-type: none"> El reportante/denunciante podrá solicitar directamente la protección a la Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) o a la autoridad competente ante la que se presente la denuncia o reporte del presunto hecho o acto de corrupción. En el primer caso, la Secretaría Técnica del SUPRAC, en un plazo de 72 horas, deberá remitir la solicitud de protección a la autoridad competente con los respectivos soportes, previa revisión del cumplimiento de los criterios objetivos y subjetivos establecidos en los literales a) y b) del artículo 10 de la presente ley. La Secretaría Técnica del SUPRAC remitirá la solicitud a las entidades encargadas, así: Medidas de protección a la vida, integridad y seguridad personal, a las entidades de orden nacional y territorial que tengan dentro de su competencia la ejecución de programas de protección. Las entidades encargadas de brindar las Medidas de Protección adelantarán las evaluaciones técnicas pertinentes y determinarán qué Medidas de Protección se brindan y por cuánto tiempo. Estas medidas pueden cambiar, ser ajustadas, prolongadas o finalizadas de acuerdo con el nivel de riesgo que se derive del avance de las investigaciones o por el incumplimiento de las obligaciones suscritas mediante acta de compromiso por parte de la persona protegida. Las entidades encargadas de brindar las Medidas de Protección informarán de ello a la Secretaría Técnica del SUPRAC y ésta a su vez notificará la decisión al reportante/denunciante. Los tiempos de respuesta a las solicitudes de protección serán los determinados en esta Ley, procurando siempre preservar los derechos del solicitante de manera ágil y oportuna. <p>Procedimiento de protección laboral y a personas sin vínculo laboral:</p> <ol style="list-style-type: none"> El reportante/denunciante podrá solicitar directamente la protección a la Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) o a la autoridad competente ante la que se presente la denuncia o reporte del presunto hecho o acto de corrupción. Las autoridades competentes deben remitir la solicitud de protección en materia laboral y a personas sin vínculo laboral al Ministerio del Trabajo o a la Procuraduría General de la Nación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción con los respectivos soportes. El Ministerio del Trabajo decidirá sobre la adopción de las Medidas de Protección Laboral y Medidas de Protección a Personas Naturales sin Vínculo Laboral respecto de los vínculos contractuales del sector privado, previo concepto del Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción - SUPRAC. La Procuraduría General de la Nación decidirá sobre la adopción de las Medidas de Protección Laboral y Medidas de Protección a Personas Naturales sin Vínculo Laboral respecto de los vínculos contractuales del sector público, previo concepto del Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción - SUPRAC. La autoridad competente deberá emitir acto administrativo que decida sobre la valoración de la protección dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su recepción. Para ello, el Comité Rector del SUPRAC elaborará un estudio previo sobre la solicitud, que será puesto en conocimiento de la autoridad competente con anterioridad a la adopción de la decisión sobre las medidas de protección. 	<ol style="list-style-type: none"> Para la adopción de medidas de protección, se concederá un término de tres (3) días calendario, al empleador o contratante, para que se pronuncie sobre los hechos y pruebas que soportan la solicitud de protección. <p>Parágrafo 1°. Durante todo el procedimiento de protección laboral y a la integridad personal, las entidades deberán garantizar la reserva de la identidad de las personas destinatarias de las medidas de protección y de la información que constitucional y legalmente sea considerada como reservada y clasificada, de conformidad a lo reglado por la Ley 1581 de 2012 y la Ley 1712 de 2014.</p> <p>Parágrafo 2°. Los funcionarios del Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General de la Nación que participen en el Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción - SUPRAC, no podrán participar en la adopción de las medidas de protección laboral y a personas sin vínculo laboral.</p> <p>ARTÍCULO 25. Priorización y Medidas de Protección a grupos de especial protección constitucional. En la evaluación del riesgo y definición de medidas de protección previstas en esta ley, las autoridades competentes deberán considerar la situación particular del reportante/denunciante.</p> <p>El Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción – SUPRAC deberá desarrollar lo dispuesto en el presente artículo dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley. Para ello, deberá adoptar criterios que reconozcan las particularidades de las poblaciones con especial protección constitucional y se ajusten a los estándares internacionales en materia de protección a denunciantes.</p> <p>Parágrafo 1°. No será requisito pertenecer a un grupo priorizado para acceder a las medidas de protección. Ningún reportante o denunciante podrá ser excluido por no formar parte de los sectores aquí señalados.</p> <p>Parágrafo 2°. La Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) dará respuesta a las peticiones de medidas de protección de emergencia en el término de tres (3) días calendario, si la persona pertenece a las siguientes categorías de sujetos de protección:</p> <ol style="list-style-type: none"> Las personas que ejerzan el oficio del periodismo en sus diferentes modalidades. Los líderes, líderes, defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo los de derechos ambientales. Las personas naturales que, por su formación académica, profesión u oficio sea de carácter dependiente o independiente al campo de acción y que, dentro de sus actividades, giro normal de sus negocios o labores y como producto de estas encuentren hallazgos y revelen presuntos actos de corrupción. Entre las profesiones u oficios se encuentran, pero no se limitan a, revisores fiscales, jefes de control interno, auditores, auditores forenses, auditores financieros, oficiales de transparencia, oficiales de cumplimiento, interventores de obra, supervisores de obra, peritos contables y financieros, veedores ciudadanos, entre otros. <p>Parágrafo 3°. Los funcionarios del Comité Rector del SUPRAC y de su Secretaría Técnica deberán recibir capacitaciones anuales obligatorias en atención a los grupos de especial protección constitucional.</p>

Parágrafo 4°. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las competencias de la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación u otras autoridades competentes en materia de protección.

ARTÍCULO 26°. El Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) deberá garantizar la protección a los reportantes/denunciantes que soliciten reserva de su identidad y demás datos sensibles, a través del siguiente procedimiento:

- a. Las denuncias presentadas con reserva de identidad serán registradas con un código numérico especial que identifique al reportante/denunciante.
- b. Se mantendrá un registro cronológico de las personas que intervengan en el trámite de las denuncias presentadas con reserva de identidad, quedando impedidas de divulgar cualquier información relacionada con la identidad de los Reportantes/Denunciantes.

**CAPÍTULO IV
RESTRICCIONES A LA APLICACIÓN DE LA LEY Y EFECTOS DE LA MALA FE.**

ARTÍCULO 27°. Personas que no podrán beneficiarse de una medida de protección. Quedarán excluidas de la posibilidad de acceder a cualquier medida de protección establecida en esta Ley, no sólo debido al incumplimiento de los requisitos necesarios, sino también en virtud de las siguientes circunstancias:

1. El reportante/denunciante que haya incumplido de manera reiterada los compromisos suscritos con las entidades encargadas de brindar las Medidas de Protección del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC).
2. Quien denuncie una conducta de corrupción que ya fue investigada y sobre la cual ya se tomó una decisión judicial definitiva sin aportar elementos nuevos de prueba.
3. El reportante/denunciante que haya presentado pruebas falsas, alterando información o actuado de manera dolosa con el fin de perjudicar a un tercero, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de esta ley.
4. El que realice denuncias carentes de pruebas ante las entidades encargadas de brindar las Medidas de Protección del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC), lo que deberá ponerse en conocimiento de las autoridades competentes para la correspondiente investigación.

La exclusión de la posibilidad de acceder a las medidas de protección contempladas en la presente Ley deberá profirirse mediante acto administrativo motivado, que garantice un procedimiento con derecho a la defensa y contradicción del reportante/denunciante, en el cual procederá el recurso de reposición.

Parágrafo. Si un reportante/denunciante excluido de la protección considera que la decisión fue injusta, podrá solicitar una revisión ante las instancias judiciales pertinentes.

ARTÍCULO 28°. Efectos de la denuncia de mala fe. Se entenderá como reportante/denunciante de mala fe, a quien ponga en conocimiento de la autoridad receptora

dentro del marco de sus competencias descritas en los criterios de la presente ley, actos y/o hechos que se constituyan como presunta corrupción a sabiendas que los actos no son de posible ocurrencia, o con simulación de pruebas con el fin de iniciar un proceso de investigación administrativa, disciplinaria y/o penal, a sabiendas de que los hechos no ocurrieron, no constituían actos de corrupción o basados en elementos con vocación probatoria que falten a la verdad.

La condición de mala fe atenderá a una valoración objetiva de las pruebas con las que se sustentó la denuncia. En caso de encontrarse indicios de la comisión de alguna de las circunstancias de mala fe, se procederá con la investigación por falsa denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Procuraduría General de la Nación.

En caso de encontrarse indicios que evidencien la mala fe del reportante/denunciante, la Secretaría Técnica del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción - SUPRAC dará traslado a las autoridades competentes para evaluar la procedencia del proceso para la reintegración de los aportes monetarios que el Sistema le haya otorgado al denunciante de mala fe y los demás perjuicios económicos generados por esta denuncia.

El 40% de los recursos recaudados mediante estos procesos se destinará al Fondo para la protección de denunciantes y reportantes de presuntos actos y/o hechos de corrupción. Este fondo estará a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Transparencia, y será utilizado para la implementación de las medidas provisionales de emergencia previstas en la presente ley.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, la falsa denuncia o denuncia de mala fe será trasladada por la secretaría técnica de SUPRAC para que sea investigada y sancionada de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I del Título XVI de la Ley 599 de 2000. Igualmente dará traslado a la Procuraduría General de la Nación para el caso de los funcionarios públicos.

**CAPÍTULO V
DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN.**

ARTÍCULO 29°. Información relativa a la recepción y seguimiento de denuncias. Las entidades del orden nacional y territorial tendrán la obligación de promocionar la lucha contra corrupción bajo los parámetros de esta Ley, por lo que deben publicar en sus sitios web y demás canales de comunicación oficiales, en una sección separada, fácilmente identificable y accesible, como mínimo la siguiente información:

- a. Los procedimientos y medidas disponibles para reportar/denunciar casos de corrupción, la protección frente a represalias y los derechos de la persona afectada. Las condiciones para acogerse a la protección de reportante/denunciante.
- b. Las rutas de atención y medidas de protección por situaciones de riesgo generadas por denuncias o reportes de presuntos hechos y/o actos de corrupción.
- c. Los datos de contacto para los canales de reporte/denuncia de las autoridades competentes, como son, direcciones de correo electrónico, y números de teléfono para dichos canales, los cuales deberán ser actualizados trimestralmente.
- d. Los procedimientos y términos aplicables para el trámite del reporte/denuncia de presuntos actos o hechos de corrupción.

ARTÍCULO 30. Medidas de comunicación y cultura de la integridad y la lucha contra la corrupción. El Comité Rector del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción – SUPRAC, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, implementarán una estrategia para visibilizar las consecuencias negativas de la corrupción y de los actos de amenaza y retaliación contra aquellas personas que denuncien o reporten de estas situaciones

Para ello, se podrán vincular las empresas del sector privado, especialmente aquellas que contraten con el Estado o presten servicios públicos, con la finalidad de que incluyan en sus programas de Responsabilidad Social Empresarial componentes específicos para la lucha contra la corrupción y la recepción de las denuncias y/o reportes de estas situaciones en armonía con la Ley 2195 de 2022.

ARTÍCULO 31. Compromiso de Reserva. Los servidores públicos de las Entidades que intervengan en la recepción o manejo de información relacionada con reportantes/denunciantes de presuntos hechos de corrupción y que de manera indebida divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, utilicen, comuniquen, publiquen, permitan el acceso o realicen cualquier conducta que facilite el uso no autorizado de dicha información o documentación, incurrirán en falta disciplinaria por causal de mala conducta, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan.

Las autoridades receptoras, los integrantes y miembros del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC) y entidades que gestionen reportes o denuncias por presuntos actos de corrupción deberán garantizar la reserva de la información personal o sensible del reportante o denunciante, la cual sólo podrá ser tratada por personal autorizado y divulgada con su consentimiento expreso o por orden judicial, conforme a la Ley 1581 de 2012 y sus disposiciones complementarias. Además, los miembros del SUPRAC que accedan a dicha información deberán suscribir, al momento de su vinculación, una cláusula expresa de confidencialidad que refuerce su deber de reserva.

Parágrafo 1°. Las entidades involucradas en la recepción o tratamiento de información relacionada con reportantes/denunciantes de presuntos hechos de corrupción, deberán tomar todas las medidas necesarias para impedir que sus miembros copien, porten, reproduzcan, almacenen, manipulen, divulguen o suministren cualquier tipo de información sensible relacionada con los reportantes/denunciantes de presuntos hechos de corrupción.

Parágrafo 2°. Las entidades involucradas en la recepción o tratamiento de la información relacionada con reportantes/denunciantes de presuntos hechos de corrupción, deberán garantizar la sostenibilidad técnica, presupuestal, de seguridad y ciberseguridad de los aplicativos, servidores, programas, sistemas de información y bases de datos que empleen para el almacenamiento y administración de la información y datos sensibles relacionada con los reportantes/denunciantes de presuntos hechos de corrupción.

Adicionalmente, las entidades deberán establecer mecanismos de monitoreo y auditorías periódicas de los aplicativos, servidores, programas, sistemas de información y bases de datos para identificar fallos y vulnerabilidades que puedan afectar el almacenamiento y administración de la información. Lo presente será reglamentado durante los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, por parte del Gobierno Nacional.

- e. El régimen de confidencialidad y anonimato aplicable a los reportes/denuncias y el tratamiento de datos personales será de conformidad a lo establecido por la Ley 1581 de 2012, el cual garantizará la reserva de los datos.
- f. Los procedimientos y recursos procedentes con respecto a la solicitud de medidas de protección ante represalias y disponibilidad de asesoramiento confidencial para las personas que contemplen reportar/denunciar.
- g. Explicar el alcance de la figura de indemnidad del reportante/denunciante de buena fe, cuando en la formulación del reporte/denuncia se expongan secretos profesionales o comerciales violando cláusulas de confidencialidad contractual.
- h. Los datos de información del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC).

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo anterior las entidades del orden nacional y territorial diseñarán e implementarán campañas de pedagogía, asesoramiento y promoción de la lucha contra la corrupción y los sistemas y procedimientos de protección de reportante/denunciante dispuestos en esta Ley con el objetivo de orientar y acompañar a la ciudadanía sobre los mecanismos de denuncia o reporte y las medidas de protección, asegurando la difusión y divulgación permanente y periódica de la presente ley.

Las entidades del orden nacional y territorial deberán capacitar a sus funcionarios sobre la importancia de la lucha contra la corrupción, la reporte/denuncia de actos y/o hechos de corrupción y los canales y mecanismos disponibles para la protección del reportante/denunciante, así como de las medidas de confidencialidad, tratamiento de datos personales y seguridad frente a la información.

Parágrafo 2°. Las entidades del orden nacional y territorial deben adoptar medidas para el mejoramiento, modernización y actualización de sus canales de reporte/denuncia de actos y/o hechos de corrupción, en consonancia con las buenas prácticas y recomendaciones del SUPRAC, garantizando la denuncia anónima y la denuncia con protección de identidad o confidencial.

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República o quien haga sus veces, en el marco de sus competencias y en el término de seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, adoptará los lineamientos para la unificación de los canales de denuncia de corrupción en el país y la estandarización del tratamiento de la información.

Parágrafo 3°. Las entidades y demás sujetos obligados en el presente artículo, deberán proporcionar una versión pedagógica de fácil lectura de lo reglamentado en este artículo, que garantice el control social y la accesibilidad de la información a toda la ciudadanía.

Adicionalmente, las entidades receptoras de denuncias publicarán informes semestrales sobre la gestión de casos, incluyendo estadísticas anónimas sobre denuncias recibidas, investigaciones iniciadas, resultados obtenidos, tiempos de respuesta y efectividad de las medidas de protección implementadas, garantizando la reserva y confidencialidad de la información.

Parágrafo 4°. Las entidades del orden nacional y territorial, así como cualquier entidad receptora de denuncias por presunta corrupción, establecerán parámetros de comunicación y retroalimentación claros dirigidos a quienes soliciten medidas de protección, los cuales tendrán que ser asertivos, pedagógicos y periódicos.

Parágrafo 5°. Coordinación Interinstitucional. Las entidades públicas deberán establecer protocolos de coordinación interinstitucional para la gestión eficiente de denuncias, la protección de denunciantes y la investigación de hechos denunciados, incluyendo la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo.

La presente obligación también será responsabilidad de la entidad encargada de administrar la página web del SUPRAC.

Parágrafo 3°. Las autoridades y demás sujetos obligados deberán adecuar sus sistemas y canales de reporte/denuncia de actos y/o hechos de corrupción para garantizar la denuncia anónima y con reserva de identidad del denunciante.

Parágrafo 4°. Los funcionarios integrantes del Comité Rector del SUPRAC y de la Secretaría Técnica, deberán tener capacitaciones anuales obligatorias sobre el manejo y confidencialidad de la información relacionada con los denunciantes/reportantes.

ARTÍCULO 32. Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,



CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN
Senadora de la República
Coalición Pacto Histórico